

2014

## De paracos a bacrim. Desmovilización, reestructuración y víctimas en Colombia

Jennyferd Usma Rodríguez  
*Universidad de La Salle, Bogotá*

Sandra Trejos Salazar  
*Universidad de La Salle, Bogotá*

Linda Muñoz Gallego  
*Universidad de La Salle, Bogotá*

Sara Martínez Yepes  
*Universidad de La Salle, Bogotá*

Follow this and additional works at: [https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo\\_social](https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo_social)



Part of the [Social Work Commons](#)

---

### Citación recomendada

Usma Rodríguez, J., Trejos Salazar, S., Muñoz Gallego, L., & Martínez Yepes, S. (2014). De paracos a bacrim. Desmovilización, reestructuración y víctimas en Colombia. Retrieved from [https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo\\_social/305](https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo_social/305)

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Departamento de Estudios Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Trabajo Social by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact [ciencia@lasalle.edu.co](mailto:ciencia@lasalle.edu.co).

**De Paracos a Bacrim:  
Desmovilización, reestructuración y víctimas en Colombia**

**Ensayo Temático de Grado Para optar al título en  
Trabajo Social**

**Elaboraron**

**Jennyferd Usma Rodríguez – 62091054**

**Sandra Trejos Salazar – 62091035**

**Linda Muñoz Gallego - 62091053**

**Sara Martínez Yepes - 62091069**

**Asesor: Wilson Mellizo**



**Universidad De La Salle**

**Facultad de Ciencias Económicas y Sociales**

**Programa de Trabajo Social**

**Línea: Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático**

**Bogotá - 2014**

## Tabla de Contenido

<b>Documento 1: Plan de ensayo.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Titulo.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Tesis.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Propósito del ensayo.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Lectores potenciales.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Estructura del ensayo.....</b>	<b>6</b>
<b>6. Herramientas metodológicas.....</b>	<b>8</b>
 <b>Documento 2: Ensayo.....</b>	 <b>1</b>
<b>1.Trayectoria del fenómeno paramilitar en Colombia.....</b>	<b>7</b>
<b>1.1 Orígenes del paramilitarismo: “¿En qué momento se rejodió Colombia?.....</b>	<b>7</b>
<b>1.2 Proceso de desmovilización en Santafe de ralito: “La Colombia del acuerdo para”.....</b>	<b>27</b>
<b>1.3 Reorganizacion del fenomeno paramilitar: Bandas criminales, la nueva cara paramilitar.....</b>	<b>34</b>
 <b>2. Víctimas del paramilitarismo en la prensa: análisis desde El Espectador (2006 – 2007).....</b>	 <b>46</b>
<b>2.1 Ley de Justicia y Paz (975 de 2005): el Manual de Trampas.....</b>	<b>49</b>
<b>2.2 Estereotipos sociales sobre las víctimas: “Flojos” y “acomodones” por culpa de “papá Estado”.....</b>	<b>59</b>
<b>2.3 Las luchas organizativas como fuente de reconocimiento y construcción de identidad colectiva: “Yolanda solo quería que se hiciera justicia” .....</b>	<b>63</b>
 <b>3. A modo de conclusiones.....</b>	 <b>68</b>
<b>4. Anexos.....</b>	<b>75</b>
<b>4.1. Glosario.....</b>	<b>75</b>
<b>5. Referencias Bibliográficas.....</b>	<b>79</b>

## Plan de Ensayo

### Título

De paracos a bacrim: desmovilización, reorganización y el papel de las víctimas

### Tesis

Abordar la historia de un país es complejo, de esta característica no se escapa Colombia, principalmente porque está compuesta por diversas dimensiones (cultural, política, económica, social, etc.), además en ella se entrelazan intereses y los hechos históricos se narran desde diferentes perspectivas, una de ellas y es foco de este ensayo es la de la de los medios de comunicación, que juegan un importante papel en la construcción del poder y sobre lo que es posible conjeturar que pueden informar estratégicamente de modo que se favorezca la uniformidad de pensamiento, desconociendo aspectos relevantes de los momentos noticiosos, así mismo es posible que otorguen diferentes nombres que disfracen realidades o muestren perspectivas lineales no alternativas sobre algún evento, como en el caso del fenómeno paramilitar, sus víctimas y la coincidente emergencia de las Bacrim, luego del proceso de desmovilización, esto último ha generado bastante interés en el grupo investigador por lo que se profundizará durante el ensayo sobre este tema.

Con el respaldo de los datos recopilados y el análisis realizado sobre los mismos es viable aventurarse a decir que estas bandas se muestran como ‘residuos’ del paramilitarismo en la agenda política del país, por lo que son objeto de presentación en los diferentes medios de comunicación donde se han relacionado con delincuencia común en algunos casos desvinculada del fenómeno paramilitar. Por lo tanto, desde esta investigación<sup>1</sup> se plantea que Las bandas criminales, aunque con algunas

---

<sup>1</sup> La investigación que dio como resultado la escritura de este ensayo es eminentemente cualitativa, en este proceso se realizó un acercamiento al fenómeno del paramilitarismo, posterior paso a Bacrim y las víctimas de estos actores, desde diversas fuentes documentales en las que se incluye el periódico El Espectador. Sobre la información recolectada se generaron diversas reflexiones que se verán plasmadas a lo largo del Ensayo.

mutaciones, aún son grupos paramilitares, pero, los medios de comunicación en su legítimo derecho de informar desde sus perspectiva han presentado la información de una forma que para el grupo investigador tiene el fin de favorecer o responder ante determinados intereses, exhibiendo una idea de país distanciada de otras realidades.

### **Propósito del Ensayo**

El propósito de este ensayo parte de que, la comunicación es natural en los seres humanos, como un proceso simbólico en el que entrelaza el lenguaje con la emocionalidad y da sentido a la existencia humana de acuerdo a lo propuesto por Maturana (1992). El proceso comunicativo se desarrolla en lo que Echeverría (2003) ha denominado conversaciones, que puede equipararse a la relación existente entre dos o más entidades, de esta forma se puede decir que el diario El Espectador se erige como una entidad colectiva que se asume como una empresa, “las empresas son agentes de acción y en cuanto tales, se vuelven socialmente responsables de sus acciones” (Echeverría, 2003, pág. 147 ), las cuales entablan una *conversación* con el público y por lo tanto aporta su propia noción a la conversación.

La prensa como *empresa comercial* (Barbero, 1991, pág.166) se orienta a grandes públicos, con bajos costos, y se concentra en la competencia, además tiene la capacidad de recoger información directamente en los lugares donde no todos pueden estar ; por lo anterior, se puede afirmar, que en cierta parte tienen la responsabilidad de informar verazmente y desde distintas lógicas sobre los sucesos, en el panorama nacional e internacional; sin embargo, su difusión se ve condicionada por los intereses de quien trasmite: primero, por los datos que divulga o que excluye; segundo, la forma en la que muestra a los actores de la noticia juzgando sus acciones o justificándolas y, finalmente, la utilización del lenguaje para referirse a los acontecimientos que puede ayudar a esclarecer o dificultar la comprensión de dichos sucesos.

El éxito de la prensa refiere a la importancia de los temas acerca de los cuales publique, para Colombia el conflicto armado es un tema que atraviesa dimensiones importantes tal como la política que es esencial en el ser humano, y se ha convertido en recurrente incluso cotidiano, es por esto que el diario El Espectador es participe también de esta estrategia.

Ahora bien, dicho conflicto inició desde hace más de cinco décadas, en el cual los paramilitares son solo uno de los diversos actores y partícipes. Por sus orígenes, desarrollo y por su relación con el narcotráfico, así como por sus relaciones con algunos gobiernos y estamentos políticos, económicos, religiosos e institucionales, este fenómeno ha convertido en víctima de su aberrante violencia a gran parte de la población civil colombiana. Igualmente, esta organización ha experimentado procesos de transformación constante, incluso tras su ‘desmovilización’ en 2005, después de la cual ha resurgido con una nueva denominación, Bandas Criminales (Bacrim), neologismo acuñado para referirse a este fenómeno. Por ello, es interés de este ensayo reflexionar sobre los giros, rupturas y continuidades entre paramilitarismo y Bacrim.

Es entonces que para el estudio del fenómeno paramilitar, se acude a la revisión documental por ser una técnica de la investigación social que se encarga de la recolección, clasificación, selección y análisis de información. Esta técnica según Rodríguez & Valdeoriola (S.F) permite delimitar con mayor precisión el objeto de estudio, establecer la importancia de la investigación que se pretende desarrollar, además de comparar y sustentar los resultados con otros estudios similares. Estos autores retoman a Amador (1998) quien considera que el proceso de revisión documental está comprendido por la consulta documental, el contraste de la información y el análisis histórico del problema.

Con lo anterior y con la intención de abordar el tema del paramilitarismo de tanto interés en Trabajo Social y en otras profesiones, desde un enfoque cualitativo-crítico, el grupo investigador recurrió a los medios de comunicación y específicamente al periódico El Espectador, en el periodo de junio de 2006 a junio de 2007, para analizar la información emitida frente a este fenómeno y la afectación que esta implica para las víctimas. Para dicho estudio, se retoman las categorías de Hegemonía, Alienación, Memoria histórica y Justicia transicional, no sin antes realizar un acercamiento histórico a los orígenes y trayectorias del paramilitarismo con el fin de elaborar un análisis completo, contextualizado e histórico tal como se propone desde el método de análisis de contenido.

Este método en sus inicios era eminentemente cuantitativo, pero a través de propuestas de algunos autores dejo de lado dicha exigencia, tal como lo conceptualiza Berelson (1952): “El análisis de contenido es una técnica de investigación para formular inferencias identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características específicas dentro de un texto” Berelson (Como se ciito en Abela, 2002, pág. 3). El giro que le da la característica cualitativa a este método es el desarrollo e importancia de la inferencia de conocimientos relativo a un contexto social, con el fin de develar algún aspecto, en este sentido se afirma que “texto y contexto son dos aspectos fundamentales en el análisis de contenido” (Abela, 2002, pag. 2). Este método se desarrolla en 4 componentes que Abela (2002), expone así: *determinar del tema de análisis, determinar las reglas de codificación, determinar el sistema de categorías, comprobar la fiabilidad del sistema de codificación y categorización y por ultimo realizar las inferencias.*

Finalmente, con la premisa de que en el análisis de contenido los datos cobran sentido dentro del contexto, para el desarrollo investigativo y la recolección de la información, fue elaborada una matriz de análisis de información, una ficha descriptiva y otra analítica, basados en los intereses investigativos, ya expresados, estas herramientas se presentaron y fueron validadas por expertos que, por un lado tenían conocimiento sobre el trabajo en medios de comunicación -específicamente en la prensa escrita-, y por el otro, están involucrados en las Ciencias sociales, con énfasis en el conflicto armado interno colombiano.

### **Lectores potenciales**

En un principio, se esperara que este documento sea insumo para otros profesionales del área de Ciencias sociales, especialmente Trabajadores o Trabajadoras sociales, organismos e instituciones que realicen trabajo con víctimas y conflicto armado, y en general, se aspira que el ensayo sea de conocimiento público .

### **Estructura del ensayo**

Este ensayo contiene una introducción, dos grandes capitulo, cada uno con tres subcapítulos que se originan desde las subcategorías de análisis elegidas, así como las conclusiones producto de este documento, adicionalmente, se construyo un glosario

que orienta la lectura el cual se encuentra en los anexos del presente ensayo. Ahora bien, se hará explícito el contenido de estos dos capítulos como eje central del ensayo:

### **1. Trayectoria del fenómeno paramilitar en Colombia**

En este capítulo, se desarrolla una propuesta sobre los orígenes del paramilitarismo, desde sus inicios hasta el polémico proceso de desmovilización que se surtió entre el Gobierno de Alvaro Uribe Velez y las AUC, que inicio en 2003 y finalizo en 2006 en Santafé de Ralito, con el cual se dio por finalizado el paramilitarismo; se hace un recuento histórico, que parte desde el periodo denominado La Violencia, en la década de los 40, y establece su continuidad hasta mediados de 2006, cuando, desde organismos oficiales, se manifestó que ya habían sido desmovilizados todos los paramilitares y que el fenómeno había acabado.

Posterior al proceso de desmovilización, en el panorama nacional aparecieron las denominadas Bandas Criminales Emergentes (Bacrim) que aun son vigentes en la actualidad; estas organizaciones empezaron a ejercer su poder sobre las antiguas zonas de control paramilitar; adicionalmente, ejecutaban acciones criminales de carácter urbano y se comprobó su relación con el narcotráfico. Aunque estudios realizados por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y por el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto revelaron que estos grupos guardaban estrecha relación con estructuras paramilitares supuestamente inexistentes, organismos estatales se empeñaron en asegurar que se trata de delincuencia común, alejada del fenómeno paramilitar. Este ensayo pretende reflexionar sobre el hecho de que las Bacrim son el residuo del paramilitarismo, que se reorganiza bajo distintas denominaciones.

### **2. Víctimas del paramilitarismo en la prensa: análisis del espectador (2006 – 2007)**

En este segundo Capítulo se establece que a partir de reconocer, que la ideología según (Thompson, 2002) puede interpretarse como un sistema de representación de la

realidad que usan los diversos estamentos para legitimar su posición y orientar sus conductas. Desde esta perspectiva los medios de comunicación son una institución social que presentar información de hechos y fenómenos sociales, en este capítulo, se pretende analizar los pronunciamientos que emitió el periódico El Espectador acerca de las víctimas, entre Junio de 2006 y Mayo de 2007; las formas como se refiere a ellas y a sus victimarios; cómo las identifica; si presenta estereotipos, cuáles son; si ubica a las víctimas en el contexto y a los actores implicados en los hechos y cómo lo hace.

Ello justificado, entre otros, en que la construcción de la Memoria histórica es un proceso colectivo que además de tener el objetivo de esclarecer la verdad, busca una reconciliación social y logro de la justicia; por esto, es importante que los medios de comunicación, como agentes sociales se concienticen del poder que tienen en pro de asumir un compromiso frente a la información difundida; así mismo, reconocer su papel dentro de la sociedad y su trascendental labor dentro del proceso de reconstrucción de la verdad como aporte a la comprensión del complejo conflicto armado colombiano.

## HERRAMIENTAS METODOLOGICAS

En el proceso de creación de este texto se elaboro una matriz de análisis de información que condensa los objetivos, preguntas, respectivas categorías y subcategorías que son seguidamente definidas, que sirvieron como guía para la escritura del ensayo.

### Matriz de análisis de información

Pregunta General	Objetivo General
¿Cómo se entiende el origen y el proceso de reestructuración del paramilitarismo en Colombia y cuáles son las implicaciones para las víctimas?	Adelantar un estudio documental y de prensa sobre el origen, trayectoria y reacomodación del paramilitarismo en Colombia y sus implicaciones en el reconocimiento socio-político de las víctimas.

Pregunta	Objetivo	Categoría	Subcategoría
¿Qué rasgos caracterizan la	Analizar giros, rupturas y continuidades en el		Zonas de influencia
			Denominación del

trayectoria histórica del fenómeno del paramilitarismo en Colombia?	fenómeno del paramilitarismo en Colombia	Estructura Organizativa	fenómeno
			Perfiles de los integrantes
			Modus Operandi
			Grupos paramilitares en Colombia
			Intereses del paramilitarismo
			Relaciones y alianzas
			Estatus político y jurídico
¿Cómo aparecen registrada las víctimas del paramilitarismo, en la información emitida por el periódico El Espectador en este periodo?	Analizar las implicaciones de la información emitida por El Espectador para los procesos de recuperación de memoria histórica de las víctimas del paramilitarismo en el país.	Víctimas	Postura frente al marco normativo
			Estereotipos en las maneras de nombrarlos
			Reconocimiento
			Identidad
			Actores implicados
			Contexto
		Memoria Histórica	Expresión
			Temáticas
			Fuentes

Nota: Se entienden como categorías transversales para los objetivos dos y tres: hegemonía y alienación.

#### TABLA DEFINICIÓN DE SUBCATEGORÍAS

Categoría	Subcategoría	Descripción
<b>Estructura Organizativa</b>	Zonas de influencia	Alude a la descripción de zonas en las cuales se posicionan los grupos Bacrim, coincidentes con las antiguas zonas paramilitares.
	Denominación del fenómeno	Diferentes nombres que se le asignan a estos grupos (Bacrim )
	Perfiles de los integrantes	Tipos de personas que los conforman.
	Modus Operandi	“Modo de operar” o de actuar característico y común de estos grupos.
	Los grupos paramilitares y de Bacrim en Colombia.	Clasificación de los tipos de grupo.
	Intereses del paramilitarismo y Bacrim	Ventajas y objetivos económicos, políticos y sociales, a los cuales responden.
	Relaciones y alianzas	Se refiere a las interacciones individuales o grupales, que la organización sostiene con diferentes sectores, tanto políticos como económicos, tanto privados como públicos.
	Estatus político y jurídico	Alude a lo normativo, frente a asignación de condenas según las acciones delictivas, en relación con su estatus, y la reparación para las víctimas.
	Legitimación del fenómeno	Según Thompson (2002), se refiere al momento en que un sistema de dominación se presenta legítimo, justo y digno.
	Disimulación del	Según Thompson (2002) resulta cuando las relaciones

<b>Ideología</b>	fenómeno	de dominación están ocultas, negadas u oscurecidas de diferentes formas.
	Fragmentación del fenómeno	Según Thompson (2002), se presenta cuando las relaciones de dominación son sostenidas por la producción de significados de forma fragmentada, por grupos, de tal modo que quedan ubicados en oposición a otros, dividiendo los “grupos oprimidos” para asegurar la dominación.
	Cosificación del fenómeno	Según Thompson (2002) se manifiesta cuando existen situaciones históricas transitorias que se presentan como permanentes, naturales y de sentido común.
<b>Victimas</b>	Normatividad	Frente a esta subcategoría, el grupo investigador analizará el contraste con la legislación para las víctimas, y cómo son los procesos de estas últimas para vincularse a la norma.
	Estereotipos	El propósito de esta subcategoría es identificar cuál es la construcción social que se ha efectuado sobre esta población, a partir de las ediciones del periódico El Espectador.
	Reconocimiento	Es importante conocer cuáles son las características y rasgos que se atribuyan a las víctimas del conflicto armado; adicional a esto, si el reconocimiento público facilita o dificulta las acciones de restitución y reparación a que tienen derecho.
	Identidad	La identidad está referida al análisis de las características comunes que las mismas víctimas han construido sobre sí, a través del proceso de victimización, las cuales se expresan en la información del periódico El Espectador.
	Actores implicados	Se trata de reconocer los principales personajes que se pueden calificar como victimarios, por participar como paramilitares o en conjunto con estos, para la ejecución de delitos que favorecen algún interés y que han dejado víctimas de cualquier índole. De este modo, se tiene en cuenta el número y contenido de noticias emitidas sobre los personajes y lo que se dice acerca de ellos.
	Contexto	Esta subcategoría retoma el entorno político, social y cultural que contiene diversos intereses, y en el cual se desarrolla y se otorga razón a los hechos de victimización.

## Formato de ficha descriptiva<sup>2</sup>

La Ficha de lectura **es un escrito breve (de 3 – 5 páginas) que intenta dar una visión panorámica y a la vez crítica** sobre un texto en particular. En la hoja se hace un recuento del contenido de una obra, de sus ideas esenciales, al tiempo que se hace una valoración crítica del mismo. Para este ensayo, la ficha descriptiva es una herramienta metodológica, a través de la cual se ordena y codifica la información recolectada producto de la lectura individual y colectiva de artículos, textos, secciones de libros, documentos de páginas web, entre otros. Incluye las siguientes partes

Ficha descriptiva	
Nombre de quien elabora la ficha:	Fecha de elaboración:
En un párrafo (máximo dos) elabore <b>un breve resumen</b> del texto. Este párrafo condensa el contenido del trabajo destacando sus aspectos principales. No se extienda en grandes detalles de un solo aspecto de la obra, tampoco deje de mencionar otros aspectos que son igualmente importantes. Es un Resumen, de modo que el lector de la reseña obtenga un panorama general de todos los aspectos clave de los artículos originales. No incluya en esta primera parte su reacción personal.	<b>Argumentos centrales</b> En otro párrafo (máximo dos) identifique los <b>argumentos centrales del texto</b> : Por lo general un artículo expone un único argumento o idea central, máximo dos o tres. Si al analizar cada texto se encuentran más de tres argumentos debe hacerse un nuevo esfuerzo de comprensión de lectura.
Partes de la obra	

<sup>2</sup> Documento inédito elaborado por el docente Wilson Mellizo como material de clase: “trabajo social e interculturalidad” en Universidad de la Salle. (2011). Y adaptado como herramienta para la revisión documental del presente ensayo.

<p>Señale las Partes de la obra o artículo. En ocasiones son los subtítulos o capítulos, en otras, hay que buscar las divisiones temáticas o argumentativas. Debe hacer una descripción breve de cada parte del artículo y las maneras en que todas ellas se articulan.</p>
<p><b>Citas textuales pertinentes para su investigación</b></p> <p>Incluya algunas citas (tres o cuatro) pertinentes o importantes para su investigación.</p>
<p><b>Reacción a la obra</b></p> <p>De manera breve en el resto de la hoja presente su reacción personal y crítica a la obra. Puede o no tener en cuenta alguna de las siguientes preguntas.</p> <p>a. ¿Cómo se relacionan la obra con las ideas del tema de investigación?</p> <p>b. Que aportes hace el texto a su investigación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contexto</li> <li>• Antecedentes</li> <li>• Formulación del problema</li> <li>• Fundamentación teórica</li> <li>• Lo metodológico</li> </ul> <p>Lo ético y legal</p>
<p><b>Referencias Bibliográficas</b></p> <p>Referencie cada documento, según Norma APA.</p>

### Ficha analítica<sup>3</sup>

Facilita la extracción de datos relevantes para el análisis de la información emitida por el periódico El Espectador

<b>TÍTULO DE LA NOTICIA:</b>	<b>AUTOR Y SECCIÓN:</b>
<b>FECHA DE EMISIÓN:</b>	<b>PÁGINA:</b>
<b>TEMA:</b>	
<b>SUBCATEGORÍA POSIBLE :</b>	
<b>FRAGMENTOS TEXTUALES:</b>	
<b>ELEMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN O COMENTARIOS</b>	

<sup>3</sup> Instrumento elaborado por el grupo investigador.

## ENSAYO

Qué irrespeto con los que estamos en medio de este conflicto, que burla todo un despliegue de camarógrafos para que brillen unos salvajes asesinos, para lucirse y mostrar al mundo cómo se juzgan los delincuentes en Colombia. Cómo se atreven a usar mi dolor y el de muchos colombianos para beneficios políticos, para mostrar logros. (Correa de Andreis, 2007, párr 1)

Es interés mediante este ensayo, elaborar un análisis crítico y reflexivo de la relación entre medios de comunicación, paramilitarismo en Colombia y sus víctimas, centrado en el estudio de la información emitida por El Espectador referida a las víctimas y al proceso de reestructuración del paramilitarismo en Colombia y sus efectos a la construcción de la memoria histórica en el país.

Sin embargo antes de introducir de lleno el tema, es importante aclarar por qué se sitúa el interés en incorporar a los medios de comunicación, en particular al diario El Espectador, como parte del análisis del campo de conocimiento que se configura en este ensayo, partiendo del enunciado de que la forma en la que interactúan los medios de comunicación con su público es a través del lenguaje tanto escrito, oral y simbólico; entonces se hace esencial pensar en el lenguaje y como este afecta la realidad del ser humano, de esta manera el grupo investigador se remite a lo expuesto por Rafael Echeverría (2003), autor que propone que el lenguaje permite al ser humano crear sentido, es decir construir su realidad y es allí donde surge el poder, “Nuestro postulado con respecto al poder es que este es un fenómeno que emerge, en cuanto tal, de la capacidad del lenguaje de los seres humanos. Sin el lenguaje el fenómeno del poder no existe” (Echeverría, 2003, pág. 223). Si se acepta como verídica esta afirmación, es imposible deslindar el impacto del lenguaje de los medios de comunicación en el

otorgamiento de sentido a la realidad en la que se sumergen los sujetos y en la que suceden todos los hechos sociales.

No obstante, es de aclarar que se piensa al pueblo receptor no desde una perspectiva del niño primitivo manipulable sino con capacidad de transformar, así Barbero (1991) expresa que

pensar el proceso de dominacion social ya no como imposicion desde un exterior y sin sujetos, sino como un proceso en el que una clase hegemonica en la medida en que representa intereses que tambien reconocen de alguna manera como suyos las clases subalternas (Barbero, 1991, pág.99)

Es así que, historicamente desde el siglo XIX la prensa Europea, gracias a los avances tecnologicos de la imprenta convirtio la noticia en producto y la prensa en un importante *empresa comercial* util para incorporar a las clases populares a la cultura hegemonica, en correlación, aunque el diario el espectador puede caracterizarse como empresa comercial no debe desconocer las obligaciones legales que como medio de comunicación se le han asignado.

En concordancia, no se puede desconocer el marco legal existente para el flujo de informacion en Colombia, aspecto que se suma a la responsabilidad social de los medios en cuanto a los contenidos noticiosos que publica, en esta linea se encuentra el analisis de Uprimny (2006), que inicia exponiendo la importancia de la libertad de expresion y libertad de informacion en la construccion de democracia desde diferentes perspectivas que pueden resumirse en los siguientes aspectos: la contribucion a la consolidacion de la verdad, como parte constitutiva de libre desarrollo de la persona y de su autonomia, sirve tambien como estretegia para conservar y asegurar el Estado de derecho y finalmente desde la perspectiva democratica en la que “*un debate publico, vigoroso y pluralista seria un elemento esencial para la formacion de una voluntad democratica informada*”. (Uprimny, Fuentes, Botero, & Jaramillo, 2006, pág. 13) Sobre estos principios se fundamentó la Jurisprudencia Colombiana que se concreta en el Artículo 20 de la Constitucion Politica de Colombia, en la que se destacan dos aspectos esenciales, el primero *la facultad de expresar opiniones e ideas*

y segundo *la libertad de hacer circular y recibir información*, no sin dejar de lado que la información debe ser *veraz e imparcial*.

Por lo tanto y de acuerdo a lo anterior, es importante dimensionar el poder que ostentan los medios de comunicación, frente a un tema tan álgido como el del conflicto armado, por su capacidad de ser una fuente informativa de fácil acceso, con capacidad para socializar opiniones, discursos, representaciones y formas de pensar ideologizadas que legitiman o no la información expuesta; por consiguiente analizar este campo de conocimiento implica tener en cuenta lo que es emitido y masificado por lo mass-media, es decir, primero los datos que propaga y/o excluye, segundo, la forma como aparecen los protagonistas de los hechos sociales, bien sea juzgados, señalados, o justificados y, finalmente, la utilización sistemática del lenguaje para referirse a determinados acontecimientos que puede o no favorecer la comprensión de los hechos; dada la magnitud su alcance y poder es ineludible no pensar en el aspecto ético de informar sobre los sucesos.

Este aspecto es comentado por autores que se nombran a continuación; para Ballesta (2002) los medios de comunicación “se han convertido en canales de comunicación, a través de los cuales fluyen mensajes, valores, estereotipos, tendencias, etc., que han sido creados por unos pocos para ser consumidos por muchos,” (Ballesta Pagán, 2002, pág. 1); Un segundo autor que se pronuncia de cara a esta temática es Rey (2003), quien ha caracterizado los medios de comunicación como sujetos pasivos, ya que en la relación entre la demanda y los hechos sociales prima el lucro, mientras que su promulgada responsabilidad social es relegada a un plano inferior. El mejor ejemplo es el poder de las pautas publicitarias; dada su importancia económica, tienen gran potencial de manipulación para decidir sobre si alguna información será o no comunicada, e incluso el modo, la manera y la oportunidad de hacerlo.

Un aspecto más, que se agrega al ámbito ético en los medios de comunicación, en cuanto al compromiso de no manipulación de la información tiene que ver con el problema de la *mediocridad y pasividad* de los medios de comunicación al informar propuesta por Rey (2003) la cual expresa, se relaciona con amenazas provenientes de

órdenes jerarquizadas laboralmente o de grupos armados al margen de la ley, que atentan contra la integridad de los comunicadores. De ahí que, los medios, sean un actor importante en cualquier conflicto bélico<sup>4</sup>; sus acciones tienen lugar, bien sea como parte del problema o al margen del mismo. Es en este punto donde se intersectan aspectos esenciales de este ensayo, el primero la mirada del Espectador sobre el paramilitarismo como actor del conflicto armado, como se informa sobre las transformaciones históricas de este fenómeno y sobre sus víctimas, el segundo el paramilitarismo en sí mismo como actor y fenómeno social que ha marcado la historia de Colombia y que desde los postulados de este escrito ha tenido grandes transformaciones y finalmente la víctimas principales afectados sobre los que se centra la mirada desde el sentido social.

Es por esto que resulta imperante nombrar, ahora, el caso del conflicto armado, persistente al interior del país por más de cinco décadas, en el que han participado diversos actores. Entre ellos, Los paramilitares que han llevado a cabo los más vergonzosos, horrorosos e inhumanos hechos violentos de la sociedad colombiana, llevando el conflicto cada vez hacia una atroz degradación, este actor es el foco central de este artículo, en el cual se da cuenta de sus orígenes, relaciones económicas y políticas que sostiene con el narcotráfico, estamentos públicos, instituciones religiosas y sus transformaciones a lo largo de su historia.

Con ello, se quiere interpretar los supuestos referidos, primero a que las nuevas Bandas Criminales (Bacrim) no son otras que los mismos grupos paramilitares, con algunas transformaciones. Segundo a una posible exclusión de la condición de víctima del conflicto armado a quienes hayan sufrido daños por parte de las Bacrim, afectando su reconocimiento jurídico, en las leyes internas del país, estrategia que fragmenta ciertos aspectos del contexto social y legitima acciones que van en contra de la memoria histórica, produciendo y reproduciendo estereotipos a través de canales masivos de comunicación.

---

<sup>4</sup> Los medios de comunicación han sido "factores activos de los conflictos bélicos, al menos desde que el nazismo alemán usó la prensa, la radio y el cine – especialmente los noticiarios cinematográficos semanales y mensuales- primero como propaganda que legitimaba la guerra de invasión y después como estratagema de desinformación del enemigo." (Barbero, Restrepo, Herrán, & Rey, 2013, pág. 117)

Y tercero, lo concerniente a que en la historia de Colombia, los medios de comunicación se han usado como importante instrumento del poder, que construyen desde sus centros representaciones y lecturas hegemónicas sobre distintos fenómenos así, también sobre el paramilitarismo, la coincidente emergencia de las Bacrim luego de su proceso de desmovilización y el reconocimiento de las víctimas.

Para reflexionar sobre todos estos elementos se analizan en primer lugar fuentes documentales que ahondan en estos fenómenos para delimitar y contextualizar el tema de investigación representadas principalmente en el primer y segundo capítulo de este ensayo y en segundo lugar las noticias y artículos emitidos por el periódico El Espectador para llevar a cabo el propósito del ensayo, dichos artículos se analizan en el tercer capítulo, durante el periodo comprendido entre 1 de junio de 2006 al 2 de junio de 2007 periodo seleccionado por ser oficialmente (mediante un comunicado emitido el 11 de Abril de 2006 por parte del Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, dando por extintas a las AUC), posterior al proceso de desmovilización, es decir un espacio de gran auge e impacto público y político a nivel nacional e incluso internacional.

Este semanario es una fuente de información y opinión de larga trayectoria, vasta experiencia y amplia cobertura nacional; es el periódico más antiguo del país<sup>5</sup> y ha estado presente a lo largo de la historia de conflicto armado<sup>6</sup>. Se autodefine como un medio crítico y liberal<sup>7</sup>, por estas razones es ampliamente reconocido. De esta forma es factible considerar que la información emitida por El Espectador sobre el fenómeno del paramilitarismo ha influido en la construcción de su imagen social, debido a que puede masificar la información.

El interés investigativo de este ensayo se justifica en la perspectiva ético-política asumida como investigadoras sociales/trabajadoras sociales y que se orienta en búsqueda de aportar a la construcción de conocimiento colectivo, público, desde las

---

<sup>5</sup> Fundado por Fidel Cano Gutiérrez el 22 de marzo de 1887 en la ciudad de Medellín, en 2012 cumplió 125 años de existencia, siendo el periódico más antiguo en Colombia, uno de los más antiguos de América y el de mayor trayectoria en la historia del país. Debe su nombre a la gran admiración que su fundador le tenía al poeta Víctor Hugo, quien colaboraba en Francia en un diario que llevaba ese nombre. El Tiempo, Nota de prensa (19-3-2012). 'El Espectador', 125 Años Después.

<sup>6</sup> Inclusive miembros del periódico han sido sujetos víctima de esta guerra.

<sup>7</sup> "En estos años sus nuevos propietarios han sido fieles al legado de Guillermo cano y han entendido la importancia de mantener para Colombia esta voz independiente, crítica y constructiva, dejando a un lado incluso, la natural búsqueda del retorno económico." (El espectador, 2006, pág. 16 A)

víctimas o reconociendo la ardua labor de su lucha social; como lo menciona Iván Cepeda,

Se necesita que la investigación académica se convierta en debate público y que los elementos acumulados de la verdad histórica adquieran la forma de reconocimiento social a las víctimas de los patrones criminales, que han sido resguardados por la impunidad. (Cepeda, 2006, pág. 19A)

Acudir a la perspectiva ético – política desde el trabajo social implica que el conocimiento generado a través de la escritura de textos sea un esfuerzo aunado a un proyecto societario, es decir, que se inserta en valores sociales condicionados de cierta manera por el contexto social, este proyecto social es de carácter crítico, progresista y sensible hacia las clases trabajadoras y poblaciones más desfavorecidas (Montaño, 2007, Pag. 9), buscando aportar a la eliminación de cualquier tipo de dominación, incluso la que pueden llegar a ejercer los medios de comunicación. Montaño, (2007) expone con un carácter predominantemente político el ejercicio del trabajador social no como mediador entre las clases, sino que, interviene explicitando las diferencias de intereses que están en juego para la transformación social, eso es solventando el inmediateismo y acudiendo a la comprensión de la vida cotidiana como parte de la totalidad.

En este sentido, desde la ética del ejercicio del trabajo social, ante la reflexión de la barbarie que se ha cometido en la sociedad colombiana y las millares de víctimas que ha dejado el conflicto armado, se convierte en una misión primordial comprender y reflexionar sobre el paramilitarismo, su proceso de desmovilización y los dilemas que se desarrollan ante un panorama actual de justicia transicional, no sin antes conocer ampliamente el contexto histórico, político y social en el que se ha propiciado, siendo así, la justicia y la verdad dos elementos que deben equilibrarse con el fin de encaminar los retos jurídicos, sociales, políticos y psicológicos para la construcción de sociedad que supere definitivamente la política del perdón y olvido que socialmente se ha difundido.

Esta acción reflexiva y analítica se desarrolla en el presente documento por medio de un análisis de contenido de textos como la prensa, que se puede considerar como un esfuerzo en la ampliación de legitimidad profesional, asociado a los importantes trabajos desarrollados por colegas en la investigación de las problemáticas relacionadas con las afectaciones que han sufrido las víctimas del conflicto armado y su compromiso en las dinámicas de reparación con las mismas tal como en el ámbito psicosocial. Es de agregar, que para el desarrollo investigativo de este ensayo, se recolectó la información por medio de revisión documental y análisis de contenido de prensa en la fuente y periodo ya mencionados.

Finalmente, como ya se explicó durante el plan de ensayo, el texto se divide en dos grandes capítulos, cada uno con tres subcapítulos y un último apartado referido a *modo de conclusión*. Así pues, se da paso a presentar los argumentos que configuran de este campo de conocimiento, no sin antes especificar que este documento se inscribe en la línea de Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático del programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle.

## 1. Trayectoria del fenómeno paramilitar en Colombia

### 1.1 Orígenes el paramilitarismo: “¿En qué momento se rejodió Colombia?”<sup>8</sup>

Durante este apartado se sostiene, que el surgimiento de grupos paramilitares “rejodió Colombia”. El origen del fenómeno paramilitar constituye un hecho histórico, ya que ha protagonizado gravísimas violaciones a Derechos Humanos, ha conformado amplios vínculos políticos para su lucro y financiación de la violencia, incluso ha llegado a cooptar el estado y proclamarse no solo como legítimos, sino que, han sido declarado legales en algún momento.

Para analizar los giros, rupturas y continuidades del fenómeno en Colombia, se presentan sus aspectos constitutivos; tales como su origen, estructura organizativa,

---

<sup>8</sup> El Espectador, semana del 3 al 9 de Septiembre de 2006; Felipe Zuleta, artículo de opinión, página 22/A.

distintas denominaciones, sus zonas de influencia, su *modus operandi*, intereses, estatus político / jurídico, relaciones y alianzas con otros actores sociales.

Este fenómeno ha sido objeto de diversas investigaciones y estudios<sup>9</sup>, que han arrojado numerosas versiones acerca de su origen y desarrollo, estas varían sobre tres asuntos principales: su época de surgimiento, las razones del mismo y sus cambios estructurales y nominales. Se retoman diversos planteamientos que por ejemplo, explica que los paramilitares son:

Grupos irregulares de civiles o miembros de las Fuerzas Armadas, que actúan en sentido ofensivo y clandestino, en grupos de comando, para eliminar contrarios o impedir su libre accionar, percibiendo un salario, y además, contando con sofisticados sistemas de reclutamiento, entrenamiento, equipos de comunicación, transporte, armamento, etc. Responden a intereses de poder local, nacional o de las mismas Fuerzas Armadas.” (López Báez, citado por Martínez Álvarez, 2010, págs. 22, 23).

Estas organizaciones han actuado no solo en búsqueda de intereses económicos, también, políticos en alianza con diferentes sectores, han incurrido constantemente en actos violentos, y causado graves violaciones a los Derechos Humanos (DD HH), al Derecho Internacional Humanitario (DIH)<sup>10</sup>, por medio de la violenta y corrupta toma del estado, ha afectado la democracia y construcción de ciudadanía. Tal como lo indica Duncan (2006) los paramilitares:

Son fuerzas que el Estado organiza para llevar a cabo asesinatos selectivos de opositores políticos, como grupos de mercenarios anticomunistas propios de la

---

<sup>9</sup> “El conflicto colombiano ha sido usado para ejemplificar aquellos casos que la literatura especializada describe como profundamente (Burton, 1987); intratable (Kriesberg y otros, 1989) o excesivamente prolongados (Azar, 1990). Esta caracterización hace énfasis en el hecho de que no resulta fácil señalar una causa o grupos de causas claras que ayuden a comprender los altos niveles de violencia que existen en la sociedad colombiana. [...] Este vacío explicativo permanece, a pesar del hecho de que durante los últimos 15 años importantes instituciones académicas, grupos de pensamiento y hacedores de políticas han producido un vasto cuerpo de sofisticados análisis sobre la situación colombiana.” (Medina Gutierrez, 2009).

<sup>10</sup> Según el vigésimo informe (2012) del Defensor del Pueblo al Congreso de la República, específicamente en su Registro de quejas atendidas y tramitadas por las autoridades competentes, el segundo derecho más violado fue el Derecho Internacional Humanitario, con 2.068 violaciones; en séptimo lugar, se encuentra el desplazamiento, con 361 casos; en el lugar 18, se identifican 112 Víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de DD HH y de violaciones graves al DIH; además, en los últimos puestos se identificaron 3 víctimas de minas antipersona y municiones abandonadas sin explotar. (Defensoría del Pueblo, 2013)

guerra fría, como ejércitos adscritos a un grupo de interés del corte de terratenientes o gamonales y como escuadrones de la muerte al servicio de narcotraficantes (Duncan, 2006, pág 241 )

Es así que, el autor pone de manifiesto con ello una de las diversas definiciones que se le atañe a los grupos paramilitares. Lo que sí es cierto, es que cada una de ellas responde a una intencionalidad manifiesta que se sitúa en hechos históricos particulares relacionadas especialmente con los tres postulados propuestos por Velásquez (2007) acerca de la expansión del paramilitarismo: En primer lugar, fue propiciada por la incapacidad, e incluso anuencia de los distintos Gobiernos nacionales para controlar el fenómeno, perspectiva compartida por Pecaute (1987); en segundo lugar, la instaurada por las propias instituciones que lo crearon, es decir, el Ministerio de Defensa Nacional, en 1965, en representación del Gobierno nacional, y, en tercer lugar, cuando fue implementado por narcotraficantes, apoyados y/o liderados por los Gobiernos de turno.

Para sustentar la primera premisa propuesta, por García (como se cito en Velásquez 2007) acude a, quien presenta como antecesores del paramilitarismo a los grupos denominados ‘pájaros’ y ‘chulavitas’, organizados según este en la década de los 40 del siglo XX, durante el periodo de La Violencia Bipartidista. Fueron conformados por un sector conservador de la política colombiana, con el propósito de “obtener y mantener sus propiedades y privilegios en convivencia con el Estado.” (Velásquez, 2007) De esto se puede extraer, que la creación de ‘Ejércitos privados’ al servicio de las élites buscaban hegemonizar el conservadurismo<sup>11</sup>, legitimando un pensamiento que se cree apoyado por las mayorías y desfavorece los cambios, además de defender y concentrar la propiedad privada, lo que propició el despojo de tierras y el desplazamiento interno.

Premisa que, comparte Medina (2007) y Betancourt & García (1994) atribuyéndole la responsabilidad del surgimiento y desarrollo del fenómeno, al Estado, Medina (2007) sujeto a la premisa de que el fenómeno paramilitar se materializo como

---

la “privatización de ejercicio de la fuerza, la ley y la justicia por sectores afines a los propósitos y razones de Estado ante la incapacidad del mismo de operar en contextos regionales en el marco de los parámetros institucionales existentes” (Medina G, 2007, párr 5) y Betancourt & García (1994) bajo la señal de que:

“la existencia de una clase política que durante largos periodos se ha repartido de manera excluyente las bondades y privilegios del burocratismo estatal, la generalizada laxitud en el control del gasto público y la flagrante corrupción oficial y privada han contribuido en gran proporción al desmantelamiento favorable de la ilegalidad...” (Betancourt & García, 1994, pág. 104)

Caso tal, las acciones que fueron legitimadas y desarrolladas conjuntamente con el Gobierno conservador de la época, presidido por Mariano Ospina Pérez (1946-1950), quien recibió apoyo militar de voluntarios “campesinos del norte de Boyacá, especialmente de la vereda Chulavita, de Boavita”, quienes ya consolidados llegaron a Bogotá para enfrentar la turba liberal enfurecida que se desató luego del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. (Ocampo, 2013, párr 11)

Guerrero (1991), por ejemplo plantea que la época de la violencia no debe limitarse al ámbito político y no se origina netamente en los 40 del siglo XX, ya que el origen de grupos de “autodefensas” es también, de profundas y arraigadas influencias religiosas, sustentado en que la iglesia católica en 1935 ve amenazado su poderío e íntima relación con el Estado, ante el crecimiento de los adeptos liberales en el congreso, por lo que obispos y arzobispos realizan un ultimátum invitando a conservadores y fieles católicos a no quedarse *inermes y pasivos* y levantarse ante el congreso mayormente liberal que ya empezaba a gestar legalmente sus anhelos de transformación.

Ahora bien, Guerrero (1991) también afirma que aunque, desde 1930 se identifican Boyacá (zona esmeraldífera), Santander y Norte de Santander como departamentos de confrontación con presencia de grupos conservadores armados o chulavitas, fue 1936 el año en que se consolidó y legítimo a nivel nacional el proyecto militar del directorio nacional conservador en influencia de Laureano Gómez quien a

través de medios de comunicación de influencia nacional como EL SIGLO afirmó: “Tenemos que constituir fuerzas de choque debidamente armadas que defiendan la integridad personal de los manifestantes” (Guerrero, 1991, pág. 245), ello justificado en hechos violentos que se dieron en el departamento de Caldas en el que conservadores resultaron muertos.

Hechos como este, permiten, primero reconocer a los ‘pájaros y chulavitas’ como un importante antecedente para comprender la prolongación, expansión y fortalecimiento de este tipo de organizaciones a través del paramilitarismo, dado su interés por acumular poder. En segunda instancia, se logra identificar, que la historia del país ha estado inscrita en la latente lucha hegemónica de las ideologías políticas conservadora o liberal ; y finalmente, señalar la disputa por la acumulación inequitativa de la tierra, como constante y primordial causa del conflicto armado colombiano.

Otro argumento, que confirma la primera mirada sobre la incapacidad del Estado para controlar el fenómeno que se gestó en el siglo XX, está referida a que estas agrupaciones no estaban de ningún modo aisladas de la influencia e incidencia del modelo contrainsurgente propuesto por Estados Unidos, que contribuyó con la construcción de la Escuela de la Américas, en Panamá<sup>12</sup>, origen, por ejemplo, de los ‘escuadrones de la muerte’<sup>13</sup>, con el objetivo de controlar y eliminar movimientos independentistas o sujetos que se consideran apoyo al ‘enemigo’, y con ello todo acto subversivo en contra de la legitimidad del modelo económico, político y social imperante, que protege de manera enfática la propiedad privada. Calvo (2003) plantea:

Desde 1962, las Fuerzas Especiales estadounidenses comenzaron a preparar en Colombia brigadas contraguerrilleras, a formar especialistas en guerra psicológica e involucramiento de civiles en actividades paramilitares, reproduciendo lo que hacían en Vietnam. (Calvo Ospina , 2003, párr 4)

---

<sup>12</sup> Academia militar [Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (en inglés: *Western Hemisphere Institute for Security Cooperation*)] dirigida por el Ejército estadounidense que ha entrenado a más de 61.000 soldados latinoamericanos en "técnicas de combate", "tácticas de comando", "inteligencia militar" y "técnicas de tortura." (Pérez Guerra & Ruiz Espinoza, 2006). Estuvo situada desde 1946 a 1984 en la Zona del Canal de Panamá. Actualmente, está en *Fort Benning*, en la localidad estadounidense de *Columbus (Georgia)*.

El objetivo de crear brigadas contraiguerrilleras nace debido al fortalecimiento del movimiento armado colombiano, que afectaba el proyecto político dominante. Las actuales guerrillas colombianas surgen durante los años 60; la primera y más reconocida son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP); integrada por campesinos, es la más importante de la historia colombiana; otras agrupaciones insurgentes son el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) grupos que nacen por la unión de intelectuales, los primeros urbanos y los segundos provenientes del Partido Comunista Maoísta (Medina, 2009); igualmente, el Movimiento 19 de Abril (M-19) que tuvo sus inicios en los años 70, originándose por el descontento de un grupo de personas por un supuesto fraude electoral “en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero.” (Morales, S.F.)

Incluso, Paul Oquist (como se citó en Pécaut, 1986) ha propuesto la noción de *derrumbe parcial del Estado*, la cual explica que hacia 1943 el estado ha entrado en una crisis, por causa del rompimiento de la ideología de la regulación estatal económico – política y la entrada en vigencia de una visión liberal, tal rompimiento ha propiciado la expansión de la violencia (Pécaut, 1986, pág. 185). De este modo, se reitera la primera perspectiva de Velásquez (2007), en la cual propone como razón de la expansión paramilitar la incapacidad e incluso anuencia de los distintos Gobiernos Nacionales para controlar el fenómeno, se añade a esta que, parte de la negativa del Gobierno Nacional a controlarlo se debe a la expansión de los grupos guerrilleros, con el consecuente aumento de su control territorial y número de combatientes, especialmente en la década de los años 80.

Ahora, se da paso a reflexionar sobre la segunda versión, referida a que el fortalecimiento de este actor responde a su instauración por vías legales e institucionales, que se desenvuelve en un ir y venir entre lo legal e ilegal. Como lo mencionan Rivas & Rey (2008), mientras Colombia era presidida por Guillermo León Valencia (1962 - 1965) fue aprobado el Decreto 3398 de 1965, del Ministerio de Defensa, con el que se respaldó jurídicamente a las, desde entonces denominadas,

Autodefensas<sup>14</sup>; en el artículo 25, se establece, que “[...] todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos en los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad” (Ministerio de Defensa, 1965, pág. 6).

Posteriormente, se plasmó de manera permanente en la Ley 48 de 1968, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Dicha Ley consolidó y legalizó el surgimiento del fenómeno, para actuar como “el lado sucio y narcotraficante de las Fuerzas Armadas estatales o contribuir a la conformación de agrupaciones campesinas, que debieron tomar las armas en su legítima defensa contra la violencia guerrillera.” (Rivas & Rey, 2008), que se intensificó en los años 50 y 60. En concordancia Medina (2007) afirma que Los orígenes del paramilitarismo están ligados a las tácticas contra insurgentes enmarcadas en la doctrina de Seguridad Nacional, de esta manera “el Estado, a través de sus Fuerzas Militares y conjuntamente con sectores sociales, económicos y políticos regionales, fueron promotores y agentes dinamizadores de su formación” (Medina Gallego, 2007, párr 5).

Respecto a lo anterior el mismo Medina resalta que durante casi tres décadas los grupos paramilitares se nutrieron de diferentes fuentes de financiación permitiéndoles mantener una economía de guerra y acumulación de capital capaz de sostener ejército de aproximadamente veinte mil hombres, entre estas fuentes está el narcotráfico para el cual fueron necesarias casi dos décadas, para que el Estado reconociera la relación de estos grupos con el narcotráfico y actuara declarando, mediante el decreto 1038 de 1984, el Estado de Sitio en aquellos departamentos afectados por el accionar paramilitar, justificando esta decisión en que:

Por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, viene perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las instituciones, en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad

---

<sup>14</sup> “Las organizaciones de autodefensa, tal como se desarrollan hoy en el país, son una forma de encubrir el paramilitarismo y constituyen una modalidad de terrorismo de Estado, financiadas por el narcotráfico y por ganaderos, latifundistas e industriales, y creadas con el claro propósito de exonerar al Ejército de la responsabilidad que a este le compete en la eliminación física de todos aquellos que se oponen al establecimiento.” (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo)

ciudadana, la tranquilidad y la salubridad públicas y en la economía nacional.

(Presidente de la República de Colombia, 1984)

A pesar de ello, solo cinco años después fueron declaradas ilegales estas organizaciones criminales<sup>15</sup> que no eran concebidas como paramilitares, tal como se describe en el decreto 815 de 1989:

Que bandas de sicarios, escuadrones de la muerte, grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares, son responsables de actos perturbadores del orden público. (Virgilio Barco, Presidente de la República de Colombia, 1989)

Aun así, como lo señalo la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Sin embargo, no se previó su desmantelamiento efectivo ni se hizo un deslinde claro con el Estado.” (Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, 2006). Por estas razones, la década de los 80 se caracterizó por un alto nivel de violencia en todo el territorio nacional.

Aunque el decreto 815 de 1989 pareció ser un avance del Gobierno de Barco en la lucha contra la violencia, en 1994, cuando César Gaviria ejercía en la Presidencia de la República, se aprobó la iniciativa del decreto 356 o el “Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”, que autorizó la organización y entrenamiento militar de las Convivir<sup>16</sup>, que sirvieron como refugio para la organización de las Autodefensas<sup>17</sup> y tuvieron su epicentro en el departamento de Antioquia, donde fungía como Gobernador Álvaro Uribe Vélez. Solo hasta 1997, debido a las altas tasas de homicidios, estas organizaciones son declaradas inconstitucionales (Molano, 2006).

---

<sup>15</sup> Grupos como el MAS (Muerte A Secuestradores), en 1983, tuvo gran incidencia por sus alianzas entre la fuerza militar e importantes narcotraficantes. Otros, como el escuadrón Muerte a Abigeos (MAOS); Castigo a Firmantes o Intermediarios y Estafadores (CAFIES), que también reciben el calificativo de Contrainsurgentes y que mantenían fuertes alianzas con los narcotraficantes, fueron declarados ilegales.

<sup>16</sup> “**Artículo 42º.-** Definición. Se entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, la organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperadores o miembros dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad. **Parágrafo 1º.-** Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad social privada no podrán prestar servicios de vigilancia y seguridad privada a ningún título o personas diferentes de los cooperadores o miembros, o fuera del área autorizada. **Parágrafo 2º.-** El Gobierno Nacional podrá reglamentar esta actividad.” (Decreto 356 de 1994)

<sup>17</sup> Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos se muestran preocupadas, porque mediante estas asociaciones se podrían legalizar las autodefensas. (Nullvalue, 1997)

Lo anterior confirma la segunda perspectiva expuesta por Velásquez (2007) quien basa sus afirmaciones en Medina (1994) permitiendo identificar el encubrimiento Estatal con estas formas de organización, que pasaron de identificarse como protectores de la propiedad privada de los terratenientes, de sus propios bienes y de su propia noción de seguridad ciudadana a estructurarse como una organización con más independencia y acciones ofensivas, ya no solo como defensa frente al accionar de la guerrilla, sino también contra la población civil, con el objetivo de mejorar su economía, a través de negocios ilegales como el narcotráfico. Planteamiento que reafirma (Vargas, 2010) al mencionar que los paramilitares “se profesionalizaron y se entrenaron como organizaciones de la muerte bajo una campaña de exterminio y amedrentamiento social” apoyados por sectores económicos que se pretendían instaurar mediante la limpieza de guerrilleros, comunistas y sectores que reivindican demandas sociales.

El tercer postulado, es amparada por Ulloque (2009) quien manifiesta, que el nacimiento del paramilitarismo se da, precisamente, en la década de los 80, fundado por Carlos Castaño, cuando se anuncia oficialmente el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); acontecimiento desvinculado con la época de la violencia bipartidista, posición que no se comparte en este ensayo; entendemos, que no es posible negar sus antecedentes, como la herencia violenta de los años 40 y la legislación anteriormente mencionada durante los años 60, que reconocían un fenómeno criminal que se estructuraba poco a poco.

Luego de ahondar sobre el origen y desarrollo del paramilitarismo, se da paso a su estructura organizativa, teniendo como premisa, que estos grupos, para 1980, respondían a intereses de terratenientes, narcotraficantes y comerciantes, con la excusa de contrarrestar la incidencia de las FARC; tal es el caso de Muerte A Secuestradores (MAS)<sup>18</sup>.

Para abril de 1997, pasaron de ser grupos desestructurados y aislados a ser cuerpos aglutinados bajo la bandera de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que según Duncan (2006) fueron creadas como confederación de grupos paramilitares bajo el supuesto de tener solo el propósito nacional antiguerrillero. Con el fin de expandirse

---

aún más y obtener reconocimiento político, mostraron ser una organización con “mando unificado, un plan nacional, coordinación regional de las operaciones militares y una agenda programática.” (Echandía, 2013, pág. 11)

Las AUC se conformaron a partir de la unión de tres grandes organizaciones similares: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), el Bloque Central Bolívar (BCB) y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM). Estuvieron integradas también por otras organizaciones: las Autodefensas de Meta y Vichada, las Autodefensas Campesinas de Ortega, el Frente Héroes del Llano, Héroes del Guaviare y el Frente Capital, que en total suman 37 bloques/frentes los cuales “tenían libertades en sus territorios, [aunque] debían obedecer lineamientos de carácter político y estratégico emitidos por el mando central.” (Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, 2009, pág. 6)

Así, el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (2009) expone su jerarquía, que incluye cargos y funciones; varían desde Comandante General –“Jefe” o “Patrón”-, urbanos, rurales, hasta Radio Operador o Radio Chispa, entre otros.

UNIDAD	COMPOSICIÓN
Estado Mayor Conjunto	Está compuesto por los jefes o representantes militares y políticos de las estructuras que constituyeron las AUC. El Estado Mayor Conjunto se crea con la confederación de las AUC.
Bloque	Compuesto, generalmente, por más de 300 hombres; en algunos casos, como en el BCB, integra otros bloques y frentes que la constituyen.
Frente	Compuesto por más de 100 hombres y menos de 300.
Compañía	Compuesta por 75 hombres, distribuidos en dos contraguerrillas, de 37 cada una, más el respectivo comandante.
Contraguerrilla	Compuesta por 37 hombres distribuidos en cuatro escuadras de ocho hombres, un comandante por cada escuadra y el comandante de la contraguerrilla, quien es el responsable de las otras 36 personas.
Sección	Compuesta por 18 hombres, distribuidos en dos grupos (escuadras), cada uno de ocho hombres, más el comandante. El responsable de la

	sección es el comandante más antiguo de los dos. La sección está destinada a hacer trabajos específicos y no es una estructura permanente.
Escuadra	Compuesta por ocho hombres, más el Comandante.
Fuerzas Especiales o Grupo Especial	Es un grupo de 30 a 40 personas destinadas, en muchos casos, a prestar seguridad al comandante de la zona. Sus miembros tienen la mejor dotación en armas, municiones, uniformes y el mejor estipendio; están en permanente entrenamiento y tienen que demostrar con hechos su pertenencia a esta unidad.
Escuadra de seguridad o escolta	La conforman entre 10 y 15 hombres. Es la que tiene mayor responsabilidad dentro de la organización, pues es la encargada de velar por la seguridad del comandante de la zona.
Grupo de avanzada	Conformado por un grupo de ocho a diez personas, destinadas a tareas específicas, tales como registros, hostigamientos y labores de inteligencia, para facilitar operativos militares.
Grupo urbano	Encargado del control militar de zonas urbanas. Lleva a cabo acciones de 'limpieza social', y se ocupa de divulgar y mantener las normas de convivencia, propias de las Autodefensas y definidas para las zonas en las cuales tienen influencia. Contrarresta las acciones de las organizaciones guerrilleras y su base social.

Fuente: Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, 2009

En resumen, el anterior cuadro es una clara muestra de que, en la organización de las AUC, a pesar de que existían diferentes bloques y frentes independientes, con libertad en sus territorios, se encontraban sumisos a cumplir con lineamientos y funciones de carácter político y estratégico del Estado Mayor Conjunto, afirmación que contrapone las declaraciones hechas por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso quien sostuvo que "las AUC, una vez consolidadas, aproximadamente desde el año 99, eran una confederación de bloques o frentes que compartían una misma ideología, pero no una escala organizacional jerárquica." (Restrepo, 2007, párr 2).

Un ejemplo que contradice esta afirmación, es la responsabilidad sobre la toma de decisiones políticas, intelectuales y acciones ofensivas militares, que asume el

Estado Mayor Conjunto de las AUC, unidad más importante, que es protegida por el resto de las partes de la organización, como se indica en el cuadro. De hecho, las acciones militares se encaminaban a obtener y sostener poder, desde varias estrategias criminales, orientadas a la defensa de los líderes o comandantes, por medio de diferentes hechos criminales contra la población civil.

Dentro de estas tácticas de terror paramilitar contra los civiles, se identifican varias tipologías de crímenes que constituyen graves violaciones a los DD HH y al DIH, que según Medina (como se cito en Velásquez, 2007) inician con la *“persecución sistemática, el hostigamiento, la detención arbitraria, la práctica de la tortura y la realización de consejos verbales de guerra”* (Velásquez, 2007), pasando luego a ser como las masacres colectivas regionales (las más conocidas la de Mapiripán del 15 al 20 julio de 1997 y El Salado del 16 al 21 de febrero del 2000), en las que se ejecutaron todo tipo de atrocidades, como los asesinatos selectivos de población civil, considerados por ellos como la base social y política de la guerrilla (20 trabajadores de las fincas Honduras y La Negra, previamente seleccionados de una lista negra), la detención/desaparición forzada (desaparición de un sin número de personas en Mapiripán, de las cuales no se conoce aún su paradero) y desplazamiento forzado (por lo menos 1.000 desplazados durante la masacre de Naya, Cauca, del 11 al 12 de abril de 2001).

Las tomas paramilitares de los pueblos, también se distinguen por el asesinato indiscriminado de niños<sup>19</sup>, mujeres y campesinos, con alto grado de sevicia, por las prácticas como la tortura, el ahorcamiento, degollamiento, desmembramiento, violencia sexual a mujeres y niñas<sup>20</sup>, entre otras. La mayoría de estos actos se realizaron en complicidad con la fuerzas militares públicas<sup>21</sup> según lo han denunciados algunas

---

<sup>19</sup> Según el Reporte Internacional Anual, 2012, sobre la infancia afectada por la Guerra: “Los dos Congos de la Guerra”, más de 3000 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados por los paramilitares en Colombia, aunque reconocen que la cifra podría ser más alta debido a la desaparición de cuerpos arrojados a los ríos y sepultados en fosas comunes. (Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza del Comité de Derechos Humanos, 2012)

<sup>20</sup> “[...] el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF- reporta un incremento porcentual significativo de las muertes de mujeres, causadas por la violencia derivada del conflicto armado entre los años 2006 y 2007, siendo que el 22% de las mujeres murieron en zonas rurales causadas por la violencia derivada del conflicto armado y la violencia intrafamiliar, a comparación de un 7% en el 2006. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil señalan que desde octubre de 2006, los homicidios de mujeres por parte de los actores armados en Colombia han incrementado, con señales de tortura en sus cuerpos.”

<sup>21</sup> “Ante la Notaria tercera de Bogotá, Carlos Ossa Escobar, exconsejero presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación del Gobierno del presidente Virgilio Barco, aseguró que la Unión Patriótica fue exterminada por una alianza entre las Fuerzas Militares, el narcotráfico y grupos paramilitares”. (Molano A. B., 2006, págs. 9.3 - 9.4)

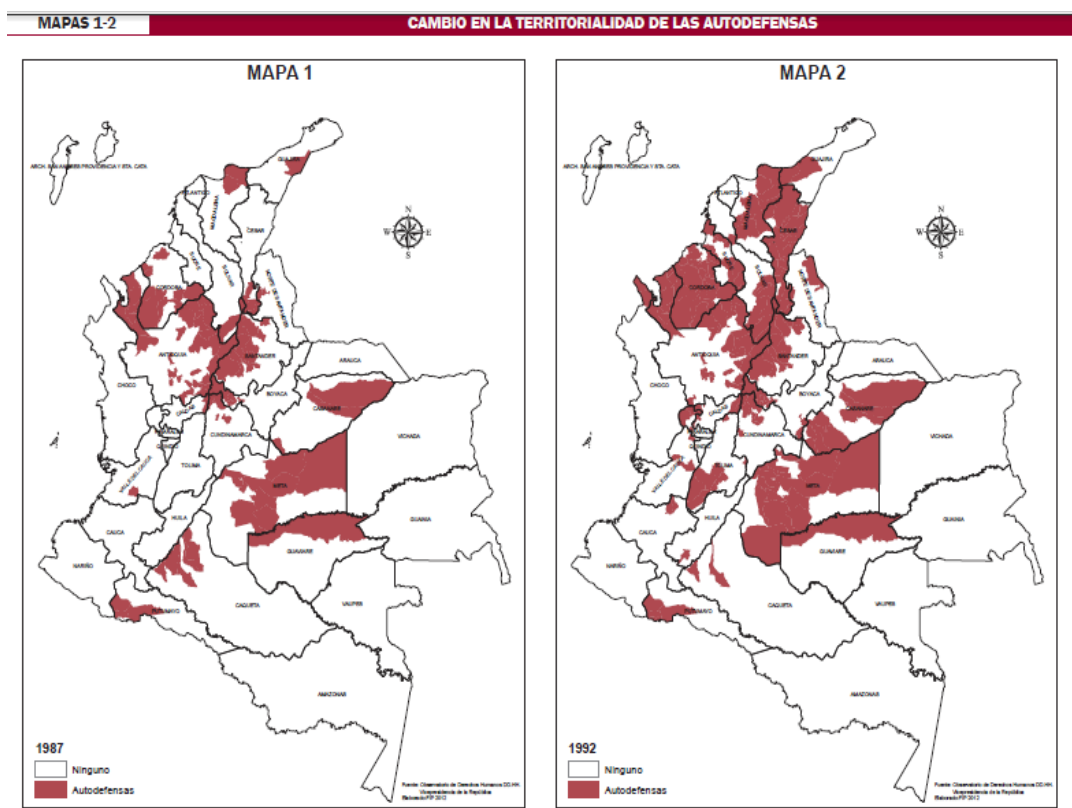
víctimas; además, las incursiones paramilitares generalmente se realizaron en jornadas de dos a cinco días, durante fechas en las cuales las comunidades se aglomeraban.

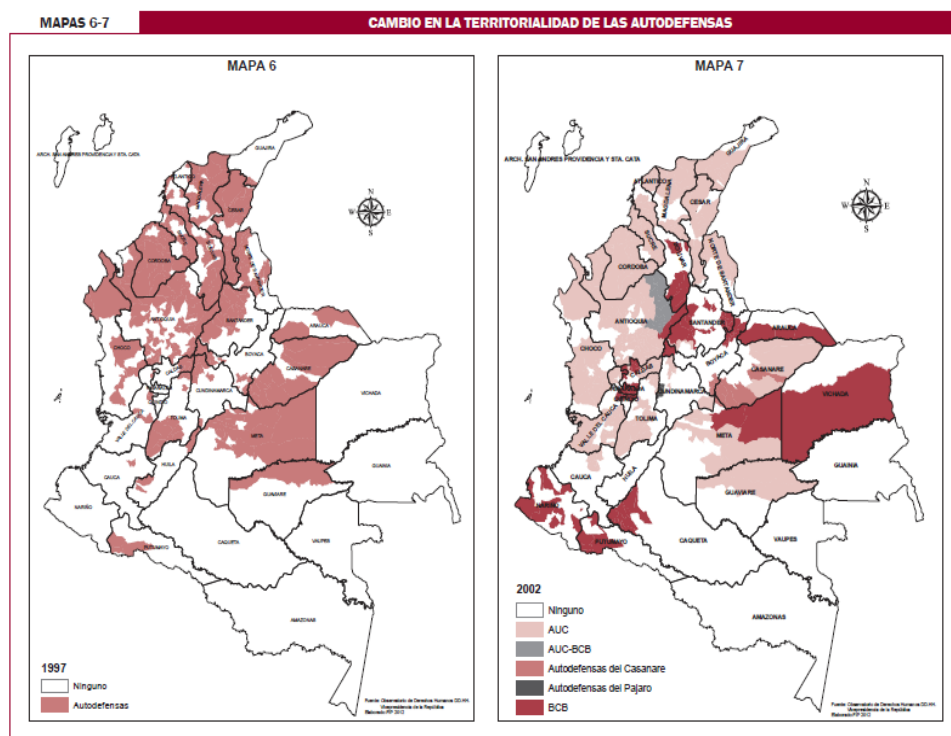
El accionar paramilitar ha sido, en algunos casos, influido por las Fuerzas Armadas de Colombia, para acallar a quienes demuestren ser opositores de los gobiernos de turno, y sostener el *statu-quo*; bajo esta premisa fueron cometidos algunos de los crímenes anteriormente mencionados. Como lo analiza Calvo:

La destrucción del ‘enemigo interno’ no se vuelve el objetivo, sino el fin supremo del Estado. “En la revista de las Fuerzas Armadas de Colombia, N° 6 de 1961, el Ministro de Guerra escribía: “El principal enemigo que (debe atraer) la acción de las Fuerzas Militares lo encontramos en el campo interno, dominado por ideologías extrañas de carácter marxista, ajenas a la cultura y la civilización occidental”. Mientras que uno de los primeros manuales sobre contrainsurgencia definía al ‘enemigo interno’ de manera simple y peligrosa: “Todo individuo que, de una u otra manera, favorezca las intenciones del enemigo, debe ser considerado como traidor y tratado como tal.” (Calvo, 2003, párr. 3).

Se puede concluir, entonces, que el objetivo militar de las organizaciones paramilitares no ha sido solamente los grupos subversivos o insurgentes, como se planteaba en las primeras hipótesis sobre su origen, sino también y sobre todo la población civil, las personas de a pie, los trabajadores, campesinos, maestros, políticos y líderes sindicales de izquierda, concebidos como la ‘base social y política’ del oponente, o supuestos infiltrados de la guerrilla, tal como lo afirman “Don Berna, Mancuso y Macaco: los civiles son guerrilleros.” (Molano Bravo, 2007, pág. 16).

Ahora bien, para entrar en detalle sobre las zonas de influencia paramilitar, se debe decir que, a medida que obtenían mayor poder y se fortalecían sus relaciones, se fueron expandiendo, como se verá en los siguientes mapas:

**Figura 1: Expansión de las zonas de influencia paramilitar**



Fuente: (Echandía C., 2013)

Para resaltar, luego de observar estos mapas, que esta organización tomó gran parte del territorio nacional, aproximadamente desde 1987 al 2002 -de cuando data su expansión más significativa-, especialmente durante el periodo 1997 – 2002, cuando incrementan su presencia de 279 a 455 municipios. (Echandía, 2013, pág. 11)

Justo durante este tiempo, los paramilitares pudieron posicionarse, mantenerse y extenderse por el territorio nacional a partir de tres grandes razones: La primera, en 1999, durante la zona de despeje del Caguán. La segunda, representada en el apoderamiento de las áreas geográficas propicias para el narcotráfico, antes zonas guerrilleras. Y la tercera, las necesarias alianzas que sostenían y financiaban su poder, en el ámbito político y económico sobre las cuales se referirá más adelante.

Retomando la primera razón, en 1999 se llevaron a cabo los acuerdos de paz que se gestaban entre el presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC, momento en el cual las AUC, en clara respuesta y profunda crítica, ampliaron su despliegue por el territorio nacional, con altos costos para las víctimas, ya que durante esta época fueron ejecutadas masacres por parte de este grupo paramilitar. Acerca de

la segunda razón sobre el apoderamiento de zonas geográficas, mantiene estrecha relación con la ubicación de los cultivos ilícitos, que venían siendo disputados en enfrentamientos armados (guerrilla y paramilitares), siendo estos últimos los que lograron apropiarse, no solo de la mayoría de los cultivos sino también de “laboratorios para el procesamiento de drogas ilícitas, tráfico ilegal de armas, economía agroindustrial, actividad petrolera, explotaciones mineras”, (Barón, 2011, pág. 24) y de las rutas de narcotráfico correspondientes principalmente al norte, el oriente, suroriente y suroccidente del país, como se muestra en los mapas. En suma, se puede identificar, también, que las regiones en las que se concentra la mayoría de estos grupos son las zonas costeras, más específicamente los corredores marítimos y las fronteras con Venezuela y Ecuador; es decir, poco notable en la zona central (Cundinamarca).

Finalmente, sobre las zonas geográficas de influencia se debe decir, que aunque en el anterior mapa se muestra a Boyacá como un simple corredor entre Santander y Arauca, la Misión Observación Electoral & Corporación Nuevo Arcoiris (1997 - 2007) plantean, que en este departamento se registra la aparición de paramilitares, ligados a la lógica de la explotación minera y el narcotráfico desde 1980, en dos de sus zonas más importantes, el Valle de Tenza y Puerto Boyacá; en coherencia a esto Borrero (1989) (citado en Betancourt & García 1994) certifica que Puerto Boyaca ha sido “foco central del paramilitarismo”.

Por último, la tercera razón fue la necesaria alianza que debió conformar el paramilitarismo con diferentes sectores locales y apoyo político, que para Medina (2010) sirvieron como generación de capital para el desarrollo, sostenimiento y funcionamiento de estos grupos además de empoderamiento regional y nacional clasificándolos en seis fuentes.

Inicialmente fuentes tradicionales (ganaderos, agricultores, finqueros y pequeños empresarios); seguidamente Fuentes “Institucionales” de financiación, con proyección política, Entre los que se encuentran relaciones con personalidades políticas, significando para ellos la adopción de poder político y gestión económica; Fuentes “gremiales y empresariales” (comerciantes, industrias prestigiosas, empresas transportadoras, entidades bancarias, empresas cooperativas de productores); Fuentes

de financiación “proscriptas”, actividades que van desde el narcotráfico la principal fuente de financiación hasta el secuestro extorsivo, la intimidación y la expropiación violenta, la piratería terrestre, el robo de gasolina, combustible y vehículos; Fuentes de financiación “productivas” referidos al “testaferrato de calificado”, la compra de sectores productivos que además de encubrir sus actividades ilegales les genera recursos y reconocimiento; Fuentes de financiación de las “Empresas Transnacionales”, es decir multinacionales localizadas en el sector energético, la producción minera, y agropecuaria. Y aunque Medina (2010) no lo menciona también ha hecho parte de estas alianzas organizaciones religiosas (Iglesia Católica) y medios de comunicación.

Conviene subrayar cada una de estas alianzas. En primer lugar, las fuentes tradicionales inicialmente fueron contribuciones voluntarias a grupos paramilitares pasando a ser forzadas por parte de los mismos, las cuales contribuían al sostenimiento militar, expansión y seguridad en las zonas; de la segunda fuente de apoyo, es decir, la relación con personalidades políticas, dio origen al escándalo público denominado Parapolítica, el cual estalló el 13 de Junio de 2005 con el pronunciamiento de Carlos Castaño en una entrevista concedida a la Revista Semana: “Creo que podemos afirmar que tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje.” (Revista Semana, número 1205, citado por López & Sevillano, S: F.) De acuerdo a esto, la Corte Suprema de Justicia inició las investigaciones pertinentes, al mismo tiempo que los paramilitares desmovilizados que entraron en el proceso de la Ley de Justicia y Paz hicieron declaraciones útiles para estas investigaciones, entre ellos Salvatore Mancuso y “alias H.H.”.

A medida que las investigaciones avanzaron los nexos entre paramilitares y políticos se fueron clarificando, de manera que involucraron diferentes tipos de delitos, como concierto para delinquir agravado, lavado de activos, fraude electoral, constreñimiento al elector y financiación por parte de los paramilitares a campañas electorales; entre los involucrados, según La Verdad Abierta (2012), se encuentran 200 Congresistas y 470 funcionarios públicos, entre ellos alcaldes, exalcaldes, concejales, exconcejales, gobernadores, exdiputados, policías, militares, funcionarios del DAS, personeros, servidores de la Fiscalía, excongresistas, Magistrados y funcionarios de

otros cargos. Se debe agregar que, lógicamente, todos los partidos políticos tradicionales no estuvieron exentos de este destape público, que se agudizó entre 2005 y 2008; aún más, las investigaciones se aglomeraron en los sectores Liberal, con 50 congresistas procesados y conservador, como Cambio Radical, Partido de la U y, particularmente, el Partido.

Es necesario recalcar, que

[...] dirigentes políticos con origen conservador, que tenían la certeza de obtener votaciones importantes en zonas de control paramilitar, decidieron desprenderse de su partido original y tomar una sigla nueva, que les serviría para organizar más racionalmente su accionar político. (Observatorio del Conflicto Armado, 2007, pág. 18)

La tercera fuente de financiación según Medina (2010) (gremial y empresarial) fue útil como un sistema de aporte económico al paramilitarismo en un 20 %, por parte de gremios económicos como la SAC, FEDEGAN, ANDI, el sector financiero, y asociados como los cafeteros, arroceros, bananeros, palmeros, flor y fruti-cultores, partiendo de que muchos de estos realizaban sus “donaciones” confiando en la seguridad que estos les aportaban y otros lo hacían sometidos a la extorsión,

En cuanto a la cuarta fuente (“proscriptas”) respectiva a actividades ilegales que se constituyen como la base primordial de financiación de los paramilitares, que inicia por aportes hechos por los carteles de la mafia entre ellos de Pablo Escobar y Gonzalo Rodrigo Gacha a cambio de otorgarles protección y apoyo, lo que brindo la posibilidad de expansión y traslado del fenómeno a diferentes zonas del país, es por tanto que dichas alianzas dieron origen al narcoparamilitarismo es decir, que hubo un cambio significativo en la relación del paramilitarismo con el narcotráfico, debido principalmente a la desaparición de los carteles de la mafia que se gestaron a principios de los años ochenta; Sin los capos del narcotráfico, fueron directamente los paramilitares los que tomaron el poder sobre las drogas, dejando atrás su papel de ‘cuidadores’ y pasando a ser los dueños de grandes negocios ilegales; de estas mismas fuentes de financiación hacen parte las de robo de combustible sobre todo en zonas fronterizas como la del

Catatumbo, el contrabando, tráfico de armas, robo de ganado y expropiación de tierras actividades que se realizan en su mayoría bajo el manto de delincuencia común.

la quinta alternativa de financiación del paramilitarismo (la productiva) a través de la compra e inversión de sectores productivos como por ejemplo centros comerciales, bombas de gasolina, almacenes, droguerías, etc. Son una manera de formalizar o legalizar su dinero además de la posibilidad de producir más.

Ahora bien La conquista paramilitar se ha fortalecido, también, por medio del establecimiento de relaciones con grandes multinacionales, fuente que Medina (2010) llama “Empresas Transnacionales”, como por ejemplo en el ámbito de la minería, energético, petróleo, producción agroforestal, Entre los casos más reconocidos se encuentra la Anglogold Ashanti y Pacific Rubiales, quienes fueron procesados en el Juicio ético y político contra el Despojo, realizado en Bogotá del 16 al 18 de agosto de 2013. Otras, como la empresa multinacional Chiquita Brands, es un caso reconocido de pagos sistemáticos a grupos paramilitares, que sumaron 1.7 millones de dólares entre 1997 y 2004, y la participación en el tráfico de 3.400 fusiles AK 47 en el 2001, que entraron al país desde Nicaragua por Urabá, gracias al soborno (30.000 dólares) a funcionarios de la DIAN, y que terminaron fortaleciendo a las AUC. (Fundación Ideas para la Paz, 2007)

Otras alianzas descubiertas durante los procesos judiciales, son las que se dieron con algunos miembros de la Iglesia Católica; tal es el asunto que involucra al padre Javier Palacio, párroco de Yarumal – Antioquia-, quien encabezaba un grupo conocido como los Doce Apóstoles (La Verdad Abierta, 1993): Fue acusado de participar en hechos criminales contra personas contra las se creía que podrían representar un ‘peligro social’; y Oscar Alberto Ortiz, sacerdote de Medellín, quien fue señalado como fundador de un grupo paramilitar en San Antonio de Prado pueblo cercano a Medellín y coparticipe de homicidios, extorsiones, desplazamiento forzado, (El País, S.F.).

Por último, la relación de los medios de comunicación con los paramilitares puede analizarse desde tres perspectivas; por un lado, el hostigamiento que han

sufrido algunos periodistas, debido principalmente a sus denuncias públicas. Según una publicación de la “Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), en abril de 2009, hasta entonces siete casos de periodistas asesinados fueron reconocidos por paramilitares.” (Agencia Prensa Rural, 2011, párr. 9)

En segundo lugar, la creación de medios de comunicación durante la década de los noventa, como una estrategia político militar que respondía a la divulgación de los crímenes, como la emisora Colombia Libre, del Bloque Central Bolívar en el Magdalena Medio, hechos que se atribuyen, en su mayoría, a Jesús Noraldo Bastos, alias “parabólico”, el cual contribuyó a conformar un “poderoso órgano de información, divulgación y propaganda de las Autodefensas. Además de ser un instrumento para desacreditar políticamente al enemigo, a través de mensajes de impacto psicológico, muy efectivos.” (Agencia Prensa Rural, 2011, párr. 14)

La tercera perspectiva la representa la indiferencia de los medios de comunicación de masas frente a las situaciones que afectan intensamente a las víctimas, referido no solo al silenciamiento de los hechos y protección mediática de los criminales, sino a la tergiversación de los sucesos y estigmatización social de la víctimas.

Es preciso señalar aquí que con las ya descritas alianzas y fuentes de financiación que estos grupos lograron construir y fortalecer, pudieron conformarse como una especie empresa que propugnaba bajo una lógica de guerra, por las grandes sumas de dinero que a estos ingresaba, es decir como lo plantea Medina (2010) los gastos de funcionamiento giraban en torno al pago de nómina de sus ejércitos, asistentes e informantes, de auxilios, finanzas, comunicaciones, transporte, Compra de material de guerra, campaña, alimentación, medicamentos, asistencia médica, asistencia económica y jurídica a viudas y familiares de muertos o presos paramilitares y pago de difusión y circulación del proyecto paramilitar en las distintas zonas.

Si bien este capítulo se encargó de analizar y describir los orígenes y trayectorias del fenómeno paramilitar, se pone en evidencia la manera en la que estos grupos, desde los años 40, con los “Pájaros y Chulavitas”, y más aún cuando toman fuerza en los años 80, han sido un actor armado protagónico en la prolongación de

violencia y del terror ejercido en el territorio nacional, excusados bajo la consigna “contraguerrillera” y apoyados, no solo por el poder gubernamental de turno sino también, y principalmente, por el establecimiento hegemónico de los grandes sectores económicos y políticos. A su paso, estos grupos han dejado como saldo un sin número de víctimas, en un país que, según su Constitución política es “Democrático, Participativo y Pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana.” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, párr 2)

Para Finalizar, es clave resaltar, que con factores como: la influencia que alcanzo el fenómeno paramilitar en las esferas política, económica y social, el posicionamiento de Álvaro Uribe a la presidencia, la intervención de la comunidad internacional ante las denuncias de las graves violaciones a los DH, se abrió paso a un proceso que hiciera frente a la actuación de las AUC dentro del conflicto armado; de esta forma, se genera el proceso de desmovilización, que constituye un hito en la historia de Colombia.

## **1.2 Proceso de desmovilización en Santafé de Ralito: “La Colombia del acuerdo para”<sup>22</sup>**

Uno de los hechos más significativos, que propició cambios internos y externos en cuanto a la estructura y la comprensión social del Paramilitarismo, corresponde al proceso de su desmovilización<sup>23</sup>. Por esta razón, este apartado se dedica a describir y analizar el tiempo en el cual se gestó, la legislación pertinente, los actores que participaron, el acuerdo de Santa Fe de Ralito que dio inicio a este proceso y las ceremonias de desmovilización.

Para empezar, el pronunciamiento, a mediados del año 2000, del entonces jefe de las AUC Carlos Castaño, en los medios de comunicación más vistos por los colombianos (Noticias RCN y Canal Caracol, en el programa Cara a Cara), fue una de las primeras estrategias del paramilitarismo para obtener reconocimiento social y

---

<sup>22</sup> El Espectador, semana del 21 al 27 de Enero de 2007, sección judicial, página 3ª, redactado por Hugo García Segura.

<sup>23</sup> **Artículo 2°.** Ámbito de la Ley, interpretación y aplicación normativa. La presente Ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional, aplicando criterios de priorización en la investigación y el juzgamiento de esas conductas. (Congreso de La República de Colombia, 2012)

estatus político, con el fin de iniciar un proceso de paz y de negociación con el Estado. Para Reyes (2012), dichas entrevistas sirvieron para hacer evidente el proyecto político nacional de los Paramilitares y plantear públicamente su estrategia militar, como método legítimo en la lucha contrasubversiva.

Este escenario permitió promover el respaldo por parte de la población civil hacia la eventual desmovilización de las AUC, aunado a la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez, quien aseguraba “estar dispuesto a conversar con los miembros de los grupos armados ilegales, siempre y cuando se comprometieran a cesar sus acciones violentas.” (Reyes, 2012, pág. 23)

En el año 2001, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la grave violación de los DD HH en Colombia, por causa del conflicto armado, y resaltó la importancia de impulsar un Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y el DIH, entendiendo, que el mejor camino para la salida del conflicto es la solución política negociada, por lo que las Naciones Unidas insistían en apoyar e invitar a las partes a fortalecer el dialogo y así lograr “una paz firme y duradera”

Una vez electo Álvaro Uribe Vélez, se dio inicio, en Diciembre de 2002, a la Fase Exploratoria, con el acompañamiento de la Comunidad Internacional, el Alto Comisionado para la Paz, la Comisión Exploratoria del Gobierno<sup>24</sup>, los miembros de la Comisión Episcopal de la Iglesia Católica. En esta fase, los representantes y jefes paramilitares dieron a conocer una declaración que condensaba su propuesta de negociación con el Gobierno. Con lo anterior, se contribuyó a la suscripción del acuerdo más significativo, que dio inicio a la etapa de desmovilización de los miembros de las AUC el, 14 y 15 de Julio de 2003, en Tierra Alta Córdoba, con el denominado Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia.

Dicho acuerdo constaba de diez puntos, referidos a: Fortalecer la Democracia colombiana, principalmente por medio del restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado; el compromiso de las AUC a desmovilizar la totalidad de sus

---

<sup>24</sup> “Artículo 2°. Designar como representantes del Gobierno Nacional en la Comisión Exploratoria de Paz a los doctores Eduardo León Espinosa Faccio-Lince, Ricardo Avellaneda Cortés, Carlos Franco Echevarría, Jorge Ignacio Castaño Giraldo, Gilberto Alzate Ronga y Juan B. Pérez Rubiano”. Extraído de (Presidencia de la república & Oficina Alto Comisionado para la Paz , S.F , pág. 95)

miembros; que se les brindara condiciones de seguridad a sus filas, por parte de la fuerza pública, en sitios acordados; ratificar el cese de hostilidades y la entrega de armas; la aceptación por parte de las AUC de una Colombia sin narcotráfico y, finalmente, la reincorporación a la vida civil.

Los puntos mencionados fueron, entonces, objeto de discusión, principalmente, porque el gobierno brindó incentivos (beneficios procesales para los integrantes de las AUC), debido a que si se pretendía adelantar el proceso de paz era necesario reconfigurar la legislación colombiana y crear nuevas alternativas de Ley que acogieran a los paramilitares, por ejemplo, con procedimientos judiciales aplicables, y se adjudicaran posibles modos de reparación a las víctimas del conflicto. Tal es el caso de la Ley 548 de 1999, prorrogada por la ley 782 de 2002, que estableció “la eliminación del requisito previo del carácter político de las organizaciones armadas al margen de la ley, para, de esta manera, emprender diálogos de paz.” (Congreso de la Republica de Colombia, 2002, S.P.)

A pesar de las grandes controversias judiciales y constitucionales, la primera desmovilización fue llevada a cabo el 25 noviembre del 2003, con los miembros del llamado Bloque Cacique Nutibara, en el cual se desmovilizaron, presuntamente, 868 combatientes (Cifras entregadas por el Alto Comisionado Para la Paz), en la ciudad de Medellín; este proceso se extendió hasta 2006, con la desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas. En estas ceremonias se hizo entrega de armas y uniformes; además, ingresaron a un programa de Reeducación para la reinserción a la vida civil.

Estos procesos se consolidaron con la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), y en este marco la Federación Internacional Humanitaria (FIDH) plantea que se mantiene con este proceso, ileso el poder político, económico y militar del paramilitarismo “conduciendo en definitiva a sustraer a los miembros y cabecillas de estas organizaciones criminales de su responsabilidad penal internacional.” (Federación Internacional Humanitaria, 2007, pág. 4) por lo que en estrecha colaboración con la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, se realiza un monitoreo y

seguimiento al proceso en especial al desarrollo del marco legal, esperando que este cumpla con los estándares de la Corte Penal Internacional (CPI) en terminos de verdad, justicia y reparación, pero con las inconsistencias del proyecto, la FIDH denunció a la CPI que ello no se ajustaba a los lineamientos internacionales y estaba violando los derechos de las víctimas.

Una vez sancionada la ley de justicia y paz en julio de 2005 la FIDH continuo con el seguimiento dirigido por la CPI y según La Federación Internacional Humanitaria (2007) con esto los paramilitares en medio de las negociaciones mostraron preocupacion frente a la intervencion constante de la Corte por lo que el Alto Comisionado Para la Paz del gobierno de Uribe expreso:

Por la Corte Penal Internacional no hay problema (...) Solo opera si no se ha impartido justicia en el país. Esa es la razón por la cual el modelo que se esta planteando es de juicio y condena en el país. El hecho de que el gobierno ofrezca un proyecto de ley, que contempla una pena privativa de la libertad, es importante porque bloquea la posibilidad de esta jurisdicción internacional (Federación Internacional Humanitaria, 2007, pág. 4)

En este contexto se acreditan los intereses tanto del gobierno de Uribe como de los grupos paramilitares, por crear alternativas y estrategias que se acojan al proceso sin que la Corte Penal Internacional pueda intervenir y sancionar un proyecto de ley lesivo para las víctimas y beneficioso para estos grupos.

Aun sancionada dicha ley de justicia y paz esta se llevó a cabo y como una maniobra para justificar la eficacia de la política de Seguridad democrática: El balance fue de 31.671 personas desmovilizadas en 38 ceremonias y 18.025 armas entregadas (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -CNRR, 2009). Estas controversiales cifras se prestaron para que el Alto Comisionado para La Paz, Luis Carlos Restrepo, mediante un comunicado emitido el 11 de Abril de 2006, diera por extintas las AUC.

Las cifras, expuestas en las actas de desmovilización, generan interrogantes a priori y a posteriori de la desmovilización: ¿Está la Nación preparada para reintegrar a los 'ex' miembros del paramilitarismo?, ¿se cuenta con las herramientas psicosociales para orientar a estas personas?, ¿dará esto una aproximación a la culminación del conflicto armado o una disminución representativa? Más allá de resolver estas incógnitas y un sin número más que generaron, por la información hasta ahora compilada sí se puede decir que, diez años después del evento más grande de desmovilización, se mantienen los índices de violencia.

En contraposición a las cifras de desmovilización, desarme y reducción del fenómeno paramilitar, el Ministerio de Defensa argumenta que:

De acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional, los grupos paramilitares pasaron de tener 4.500 miembros en 1998 a 12.175 en 2002, año en que entró en vigencia el anunciado cese de hostilidades. Estas cifras se fueron incrementando durante el desarrollo de la etapa de 'desmovilización colectiva', pues en enero de 2005, luego de haberse realizado siete ceremonias, el Ministro del Interior y de Justicia, a la pregunta de ¿cuántos paramilitares hay en el país?, respondió: "Unos 15 mil". Esta cifra, a su vez, habría aumentado considerablemente en 2006, luego de realizadas 27 ceremonias de "desmovilización" colectiva, pues según el Director del Programa para la Reinserción a la Vida Civil, la cifra definitiva de paramilitares "desmovilizados" sería de 26.000. Sin embargo, la cifra oficialmente presentado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz fue de 35.309 combatientes desmovilizados [...] Esto quiere decir, que el número de paramilitares creció durante las negociaciones con el Gobierno entre 2002 y 2006 en una proporción del 102%. (Reyes, 2012, pág 41)

Las anteriores cifras dejan muchas cuestiones pendientes; por un lado, puede decirse, que el Gobierno nacional o no estaba enterado de la cantidad de los

paramilitares, en aumento durante la desmovilizaciones, o si lo sabía, no consideró contarle la verdad al país, ya que se caería el proceso por incumplimiento a uno de los puntos del acuerdo de Ralito, el cual establecía que se debían desmovilizar la totalidad de los miembros; o bien, el proceso de desmovilización se convirtió en una artimaña mediática, en el que las cifras de desmovilizados se inflaron para consolidar, en el imaginario social, que los paramilitares se habían reintegrado a la vida civil y que, ahora, el único actor que atenta contra la democracia y la seguridad son las guerrillas.

Sin embargo, es claro que, durante las desmovilizaciones, los grupos paramilitares incumplieron con el acuerdo, en lo que se refiere al cese de hostilidades, pues, como lo sustenta la Comisión Colombiana de Juristas (2010), “entre la fecha de inicio del cese de hostilidades por parte de los grupos paramilitares, del 1° de diciembre de 2002, y el 30 de junio de 2008, por lo menos 4.300 personas han sido asesinadas o desaparecidas por fuera de combate, por grupos paramilitares”. (Comision Colombiana de Juristas, 2010, pág. 14)

Contrapuesto a ello, el Gobierno siempre se mantuvo firme para que este proceso, a toda costa, se mostrara legítimo e importante. Así lo hizo el mismo Alto Comisionado para la Paz, quien, a pesar de conocer que, durante el proceso de desmovilización en Medellín, se habían infiltrado personas que no eran paramilitares, permitió que se desarrollara la jornada, con la excusa de recuperar la institucionalidad<sup>25</sup>. Otra de las maniobras usadas por el Gobierno para facilitar el proceso fue el Proyecto de Ley 067 de 2007, por medio del cual se buscaba “conceder el beneficio de indulto, exclusivo de delincuentes políticos, a miembros de grupos paramilitares” (Marín, 2007, págs. 1-2), modificando el inciso primero del artículo 340 del Código penal. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró “inexequible la tipificación del paramilitarismo como delito político”, por lo que el Gobierno se limitó a imponer penas bajas para delitos de Lesa humanidad, simplificándolos como Delito común.

---

<sup>25</sup> En los hechos ocurridos alrededor de la desmovilización de los supuestos 874 paramilitares del Bloque Cacique Nutibara se evidencia que en este proceso se está reclutando a delincuentes de todo tipo para incrementar estrepitosas cifras de combatientes desmovilizados, aun a costa de sacrificar los derechos de las víctimas y de la sociedad. El mismo Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, ha reconocido este hecho: “A pesar de lo atípico que fue el proceso de Medellín, en el que nos revolvieron delincuentes callejeros 48 horas antes y nos los metieron en el paquete de desmovilizados, a pesar de todas esas irregularidades que se presentaron, nosotros validamos el proceso porque creemos que es un método efectivo de recuperar la institucionalidad” (Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP, S.F., pág. 4)

Lo anterior refleja, de manera clara, los vicios del procedimiento durante el proceso de justicia, paz y desmovilización. Igualmente, la formulación y promulgación de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz que, imprudentemente, se diseñó durante las negociaciones, y sobre la cual se debe decir que

[...] se caracteriza por ser una norma de aplicación residual a todos aquellos paramilitares que no puedan incluirse en los beneficios de la ley 782 y de su decreto reglamentario 128. Además, está diseñada para procesar de manera excepcional a los paramilitares que tengan procesos abiertos o puedan ser procesados por delitos graves, constitutivos de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. (Comisión Colombiana de Juristas, 2007, pág. 8)

Dicha Ley introdujo, también, a la realidad nacional el concepto de Justicia Transicional, el cual, según el Ministerio del Interior y Justicia, se entiende como una serie de mecanismos y herramientas que buscan cambiar de situación las graves violaciones a DD HH, hacia la reconciliación y, fortuitamente, hacia la paz.

Sin embargo, es necesario referir, que la “disyuntiva entre el castigo a los responsables y el permitir el desarrollo de los procesos de reconciliación ha sido una de las mayores preocupaciones que ha llamado la atención;” (Ulloque, 2009, pág. 22 - 23) es decir, que, por un lado, se encuentra la necesidad de crear estrategias para acabar o reducir la violencia en Colombia, promovida por estos grupos, y por el otro, que el castigo a los victimarios sea suficiente, en términos de justicia, en relación con las afectaciones de las víctimas.

Frente a esto, ex fiscal Mario Iguarán, de cara al concepto de justicia en la Ley de Justicia y Paz, afirmó: “Si las víctimas, si los colombianos, con su voluntad exteriorizada a través del Congreso, se sienten conformes con ocho años de prisión, con reparación integral, verdad y justicia, podemos confirmar que esa conformidad corresponde al término de justicia.” (Iguarán, 2005, pág. 3) Con esta afirmación se justificaban los excesivos beneficios que, para los victimarios, había en la ley 975 de

2005 y desconoce la lucha de las víctimas y sectores solidarios, que buscan obtener una justicia real, en condiciones de verdad y reparación.

A estas alturas, es posible concluir que, a pesar de la gran insistencia por parte del el Gobierno nacional en la “búsqueda de la paz” y negociaciones con estos grupos ilegales, en los que se jugaron opciones políticas, humanitarias y pragmáticas; en su afán por consolidar una imagen positiva frente al cumplimiento de los Derechos Humanos, resultó siendo injusto para las víctimas y favorable a los intereses políticos y jurídicos de los victimarios. Además, durante el proceso no se optó por tener en cuenta las necesidades, opinión y participación de organizaciones o movimientos defensores de DD HH, de la sociedad civil y, más aun, de las víctimas de paramilitares, sino que cada una de las fases del proceso estuvo en manos de la comunidad internacional, la bancada política del Gobierno y la Iglesia Católica, como únicos representantes de los intereses del país; cabe agregar, que miembros de estos dos últimos sectores, posteriormente, fueron investigados [y juzgados] por nexos con paramilitares.

Ahora bien, con el proceso de desmovilización, desarme y reinserción las AUC no cesaron por completo sus acciones violentas, lo que muestra que no tuvo “éxito” el proceso en comparación con su pretensión, pues evidentemente, los paramilitares continúan siendo una amenaza para la seguridad nacional, pero camuflados en lo que hoy se llama Bacrim.

### **1.3 Reorganización del fenómeno paramilitar: Bandas criminales, la nueva cara paramilitar**

Después de reconocer que, en el proceso de desmovilización, estos grupos Paramilitares no fueron desmantelados completamente, para lograr la transición hacia la paz, si no por el contrario los actos de violencia siguen siendo constantes, se culpa por ellos a otros actores<sup>26</sup> caracterizados como grupos ajenos o residuos del paramilitarismo. En este apartado, se analizará, los giros rupturas y continuidades del fenómeno paramilitar entre los que se reconoce el cambio constata de denominación,

---

<sup>26</sup> Ha surgido todo un universo de denominaciones: neo paramilitar, paramilitar de tercera generación, nuevos grupos narco paramilitares, nuevos grupos armados ilegales o simplemente bandas criminales narcotraficantes. (Prieto, 2013)

intereses, la conformación y continuación de alianzas, relaciones, modos de operar, zonas de influencia y estructura organizativa, para ello se abordan diferentes tesis y posturas que existen alrededor del tema Paramilitarismo-Bandas criminales.

Como ya ha sido mencionado, los grupos paramilitares a lo largo de su historia han tenido la intención de realizar cambios en su denominación, posterior a las desmovilizaciones emergen diversos planteamientos y tipologías para categorizar y analizar el fenómeno. Uno de los postulados es realizado para el año 2007 en el que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR, 2007) expone tres propuestas de categoría: El primer grupo, llamado 'rearmados'; referido a mandos medios y desmovilizados de las AUC, que reincidieron en acciones armadas y criminales, bien a través de grupos ya existentes o mediante la conformación de otros; el segundo grupo conocidos como los 'grupos disidentes', que se conformaron a partir de estructuras de las AUC y distintos grupos paramilitares que no se desmovilizaron; y, finalmente, los 'grupos emergentes', que son organizaciones criminales que ya existían y se visibilizaron al ocupar los vacíos territoriales dejados por los frentes desmovilizados o por grupos que se conformaron recientemente.

Estas tipologías parten de una premisa: que la procedencia de los miembros de una misma estructura no es homogénea como grupo, sino que comparten diferentes características. Sobre la persistencia de estas, se puede decir que no hubo un adecuado proceso de reintegración de los victimarios a la vida civil, de restablecimiento de derechos y, sobre todo, de transformación en la forma de pensamiento y de vida de estas personas, es decir, una intervención integral. Puede anotarse, también, que la propuesta de desmovilización no era tan atractiva para los victimarios, ya que no le ofrecería los privilegios que se obtenían durante su pertenencia a los grupos paramilitares, especialmente en el caso de los jefes; es más, las pequeñas estructuras no desmovilizadas aprovecharon el momento para ocupar los territorios abandonados, ser los dueños de los negocios ilícitos, ampliar su poder adquisitivo y de decisión sobre la vida social de estos territorios.

Las Bandas criminales han sido un tema de amplia investigación en la actualidad, tal como lo testimonian fuentes oficiales del Gobierno Nacional; se

realizaron diversos estudios en torno al análisis de los giros, rupturas y continuidades del fenómeno del paramilitarismo y el coincidente surgimiento de estas bandas; por ejemplo, García indica:

Esta mala manía de no llamar las cosas por su nombre busca, no sólo distorsionar la realidad para hacerla caber en estrechos esquemas mentales, sino, sobre todo, crear nuevas ‘realidades’ virtuales, basadas en la mentira. En este caso, la falacia es el supuesto ‘fin del paramilitarismo’. Según la fábula, gracias al ‘proceso de paz’, se desmovilizaron 32 mil hombres, todos vimos las fotos y, abracadabra, el paramilitarismo ya no existe. El héroe de la historia es el saliente Alto Comisionado para la Paz, hoy en tránsito a utilizar su barita mágica para unir al uribismo. (García, 2009, pp 2 A).

El segundo planteamiento, surge de una investigación del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (CERAC), quienes presentan la clasificación de los Tipos ideales de la categoría ‘neo paramilitares’ (Granada, Restrepo, & Tobón, 2009, pág. 488), y que surgen de la relación entre características comunes identificadas:

- **Nuevos Ejércitos Paramilitares:** Su característica principal se asocia a la contrainsurgencia y a la captura del Estado a corto plazo, con una organización jerárquica de tipo militar, que tiene control poblacional y territorial. El CERAC catalogar este tipo de agrupaciones como las más semejantes a las AUC, cuya diferencia principal es que, por largos periodos, su actuar no depende del Estado y es más regional que nacional. Por ejemplo: Bloque Hermanos Castaño, Organización Nueva Generación Los 40 y Contrainsurgencia Wuayú.
- **Paramilitares Dispersos:** No tienen una organización de corte militar, sino heterogénea, utilizan su fama para aterrorizar diferentes lugares del territorio nacional, aprovechan su poder para lograr objetivos paramilitares, como la homogenización de la población en sentido político y social, comparten características con los, alguna vez llamados, escuadrones de la muerte. Por ejemplo: Águilas Negras.

- **Nuevas Autodefensas:** Son una estructura híbrida, rearmada que, al igual que el primer grupo, tienen objetivos contrainsurgentes (en el ámbito local); controlan a la población y buscan eliminar la base social de la insurgencia, diferenciados por su menor capacidad de combate y estructura. Por ejemplo: Autodefensas Gaitanistas y el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista (ERPAC).
- **Fuerzas Criminales Anexas:** Tienen estructuras jerárquicas e híbridas, no tienen objetivos contrainsurgentes ni de captura del Estado, predominan en zonas urbanas, y guardan relación con el paramilitarismo por el aprovechamiento del vacío del poder y la fama de antiguos grupos paramilitares para sus actividades; según el CERAC son organizaciones fundamentalmente criminales, que buscan la captura del Estado a corto plazo. Por ejemplo: Los Rastrojos, los Machos y la Oficina de Envigado.

Mientras la tipología de la CNRR (2007) no hace referencia al carácter contrainsurgente, el CERAC (2009), en tres de sus tipologías, propone que el accionar de estas bandas es contrainsurgente y de control político – social. En antítesis Massé (como se cito en Del rio & Ortega, 2012) sustenta, que “si bien existe una filiación evidente entre los grupos antiguos (paramilitares) y los grupos actuales (Bacrim) la naturaleza del fenómeno ha cambiado”: Las Bacrim rechazan el carácter contrainsurgente, propio de los paramilitares.

Massé (como se cito en Del rio & Ortega, 2012), también, expone que las continuidades entre el fenómeno paramilitar y estas nuevas organizaciones aluden a su estructura, ubicación geográfica, *modus operandi* y rutas del narcotráfico; además, afirma que, “dentro de sus integrantes, las Bacrim mantienen a familiares de desmovilizados y mandos medios no desmovilizados de los grupos paramilitares”, coincidente con la tipología de la CNRR, que los identifica como ‘Grupos rearmados’.

Otro elemento, identificado por Massé (como se cito en Del rio & Ortega, 2012) para diferenciar a las dos estructuras referidas, corresponde a que estas Bandas ya no son “paramilitares en el sentido etimológico de la palabra” pues ya no intentan reemplazar o acompañar al Estado, pero aun así, existe un contacto con este, aunque de forma más parcial e individual que institucional, y operan con acciones de limpieza

social, por lo que no pueden definirse como paramilitares, sino como grupos “parapoliciales”, semejante a lo propuesto por el CERAC sobre las relaciones a corto plazo entre las Bandas Criminales y el Estado, cooptado temporalmente, a través de soborno, intimidación y violencia.

Por último, Massé (como se cito en Del rio & Ortega, 2012) contempla, que las alianzas con personajes de las estructuras económicas, políticas y militares no se basan en el trabajo en conjunto, sino en una ‘lógica mafiosa’ encaminada a entregar beneficios económicos a cambio de garantías para actuar sin represalia legal alguna, pasando de ser extorsionistas a empresarios armados; argumento examinado con rigor por Rangel (2005), quien plantea, que

Su involucramiento en toda suerte de acciones ilegales, para conseguir recursos —robo de gasolina, extorsión, secuestro, etc. — los ha dotado de una infraestructura criminal muy poderosa. Su penetración en toda suerte de instituciones del Estado y el condicionamiento de los procesos electorales, para elegir candidatos afectos y rechazar adversarios, les ha provisto de una gran influencia política en todos los niveles de las decisiones públicas. (Rangel, 2005, pág 4.)

En términos de intereses, Vargas (como se cito en Del rio & Ortega, 2012) señala, que estas Bandas están enfocadas en la protección de rutas geográficas que garanticen el tráfico de estupefacientes, de la mano con carteles mexicanos o centroamericanos, coincidiendo con Echandía (2013), quien argumenta, que tras la desmovilización, los grupos paramilitares son relevados por Bandas Criminales en zonas donde persiste el narcotráfico y son estratégicas para este ejercicio; en complemento, Massé (2012) argumenta, que para ampliar y proteger sus rutas, cultivos ilícitos y minas de oro<sup>27</sup>, que se han convertido en su principal fuente de financiación. Con el fin de entender esta lógica mafiosa, se explica a continuación los cambios

---

<sup>27</sup>Ver [http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW\\_NOTA\\_INTERIOR-12497739.html](http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12497739.html)

estructurales y las zonas geográficas de estos grupos que permitieron la continuidad de este fenómeno ilegal.

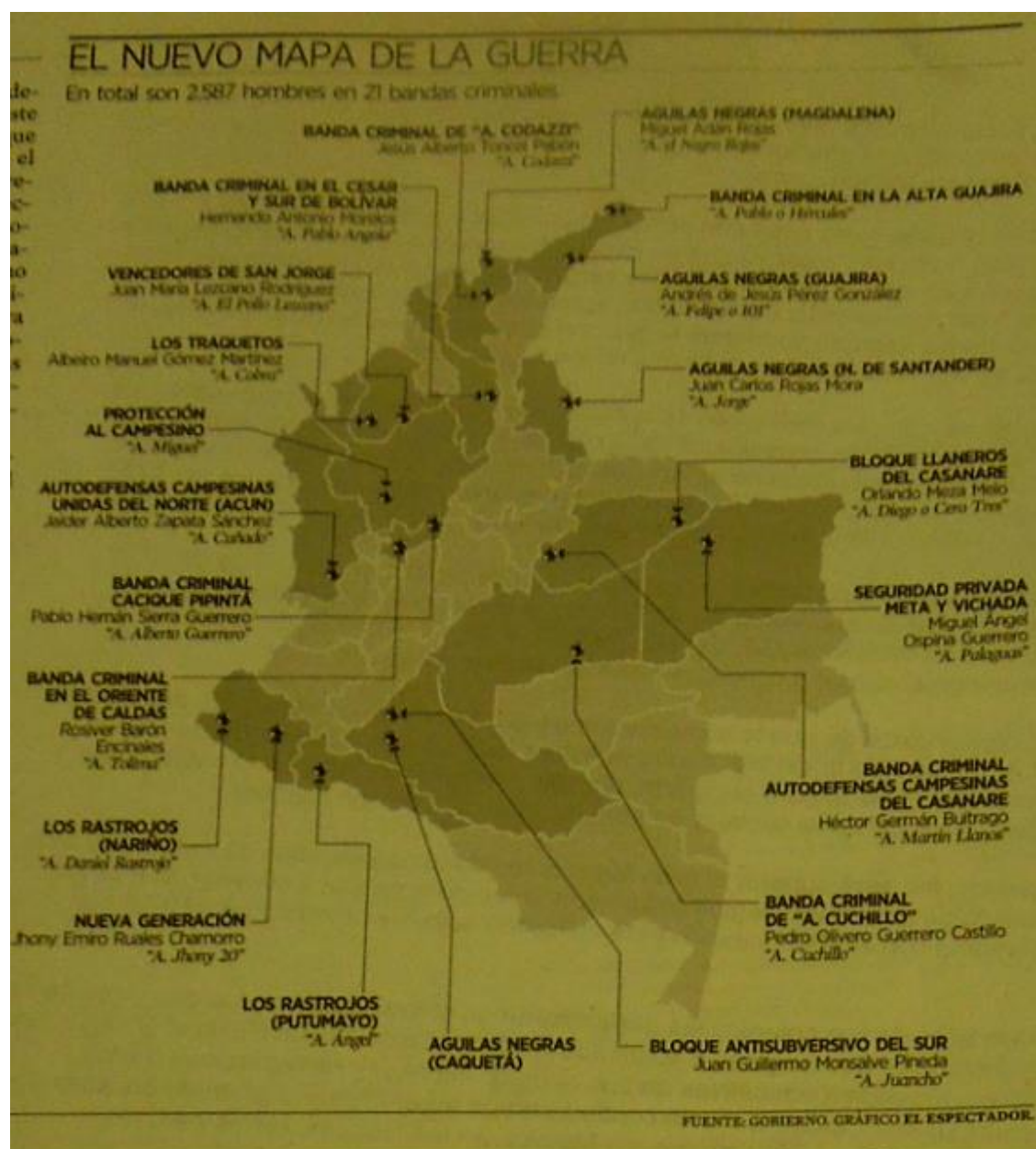
En cuanto a la estructura de los miembros de las Bacrim, se interpreta de dos maneras según Prieto (2013): Primero, la tendencia, en estas organizaciones, a la participación de jóvenes entre dieciséis y veinticinco años; y segundo, la inscripción de desmovilizados en un 14%. De acuerdo con la información otorgada por la Policía Nacional, “las bandas pasaron de ser 33 en 2006, a 21 en 2007, a 23 en 2008, a 16 en 2009 y a solamente seis en 2011” (Echandía C., 2013, pág. 21).; lo que no representa una reducción, sino por el contrario, la concentración de dichos grupos, con un aumento de sus integrantes, que pasaron de un estimado de 4.000 a 5.711 miembros en 2011

Con este representativo número de miembros, las Bacrim han tenido un alcance nacional, y hacen presencia en varias zonas del país, contrario a la negación de la CNRR (2007), en cuanto a su alcance en el territorio colombiano; Echandía C., (2013) exhibe que esta expansión ha concurrido en Sierra Nevada, Bajo Cauca, Alto Sinú y San Jorge, Sur de Bolívar, Urabá, parte de Vichada y Meta, piedemonte de Caquetá, Bajo y Alto Putumayo, Cordillera y Pacífico Nariñense, como en corredores que comunican con las costas Atlántica y Pacífica, y las zonas fronterizas, en donde existen alianzas temporales con grupos insurgentes -FARC y ELN- en conveniencia para obtener beneficios recíprocos.

Según Echandía (2012), la explotación aurífera es otra ruta para su expansión y crecimiento, con un 54% de control sobre la minería. Concretamente, “en Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar, Valle y Cauca” al mando de Urabeños y Rastrojos, quienes realizaron un acuerdo para principios de 2012, mediante el cual se repartieron el territorio nacional. Esto propició, que estos grupos se consolidaran y se expandieran hacia el norte (Costa Caribe) y oriente de país (Santanderes y Llanos Orientales)” (Prieto, 2013). No sobra decir, que en el territorio nacional también hay presencia de Los Machos, Renacer y las disidencias de la Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC), que se entienden como grupos de menor

alcance en ámbitos departamentales; los primeros dos grupos (Urabeños y Rastrojos) son los que ostentan el poder con mayor fuerza. El siguiente mapa muestra esta coincidencia geográfica, a manera de comparación entre las zonas del control paramilitar y las de las Bacrim:

**Figura 2: El nuevo mapa de la guerra**



Fuente: El Espectador del 28 de enero al 3 de febrero de 2007.

Como lo muestra el mapa, dichas Bandas ocupan una gran dimensión del territorio nacional; además, permite relacionar las zonas geográficas en las que hacen

presencia las denominadas Bacrim con las zonas en las que lo hacían parte de las AUC, lo que muestra su gran expansión, cuestionando así, el proceso de desmovilización que, lejos de obtener resultados de una total extinción, condujo, más bien, a su reestructuración. Por ello, es claro que, el desmantelamiento militar no es necesariamente una caída estructural, sino que se debe tener en cuenta las redes de apoyo (políticas, económicas y sociales), aún vigentes, que se encargan de mantener el fenómeno para las ahora llamadas Bacrim.

La vigencia de dichas redes, para el 2008, las ilustra Reyes (2012): Ella sostiene que, en las elecciones del 2008, hubo partidos políticos que fueron cuestionados por mantener nexos con los grupos paramilitares, ya que su consolidación nacional dependió de sus acciones ilegales. Por esto, menciona:

Los partidos políticos de la coalición del entonces Gobierno uribista, que en su mayoría están involucrados en la investigación que organismos judiciales están adelantando contra alguno de sus miembros, resultaron ser los ganadores de la contienda electoral, principalmente en las alcaldías municipales, copando una gran porción del territorio nacional. Grupos políticos que nadie conocía, personas de las que nadie sabía, obtuvieron de la noche a la mañana grandes votaciones. Por ejemplo, el movimiento Alas Equipo Colombia, obtuvo una gobernación y 83 alcaldías; Apertura Liberal obtuvo 37 alcaldías, el movimiento Colombia Viva obtuvo 13, Colombia Democrática llegó a 34 y Convergencia Ciudadana obtuvo 72 y una gobernación. (Reyes, 2012, pág. 66)

Lo anterior, reafirma el interés de los partidos políticos y de los grupos paramilitares por consolidar diferentes proyectos conjuntos, como la obtención de puestos políticos, a través del ejercicio de fuerte presión en las elecciones públicas y la expansión territorial, lo que muestra que estas Bandas criminales emergentes no solo se encuentran al servicio del narcotráfico y la explotación aurífera, sino también han conquistado el ámbito político con importantes alianzas.

A pesar de las investigaciones y pronunciamientos de diversos organismos sobre la relación de las Bacrim con el paramilitarismo<sup>28</sup>, y el caso del paro armado, que tuvo su epicentro en el Urabá el 15 de octubre de 2008, extendiéndose a Córdoba, Cesar y la Guajira, en el cual anunciaron el *rearme de Autodefensas* (Comisión Colombiana de Juristas, 2010), el Gobierno se ha empeñado en sostener, que las Bandas criminales emergentes son delincuentes comunes organizados, pero diferentes de los paramilitares.

Según la Comisión Colombiana de Juristas (2010), el Gobierno nacional expone cuatro razones para diferenciarlos: 1. Las Bacrim no tienen fines contrainsurgentes. 2. Las Bacrim no tienen estructura unificada, ni cubrimiento nacional. 3. Las Bacrim solo se dedican a actividades de narcotráfico 4. No se ha comprobado algún lazo con políticos, empresarios o militares. Pero, la Comisión Colombiana de Juristas, contraponen la reaparición de panfletos firmados por diferentes frentes paramilitares en el Urabá durante el 2008, en los cuales anunciaban su regreso y amenazaban con una “limpieza social”, por lo cual se deduce, que sí obedecen a un mando unificado, buscan mimetizar políticamente a la población por medio del terror, y permite reiterar que el desarme no significa que el poder que sostenía esta estructura ya no exista; por el contrario, tiene capacidad de reclutar nuevamente, para salvaguardar sus intereses.

Es así, que se entrelazan varias situaciones en la discusión sobre la existencia o no de los paramilitares actualmente, que entre otras, tiene que ver con el reconocimiento legítimo de las víctimas de estos supuestos Nuevos grupos como víctimas del conflicto armado, y que, por lo tanto, el Estado colombiano debe garantizarle los mismos derechos de Restitución que se exponen en la Ley de víctimas, aspecto que, en principio, no está estipulado. Sin embargo, la Corte Constitucional, durante mayo y julio de 2013, falló, por medio de la sentencia C-280 de 2013<sup>29</sup>, a favor del reconocimiento de las víctimas de desplazamientos urbano e intraurbano efectuados por las Bacrim; el mismo presidente de la Corte refiere que “las víctimas del desplazamiento forzado son todas las personas afectadas por acciones constitutivas de

---

<sup>28</sup> Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, (2006) Comisión Colombiana de Juristas, (2010), Del rio & Ortega, (2012) Echandía C., (2013), Granada, Restrepo, & Tobón (2009), por citar algunos.

<sup>29</sup> Fallo es vigente al momento de la impresión de este ensayo.

infracción a los Derechos Humanos y/o Derecho Internacional Humanitario, como pueden ser las que actualmente perpetran las denominadas Bandas criminales.” (Colprensa, 2013, párr. 3)

A propósito de este fallo, la Federación Nacional de Personeros (FENALPER), para el mes de abril de 2013, emitió un informe, en el cual revela que “las Bandas criminales son la nueva amenaza”; esta afirmación se produjo, luego de que el estudio pusiera en evidencia que “la tendencia en el último año ubica las Bandas criminales en los primeros lugares de la lista de actores de hechos victimizantes a la población civil, cuando, en años anteriores, los actores principales eran la guerrilla y los paramilitares.” (Revista Semana, 2013)

Afirma, que “por cada diez denuncias que reciben las Personerías, en tres de ellas los victimarios son bandas criminales”, como en el caso de Buenaventura (Valle del Cauca), donde entre septiembre y noviembre de 2012 registraron 17 desplazamientos masivos, los cuales involucraron a 7.000 desplazados; según el informe, en el 90 por ciento de estos hechos, los victimarios fueron las Bacrim. (Revista Semana, 2013)

Dado que las Bacrim siguen practicando las mismas actividades que las desarrolladas por los narcoparamilitares -denominación otorgada por INDEPAZ-, otro argumento concurre para contradecir la versión oficial sobre las diferencias entre los viejos y los nuevos actores: tanto las Bacrim como los paramilitares, ejercen

violencia sistemática contra la población civil, y es de su esencia producir desplazamientos forzados y abandono de tierras, asesinatos y masacres, amenazas a las comunidades y organizaciones, para facilitar el control territorial, fortalecer alianzas políticas y ofrecer servicios de seguridad a negocios legales y a las autoridades, que se vuelven sus cómplices. (González, 2011, pág. 7)

De igual forma, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2007) menciona, que las Bandas emergentes, conformadas por disidentes de las AUC o

desmovilizados rearmados, están poniendo en riesgo a las víctimas y a las comunidades que en su momento fueron violentadas por los paramilitares, pues pretenden, mediante asesinatos y amenazas, impedir el acercamiento con el ámbito judicial. Su interés por evitar ser condenados y juzgados ratifica la continuidad del fenómeno, si no estas acciones de silenciamiento de las víctimas y de la lucha por los Derechos Humanos ¿a qué interés respondería? Claramente, son más las continuidades que las transformaciones o extinciones entre el paramilitarismo y las Bandas criminales emergentes.

Sobre estas continuidades, es preciso señalar que el Observatorio del Conflicto Armado & Corporación Nuevo Arcoiris (2011), informaron que hay 209 municipios con presencia de las mal llamadas Bacrim, en los cuales fueron responsables de desplazamiento. Se establece, que del desplazamiento forzado de “11.898 personas de forma individual, el 70% de estos desplazamientos ocurrieron en los departamentos de Atlántico y Córdoba. En éste último departamento, a noviembre de 2011, se registraron 500 homicidios y 2.479 desplazamientos individuales en el primer semestre de 2011.” Cabe recordar, que estos departamentos, con las más altas tasas de violación a los DD HH, coinciden con aquellos en los que los paramilitares habían tenido mayor impacto y control, tal como se deriva de las masacres mencionadas en líneas anteriores.

Es entonces, indudable, que las zonas siguen teniendo influencia de grupos paramilitares equivocadamente llamados Bacrim, más aún, en las zonas costeras, en donde recientemente estos actores paramilitares han perpetrado hechos de violencia en contra de quienes ellos consideran la base social insurgente. Entre enero de 2007 y agosto de 2011 se registraron 126 asesinatos de líderes de Derechos Humanos, 36 de ellos en la región Antioqueña, seguido de la Costa caribe, donde se ejecutaron 26, además, asesinaron 380 líderes indígenas, 110 en el departamento de Nariño, 76 en el Cauca, 54 en Córdoba y 32 en la Guajira. (Observatorio del Conflicto Armado & Corporación Nuevo Arcoiris, 2011)

Luego de concebir y situar la discusión alrededor de la persistencia o no de los grupos paramilitares, y de ser así, denunciar sus diversas denominaciones como el

medio para justificar la política vigente sobre el supuesto final del paramilitarismo, es importante resaltar la posición asumida en este ensayo, que se sustenta en las anteriores descripciones sobre la continuidad del *modus operandi* y del alcance geográfico nacional: Bajo la denominación de Bandas Criminales Emergentes, se ha alimentado el programa guerrillerista y las ansias de poder político, económico y social. Sin embargo, es posible establecer que, si bien estos grupos han sufrido cambios en su forma de organizarse (miembros- estructura- zonas), son notables las continuidades, por ejemplo, al mantener las afectaciones contra la población civil y los defensores de DD HH, infundiendo terror con tal de conseguir su propósito: Se realiza un cambio de nombre, más no de actuar.

Aunado a ello, la continuación de estos grupos paramilitares en lo que hoy se conoce como Bandas Criminales Emergentes, también, en mayor medida, responde a la persistencia de las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado, político y social, a la aparición de guerrillas y de grupos paramilitares, y que aún se reflejan en las condiciones económicas y sociales de las regiones, tal como lo señala Duncan (2006), que a menos de que no se resuelvan, "las probabilidades de que se reproduzcan ejércitos privados con capacidad de dominio regional del Estado y la sociedad y claros vínculos con el narcotráfico, seguirán siendo muy altas". (Duncan, 2006, pág. 350)

En últimas, el estudio del fenómeno paramilitar y las posturas que se tejen alrededor del fin del paramilitarismo, la consolidación de nuevos grupos a partir de las desmovilizaciones o la mantención del mismo con cambios significativos, posturas que son sustentadas por parte de diferentes sectores de la sociedad: la posición del Gobierno nacional y sus allegados (políticos-económicos), los estudios de investigadores y analistas de instituciones u organizaciones defensoras de Derechos Humanos, la postura de la comunidad internacional y la información que emiten los medios de comunicación. Centrando la atención en esto último, es preciso analizar lo que se ha generado en el imaginario social, referido a la relación entre paramilitarismo y Bacrim, y las víctimas resultantes, específicamente de estos grupos paramilitares.

## **2. Víctimas del paramilitarismo en la prensa: análisis desde El espectador (2006 – 2007)**

En este capítulo se hace un acercamiento a la situación de las víctimas de los grupos paramilitares, desde los medios de comunicación, centrando la atención en la información emitida por el periódico El Espectador, en el periodo del 3 de Junio de 2006 al 2 de Junio de 2007 (año posterior a las últimas desmovilizaciones). Sin embargo, antes de desglosar aquellos eventos, ilustrados por los mass-media, en donde se refleja el dilema de las víctimas del paramilitarismo–Bacrim, es necesario entender el papel que juegan los medios de comunicación en la coyuntura de la realidad nacional, ya que “los dueños de los diarios y los noticieros de radio y televisión son, detrás del telón, los que de verdad manejan el país...” (Molano A., 2007, pp. 16A).

Con esta frase, Molano alude al poder ostentado por las estructuras empresariales mediáticas, que ejercen su impacto en el campo político y social, así como en la comprensión de los hechos sociales de importancia nacional. Su gran poder reside en su capacidad de emitir mensajes masivos, por ser una de las principales fuentes de información de la sociedad. Reyzábal lo describe (2002) así:

Para decidir, actuar, elegir, rechazar u orientarse, los seres humanos necesitan información, y esta exigencia les hace depender, cada vez más, de los medios de comunicación de masas, que incrementan las potencialidades de su experiencia directa e, incluso acaban sustituyéndola. Esta mediación no obstante, no resulta neutra sino que deriva de una selección, interpretación y elaboración realizada por las propias estructuras (empresariales y humanas, en general) que generan los mensajes mediante los cuales se canaliza la información.” (Reyzábal, 2002, pág. 68)

Es por ello que, las interpretaciones hechas por el público sobre los acontecimientos de la realidad social, son de cierto modo influenciados por lo emitido en los medios de comunicación. Este mercado mediático sirve a posturas e intereses particulares económicos, políticos y sociales, que, como lo explica Ballesta (2002), pueden, a través del discurso, convertir cualquier hecho en un gran evento o inversamente, pues imprimen sus propias percepciones y estereotipos. El seguimiento mediático que se ha hecho al Conflicto armado Colombiano es un claro ejemplo de ello; Bonilla (2006) afirma, que:

Los medios de comunicación (sus agentes, narrativas, valores, rutinas, formatos) son, por cierto, unos centros de significación muy importantes a la hora de fijar determinadas interpretaciones públicas del conflicto armado, pero son unos centros entre otros, y como tal, entran a formar parte de un complejo sistema de representaciones, legitimidades y disputas alrededor de lo que está permitiendo decirse, de lo que estamos obligados a callar, o de aquello que se puede decir, aunque de manera indirecta, con sorna, humor, rumor y parodia, de modo que no despierte la ira de los poderosos, quienquiera que estos sean. (Bonilla, 2006, pág. 173)

Esta afirmación introduce la discusión sobre el papel de los medios de comunicación ante el fenómeno paramilitar; especialmente, la postura con la que se muestra a las víctimas respecto a las “representaciones, legitimidades y disputas”, que se construyen alrededor del mismo, a través de un medio tan importante en la historia del país como el periódico El Espectador, diario que se caracteriza por ser el de mayor trayectoria a escala nacional, y que ha sido víctima del narcotráfico, personificada primordialmente en el asesinato de su Director Guillermo Cano Isaza a manos de Pablo Escobar, justamente en la época en que los tres principales actores de la violencia (paramilitarismo – insurgencia – narcotráfico) se hacían más visibles por sus acciones delictivas indiscriminadas.

Por consiguiente, los medios de comunicación se enfrentan a una constante tensión entre los hechos que ocurren en la realidad social y lo que emiten o dejan de emitir acerca de la misma; de ahí, que los medios adquieren la responsabilidad de buscar el esclarecimiento de la verdad y hacerla pública que en palabras de Blazquez (1994) quien expone las referencias éticas de la *Comisión Hutchins* se define así: “la prensa debería suministrar “un relato veraz, completo e inteligente de los acontecimientos del día en su contexto propio que les dé significado” , aún más si cuentan con la gran capacidad de difusión del periódico. Siendo esta labor una opción política, se abre la discusión acerca de la visibilidad de las víctimas en los medios informativos, como un compromiso histórico y social, por lo que parece ineludible destacar cómo se asume esta relación con las víctimas dentro del diario , subrayar si las víctimas aparecen como sujetos con voz protagónica, sujetos pasivo o sujetos mudos.

Para analizar cómo aparecen las víctimas se adelantó la revisión, clasificación, cuantificación e interpretación de las secciones: judicial, política, de opinión y sección de paz en el periodo ya estipulado; se halló un total de 220, en las que sobresalen contenidos como: a) Parapolítica y fraude electoral uribista; b) Ley de justicia y paz; c) Reorganización del paramilitarismo; d) Sus antecedentes; e) Exhumaciones de fosas y versiones libres; f) Organización social de las víctimas, y g) Paramilitarismo y relaciones con fuerzas armadas legales.

Estas temáticas fueron agrupadas en tres grandes intertítulos (2.1 ley de justicia y paz (975 de 2005): el Manual de Trampas; 2.2 Estereotipos sociales sobre las víctimas: Flojos y acomodones” por culpa de “papá Estado”; 2.3 3 Las luchas organizativas como fuente de reconocimiento y construcción de identidad colectiva: “Yolanda solo quería que se hiciera justicia”) los cuales responden a las subcategorías<sup>30</sup> y al menos a uno de los diez criterios<sup>31</sup> formulados para la selección de

---

<sup>30</sup> Marco normativo, estereotipos, reconocimiento, identidad, actores implicados y contexto.

<sup>31</sup> Representatividad de tipos de víctima, Organización de las víctimas, víctima como sujeto político, Normatividad que involucre a las víctimas, Estereotipos acerca de las víctimas, Reconocimiento social de las víctimas y por parte del victimario, Identidad de la víctima: su propia voz y sentir Actores implicados, Expresión es decir al modo en que se refieren a las víctimas, a los hechos y a los victimarios, temáticas referido a la recurrencia de los temas y Fuentes de información que usa el periódico y que permite que se publiquen.

los artículos, aspectos propuestos durante la etapa de investigación para el desarrollo de este ensayo.

## **2.1 ley de justicia y paz (975 de 2005): el Manual de Trampas<sup>32</sup>**

El Manual de trampas es el nombre que ha utilizado como alusión metafórica a la burla que ha significado para la justicia y para las víctimas la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005. Por lo tanto, este capítulo pretende mostrar una noción reflexiva sobre este marco normativo que dirigió el proceso de desmovilización y posterior reinserción de los paramilitares a la vida civil.

La ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), tal como se mencionó, fue creada como respuesta legal al proceso de negociación con las AUC (Iniciado en 2003). En su enunciación, daba garantía de Justicia, Verdad y Reparación a las víctimas del paramilitarismo, a cambio de beneficios para los victimarios que se acogieran al proceso de desmovilización y que colaboraran en la construcción de la verdad. Desde su planteamiento fue controversial, por las diferentes discusiones alrededor de cómo sería materializado el aporte de los desmovilizados a los principios fundamentales de Verdad, Justicia y Reparación, y garantía de no repetición, ante los beneficios prometidos.

Lo anterior se traduciría en una suerte de “canje” entre victimarios y víctimas; es decir, mientras los victimarios que se acogieran a este proceso -a pesar de haber cometido delitos de Lesa humanidad y tras ser acogidos por el programa para reinsertados<sup>33</sup> al que podrían ingresar los ex paramilitares-, tendrían una pena alternativa de cinco a ocho años, las víctimas recibirían mecanismos de reparación

---

<sup>32</sup> Título extraído de El Espectador, semana del 15 al 21 de octubre de 2006, sección de opinión, redactado por Alfredo molano bravo.

<sup>33</sup> Programa dirigido por la Agencia Colombiana para la Reintegración.

individual-colectiva y accederían a la verdad por medio de la “contribución a la justicia” por parte de paramilitares, derivada de las versiones libres<sup>34</sup> sobre sus delitos.

Ante ello, es ineludible resaltar la evaluación realizada por la Corte Constitucional, sobre la viabilidad constitucional de la Ley de Justicia y Paz; cuatro razones por las cuales se decreta su inconstitucionalidad:

- 1) Inconstitucionalidad formal, por no haberse tramitado como Ley estatutaria. 2) Inconstitucionalidad formal de algunos artículos, por faltas graves en el procedimiento. 3) Inconstitucionalidad material, ley por generar un perdón general, a modo de indulto, frente a graves violaciones de Derechos Humanos. Y 4) Inconstitucionalidad material de algunos artículos, por desconocer parcialmente los derechos de las víctimas y de la sociedad a la Verdad, Justicia y Reparación por los hechos sucedidos. (Fajardo, S.F. párr 24)

Pese a este pronunciamiento de la Corte Constitucional, la Ley entró en vigencia luego de la Sanción presidencial, lo que dio paso a un sinnúmero de discusiones que, en parte, se retoman a propósito de la información recolectada de El Espectador.

Ahora, cabe ubicar, entonces, las diversas posturas. Por un lado, la labor periodística comprometida con las víctimas, que se pudo apreciar en algunos artículos de opinión que divulgaron aspectos importantes sobre las dificultades y luchas a las que se enfrentan las víctimas desde su lugar de enunciación; igualmente, fuertes críticas a aspectos referentes a la reparación de los derechos; Y por otro lado, no se puede dejar de nombrar que, en algunas ediciones, El Espectador informo de manera

---

<sup>34</sup> Artículo 17 de la Ley de justicia y paz (ley 975 de 2003) modificado por la Ley 1592 DE 2012 Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado quien los interrogará sobre los hechos de que tengan conocimiento. En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán la fecha y motivos de su ingreso al grupo y los bienes que entregarán, ofrecerán o denunciarán para contribuir a la reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente o del grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron. La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso, de conformidad con los criterios de priorización establecidos por el Fiscal General de la Nación, elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer los patrones y contextos de criminalidad y victimización. (<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50829#14>)

superficial, sin develar un carácter investigativo, crítico, profundo y riguroso en cuestiones relacionados con las víctimas y la Ley de justicia y paz.

Algunas de las columnas de opinión y noticias en secciones como política, judicial y de paz analizadas guardan relación, implícita o explícita, con el marco normativo, es decir, recogen fragmentos, comentarios o análisis, correspondientes con la reparación a las víctimas enmarcadas en dicha Ley; en este acercamiento pudo identificarse que, alrededor de las víctimas, figuran dos temas relevantes, referidos, por una parte, a las versiones libres de los desmovilizados, y por otra, con las garantías ofrecidas.

Aludiendo al primer aspecto, reiterativo dentro de las noticias, las versiones libres rendidas públicamente ante la Fiscalía General de la Nación, buscan “aportar un contexto claro y completo que contribuya a la reconstrucción de la verdad y al desmantelamiento del aparato de poder del grupo armado organizado al margen de la ley y sus redes de apoyo” (Congreso de la República, 2012). Con estas versiones, se muestran dos caras de la moneda, el inicio de un proceso de reparación a los familiares de los desaparecidos y por la otra se empieza a vislumbrar las dimensiones de los crímenes; principalmente, este mecanismo ha sido útil para el hallazgo de fosas comunes.

Sobre estas, Lopez G, (2007), en el semanario, plantea, que a través de la exhumación de fosas, en Colombia, las víctimas superan en número a las de los crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet en Chile. Tal es la dimensión de la barbarie, que se asimila a las miles de desapariciones producto de las dictaduras de Argentina (aprox. 10.000) y Chile (que oscila entre 13.000 y 10.000), “Con la diferencia de que aquí nadie responde ni política ni jurídicamente, porque esto es una democracia, maestro.” (Cuervo, 2007) Esta denuncia es muestra clara de la importancia que tienen los medios de comunicación en un conflicto bélico.

Así como la revelación cuantitativa de un problema no se constituye en su solución, la revelación del vasto número y ubicación de las fosas comunes no necesariamente se ha constituido en un gran avance para los procesos de Verdad,

Justicia y Reparación. Para el año 2007, no se habían esclarecido elementos esenciales de la construcción de Memoria histórica: la reivindicación de la dignidad de las víctimas y la reparación para sus familiares. Así lo expone Molano Bravo, en su columna de El Espectador, manifestando que, durante el 2007, se hallaron

Enterraderos en la Sierra Nevada, el Catatumbo, Mapiripán, Tierra Alta y San Onofre, de donde han sido exhumados unos 100 muertos. Sin embargo, ninguno ha podido ser identificado positivamente y, por tanto, ningún cadáver ha podido ser entregado a su familia. ¡Escandaloso!” (Molano, 2007, pp. 16A).

Este evento, fue utilizado como exhibición mediática; el Gobierno nacional se jactó de las cifras de cuerpos encontrados, pero sin reflexionar sobre la contribución o no de este evento a los tres pilares de la Ley de justicia y Paz (Verdad, Justicia y Reparación) para las víctimas, que ciertamente, parece cada vez más improbable, por los escasos adelantos en la aplicación de esta normatividad. Otros grupos, que siguen libres, retoman sus posiciones militares; unos jefes remisos esperan mejores condiciones políticas y las víctimas aguardan unas prometidas verdad y reparación que cada vez parecen más remotas. Ni al Gobierno (por cifras), ni a los paras (con extradición) les conviene desarmar el proceso: ¿Y dónde están esos desmovilizados? Los propios comandantes sostienen que los procesos de reinserción no avanzan. (Unidad de paz, 2006)

De ahí que, dicha Ley se ponga en tela de juicio, por parte de diferentes medios de comunicación y expertos en el tema, por no favorecer un proceso de paz efectivo para el país y, sobre todo, por el incumplimiento a la reparación integral, la protección y garantías de no repetición para las víctimas. el caso del asesinato de Yolanda Izquierdo (Líder de la población desplazada en el departamento de Córdoba), denunciado a través de El Espectador, abre paso a la discusión sobre la reparación de víctimas; Como lo recuerda la Unidad de Paz (2007) de El Espectador, en la sección de política, este caso “es la trágica demostración del inmenso poder que detentan actualmente los paramilitares, y de la incongruencia entre los anuncios efectistas sobre

la reparación y la verdadera protección de millones de sobrevivientes de la violencia.” (Unidad de Paz, 2007, 7A)

Yolanda Izquierdo fue una víctima de desplazamiento forzado por parte del paramilitarismo en Colombia, lo que la llevó a convertirse en una líder promotora de la Organización Popular De vivienda (OPD) a la cual pertenecían, para el año 2007, más de 5.000 familias; durante ese mismo año, empezó a asistir a las versiones libres de Salvatore Mancuso. Dicho liderazgo y seguimiento al proceso de este exjefe paramilitar, desató una serie de amenazas en su contra, centradas en que debía vender las tierras que le habían sido restituidas por la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), organización creada por Fidel Castaño, que restituyó a 2.500 familias en Córdoba y, eventualmente, dirigida por Sor Teresa Gómez<sup>35</sup>. Como consecuencia, la líder Izquierdo denunció las amenazas ante el Ministerio de Defensa, con el fin de obtener un esquema de seguridad, el cual no fue proporcionado por demoras burocráticas<sup>36</sup>; al día siguiente, la líder fue asesinada por orden de Vicente Castaño, guiado por el interés de silenciar a las víctimas y el de seguir concentrando tierras. (Unidad de paz, 2007),

Esta concentración ilegítima, inclusive con la intervención estatal, constituye la negación del derecho a la no repetición y a la reparación integral, puesto que, como se afirmaba (Redacción judicial, 2006), los terrenos de los jefes paramilitares se encontraban en manos de testaferros, así que estos no responderían más allá de la entrega de bienes que se comprobara hubiesen sido adquiridos ilícitamente. Por consiguiente, es incoherente, que con la Ley de Justicia y Paz se les exija a los paramilitares ‘devolver’ las propiedades que fueron adquiridas déspota e inhumanamente, con las que se pretendía indemnizar las víctimas.

La fase inicial del proceso de restitución de tierras se dio, la primera semana de septiembre de 2006 (Redacción judicial, 2006) y aproximadamente un mes después, se planteó un polémico proyecto de ley de desarrollo rural, impulsado desde el Ministerio

---

<sup>35</sup> “Sor Teresa Gómez fue señalada de ser la mayor despojadora de tierras del país; creó una “fachada” que le permitió eludir varias veces a las autoridades.” (EE, Redacción Justicia, 2013).

<sup>36</sup> “Yolanda Izquierdo, víctima de un “error burocrático”.” (EE. [WIKILEAKS](#) 19 MAR 2011)

de Agricultura -en ese entonces a cargo de Andrés Felipe Arias. Dicha Ley establecía las condiciones para la “posesión agraria y la concesión de tierras baldías”, después de cinco años de ocupación, sin tomar en cuenta el modo de su ocupación. Su artículo 122 fue controversial, porque permitiría a los paramilitares legalizar las propiedades que adquirieron ilegalmente, es decir, legalizar los desplazamientos. Incluso, la comunidad de los Montes de María, sobre el tema de los territorios, refiere

[...] esta tierra es muy estratégica para el negocio de la cocaína [...] ahora hay una empresa maderera que también está con ellos (los paramilitares) que se quiere quedar con la mitad de los Montes de María y están comprando la tierra a muy bajo precio [...] la tierra más productiva es de ellos ahora. (García Segura, 2006, pp 2A)

Ante las críticas, el Gobierno, en defensa del proyecto de Ley, señaló que solo cubriría terrenos que hayan sido ocupados pacíficamente, frente a lo cual la oposición cuestionaba “¿y cómo demostrar que un predio no fue producto del despojo?” (García Segura, 2006, pp 2A). A pesar de esto, el proyecto fue sancionado como la Ley 1152 de 2007, pero luego declarado inexecutable, en el 2009, por la Corte Constitucional Sentencia C – 175/2009.

Sobre esta importante información, emitida en parte por el semanario, se pueden decir, por lo menos, dos cosas: En primer lugar, un cuestionamiento: si en el momento mencionado se iniciaba el proceso de restitución de tierras ¿por qué, también, se pensaba en leyes que burlaran el proceso, desfavoreciendo a las comunidades afectadas, beneficiando a terratenientes y narcoparamilitares, en continuidad con la dinámica de desigual distribución de territorios? Y, en ese sentido, ¿ya se estaría pensando en una inminente reorganización de estos actores, y por lo tanto, sus lugares de asentamiento?

En segundo lugar, se debe resaltar la importante labor que el periódico asumió al informar sobre esta situación, dejando en manos de los lectores el juicio para reflexionar críticamente sobre este escenario.

En este mismo sentido, mientras la Fiscalía hacía constantes llamados a las víctimas para que denunciaran los delitos cometidos en su contra, mediante su artículo segundo, en la Ley de justicia y paz se propuso el indulto para los paramilitares, considerando que estos pueden incluirse en el delito de sedición<sup>37</sup>, es decir, se consideran delincuentes políticos, tal como lo regula actualmente el artículo 19 de la Ley 782 de 2002<sup>37</sup>.

A pesar de que estos actores cumplían con el requisito de querer reincorporarse a la vida civil, es una contradicción en la aplicación de la ley, pues ese mismo artículo aclara, que no están incluidos los casos de “quienes realicen conductas constitutivas de actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión”<sup>38</sup>; en resumen, delitos de Lesa humanidad de los que, ciertamente, han sido autores.

En este sentido, la invitación de la Fiscalía para que las víctimas denunciaran no es constituyente de la justicia, sino del cumplimiento de procesos burocráticos que pudiesen mostrar ante el público labores concordantes con lo prometido durante el proceso de desmovilización. Situación semejante a la respuesta dada por el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en entrevista con EE. Frente a la pregunta “¿Por qué insiste en que el país no está preparado para asumir la verdad? Indicó:

Creo que hay que pensar en asuntos conexos, como la protección de los familiares de los miembros de las Autodefensas que cuenten la verdad, delimitar claramente qué es lo que se pretende que confiesen. Hay que recordar que ellos se movieron en una matriz social bastante compleja y en las regiones tuvieron muchos auxiliares; ¿se trata de criminalizar esa matriz social? ¿Que todo

---

<sup>37</sup> “El Gobierno Nacional podrá conceder, en cada caso particular, el beneficio de indulto a los nacionales que hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, por hechos constitutivos de delito político cuando a su juicio, el grupo armado organizado al margen de la ley con el que se adelante un proceso de paz, del cual forme parte el solicitante, haya demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil. También se podrá conceder dicho beneficio a los nacionales que, individualmente y por decisión voluntaria, abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y así lo soliciten, y hayan además demostrado, a criterio del Gobierno Nacional, su voluntad de reincorporarse a la vida civil.” (Extraído de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6677>)

<sup>38</sup> *Ibíd.*

aquel que, forzada o voluntariamente, le dio una contribución a las Autodefensas, termine ante los tribunales? Si le permitimos a las Autodefensas que hablen de sus colaboradores ¿Cómo se va a manejar la situación? ¿Vamos a terminar en una cacería de brujas?” (Unidad de paz, 2006, pp 12 A)

Durante esta entrevista, el interrogado toma en cuenta lo que se debe hacer con las familias de los paramilitares, con sus colaboradores y contribuyentes, en términos de protección y justicia, omitiendo totalmente a las víctimas; ello releva la concepción oficial del Gobierno en términos de Verdad, Justicia y Reparación, que deja a la vista el amparo al victimario, justificado con expresiones como “a los colombianos de a pie les diría que mucha gente se equivocó de buena fe, apoyando mecanismos ilegales de seguridad y dinámicas de justicia privada.” (Unidad de paz, 2006, pp 14 A)

Cabe aquí resaltar, que las entrevistas realizadas por el semanario a personajes de la política nacional son un gran aporte para la ciudadanía, sin embargo, carece de un análisis político crítico de las mismas, lo cual permite que los entrevistados puedan emitir sus mensajes, sin contraposición alguna que pueda mostrar claramente distintas perspectivas políticas sobre un tema determinado; para el caso anterior, el entrevistado presentó la opinión oficial o gubernamental; hace falta, así, que los encabezados del periódico le den fuerza al discurso de los autores opositores que, finalmente, se quedan para los artículos de opinión, que sin ser demeritorios, no tienen tanta representatividad como los que encabezan.

Es precisamente en estos artículos de Opinión en donde se refleja ampliamente la importancia de conocer y reconocer las situaciones problemáticas de las víctimas. Con esta premisa, entre los autores que más publican en esta sección, centrándose en las víctimas, son Alfredo Molano Bravo e Iván Cepeda Castro; de este último es significativo retomar un artículo que se enmarca en dos categorías: Postura frente al Marco normativo y reconocimiento de las víctimas. Cepeda Castro (2006) expone, que durante la primera audiencia de Salvatore Mancuso, las víctimas ni siquiera conocían el sistema ni tenían abogados y, a pesar de venir de diferentes lugares del país, especialmente de Córdoba, debieron realizar el viaje con sus propios recursos. Es aquí

donde surge un interrogante: ¿Cuáles son las garantías para el logro de la justicia y la reparación?

Además, para ingresar debían acreditarse como víctimas a través un formulario; solo una persona por familia tendría ingreso, lo que se caracteriza, no solo como riesgoso sino indigno. La importancia de esta información deviene, también, de quien publica, en este caso Iván Cepeda C. (él mismo víctima, por el asesinato de su padre) vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), quien además denunció que Mancuso se limitó a explicar la acción de este grupo ilegal, sin ahondar en todas y cada una de las masacres; es decir, ha faltado en el cumplimiento del principio jurídico de Derecho a la verdad.

Así pues, según la anterior perspectiva se muestra que las garantías judiciales, facilitadas por el gobierno de turno, a los desmovilizados paramilitares, con el marco normativo para la paz, por medio del cual se hicieron visibles las precarias exigencias a los victimarios, que mediante maniobras judiciales, han logrado saltarse los fallos de la Corte Constitucional y el manojito de críticas recibidas; así han conseguido prebendas para tener rebajas de penas, indultos, legalizar predios y terrenos que han sido adquiridos a sangre y muerte. Lo que lleva a cuestionar la famosa frase del presidente Uribe “mano firme” que, con los paramilitares, no se evidenció en su política de consolidación de la Seguridad Democrática.

Todo lo anterior refleja el papel que tuvo El Espectador por ser un medio que cubrió los hechos noticiosos ocurridos durante y posterior a las negociaciones entre paramilitares y el gobierno nacional. En sus publicaciones se resalta las distintas posiciones y críticas, tanto a favor como en contra de la Ley de Justicia y Paz y sus implicaciones para víctimas y victimarios; ante este asunto es imposible distanciarse de los planteamientos de (Blazquez (1994) sobre los procesos de manipulación de información que se dan sobre el producto final que es la noticia antes de ser socializada:

“Las noticias que aparecen en los diarios pasan en su inmensa mayoría antes por el filtro de las agencias informáticas, de los monopolios de dichas agencias y

por la dirección del diario. Esta también el filtro de la ideología del grupo editorial o de la entidad cultural, religiosa o financiera que respalda las publicaciones. Los medios de comunicación social son un instrumento efficacísimo para imponer ideologías e intereses de todo tipo, creando una opinión pública a la medida de los grupos que controlan las informaciones.” (Blazquez, 1994, pág 40-41)

Este planteamiento no puede pasarse por alto para el análisis de las noticias no solo referente a la Ley de Justicia y Paz, sino a todas publicaciones realizadas por este periódico, sin embargo en este punto la reflexión esta fijada sobre los desarrollos que sobre esta Ley se dieron en las columnas de opinión y artículos de secciones específicas del periódico (paz, judicial, investigación). En este medio figuran las columnas de opinión (del año analizado), sobre todo por parte de Alfredo Molano e Iván Cepeda, quienes, del total de las noticias en relación al Marco normativo de la Ley de Justicia y paz, fueron autores del 40 %. Con relación a los artículos, en secciones como la Judicial presento entrevistas, en su mayoría que no contenían un análisis que transmitiera la posición clara del periódico frente al tema. Y tanto en la sección judicial como en la de investigación, se emitieron noticias de carácter descriptivo. En este sentido preocupa que, la capacidad de producción de significados sociales de la prensa se limite a la circulación de información masiva, dado que la comunicación es instrumento para “leer no solo lo dominante, sino las diferentes lógicas en conflicto” (Barbero, 1991, pág. 166).

Sartori, (1998) también muestra su preocupación frente a la tematica abordada por Barbero en cuanto este autor sostiene que los medios de comunicación se limitan a informar, el acto que no implica que se brinde conocimiento, es decir que se puede estar informado mas no comprender las implicaciones de la noticia, estos postulados contradicen la definición que hace sobre la prensa Blazquez (1994), sobre que este debe ser un medio que funcione como un “foro común para el intercambio de comentarios y críticas constructivas evitando las distorsiones o manipulaciones sobre las cuestiones discutidas ante el publico.” (Blazquez, 1994, pág. 25) Sobre estos

asuntos también se debe poner atención cuando se haga la revisión de prensa del periódico El Espectador.

## **2.2 Estereotipos sociales sobre las víctimas: Flojos y acomodones” por culpa de “papá Estado”<sup>39</sup>**

Más allá de señalar lo que queda para las víctimas del paramilitarismo, en términos de Verdad, Justicia y Reparación tras las negociaciones de paz con los victimarios, es indispensable aclarar, que socialmente se construyen representaciones, imaginarios y estereotipos frente a la manera de concebir las víctimas, por lo que, a continuación, se realiza un análisis general de la deuda social y la crisis humanitaria por la que atraviesa el país, para posteriormente enfatizar en lo encontrado en el periódico EE.

De acuerdo con el informe ¡Basta ya!, del Centro del Memoria Histórica, se estableció que, en Colombia, el conflicto armado, entre los años de 1958 y 2012, ha causado la muerte de 218.094 personas, entre las cuales solo el 19% (40.787) eran combatientes, mientras el 81% (177.307), civiles. Cifras que claramente confirman que el conflicto colombiano ha trascendido desde enfrentamientos entre las partes a infundir terror, por medio de crímenes de guerra y de Lesa humanidad, en donde la principal víctima es la población civil no combatiente.

Crímenes que van desde asesinatos selectivos<sup>40</sup>, masacres<sup>41</sup>, desapariciones forzadas<sup>42</sup>, secuestros<sup>43</sup>, violencia sexual<sup>44</sup> y desplazamiento forzado<sup>45</sup> y que han dejado

<sup>39</sup> Título tomado del periódico EL ESPECTADOR en la semana del 6 a 12 de mayo de 2007.

<sup>40</sup> En los asesinatos selectivos documentados la tendencia es igual. Entre 1981 y 2012, 16.346 acciones de asesinato selectivo que produjeron 23.161 víctimas. De este total, 8.903 personas fueron asesinadas selectivamente por grupos paramilitares, lo que corresponde al 38,4%; 6.406, es decir, el 27,7% de las víctimas fueron asesinadas por grupos armados no identificados; 3.899 o el 16,8% fueron víctimas de las guerrillas; 2.339, correspondientes al 10,1% del total de asesinatos selectivos, los causaron miembros de la Fuerza Pública; 1.511, es decir el 6,5% de las víctimas fueron asesinados por desconocidos, 83 asesinatos, o el 0,4% del total, fueron el resultado de acciones conjuntas de grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública; y finalmente 13 asesinatos fueron perpetrados por otros grupos. (Centro de Memoria Histórica, 2013, pág. 36)

<sup>41</sup> De las 1.982 masacres documentadas por el CMH entre 1980 y 2012, los grupos paramilitares perpetraron 1.166, es decir el 58,9% de ellas. Las guerrillas fueron responsables de 343 y la Fuerza Pública de 158, lo que equivale al 17,3% y 7,9% respectivamente. Por otra parte, 295 masacres, equivalentes al 14,8% del total, fueron cometidas por grupos armados cuya identidad no se pudo esclarecer. Las veinte masacres restantes corresponden a acciones conjuntas de grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, o a acciones de otros grupos armados (agente extranjero o milicias populares). Esto significa que, aproximadamente, por cada masacre que perpetraron los grupos guerrilleros, los paramilitares efectuaron tres. (centro de memoria historica, 2013, pág. 36)

<sup>42</sup> Con respecto a las desapariciones forzadas existe una notoria precariedad de información sobre los perpetradores. Sin embargo, de acuerdo con las denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos y de familiares de desaparecidos, la presunta autoría de estas acciones estaría concentrada en la Fuerza Pública y en los paramilitares. De los 5.016 casos documentados por las organizaciones mencionadas, se logró establecer al presunto autor en solo 689 casos. De este total, 290 fueron desaparecidos por miembros de la Fuerza Pública, lo que corresponde al 42,1%; 246, lo fueron por grupos paramilitares, lo que equivale al 41,8%; 137 desapariciones, es decir el 19,9%, fueron atribuidas a otros grupos armados; y finalmente, 16 o el 2,3% del total fue atribuido a las guerrillas. (centro de memoria historica, 2013, pág. 37)

como resultado más de seis millones de víctimas, según como lo afirmó la Unidad de Víctimas<sup>46</sup>, sin embargo se podría pensar que, en su totalidad, los colombianos y colombianas, directa o indirectamente, hemos sido víctimas de la crueldad del conflicto, por las condiciones sociales, económicas y políticas que lo generaron, y que al mismo tiempo, hoy lo mantiene.

La violencia causada por los actos perpetrados por los actores armados impactan moral, psicológica y emocionalmente a la población por su directa afectación a la dignidad humana (individual y colectiva), no solo en el momento en el que las agresiones acontecen sino, peor aún, luego de ocurrido el hecho, debido a que alrededor de ello se crean imaginarios y estereotipos sociales<sup>47</sup>, que por la generalización arbitraria e indebida del contexto social, en algunos casos laceran, vulneran y justifican aquellos hechos de barbarie.

Con relación a las víctimas, los escenarios en los que, primordialmente, son fuertemente objeto de estigmatización son, por un lado, suponer que la víctima es culpable de haber recibido este tipo de agresiones y, por el otro, asegurar que son “flojos y acomodones”, estereotipos que se reflejaron en la revisión de prensa en El Espectador.

Claro ejemplo del primero tipo, es lo denunciado por Alfredo Molano en su columna de opinión del periódico, quien realiza señalamientos al Gobierno de Álvaro Uribe por el aumento de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, las cuales responden a que “el gobierno considera que la subversión mimetiza sus

---

<sup>43</sup> De los 27.023 secuestros reportados entre 1970 y 2010, las guerrillas son autoras de 24.482, lo que equivale al 90,6%. Los paramilitares han realizado 2.541 secuestros, correspondientes al 9,4%. Lo anterior significa que, de cada diez secuestros, aproximadamente, las guerrillas son responsables de nueve y los grupos paramilitares de uno. (Centro de Memoria Histórica, 2013, pág. 37)

<sup>44</sup> La violencia sexual en el conflicto armado no ha sido un fenómeno aislado, accidental o marginal.

Las 1.754 víctimas incluidas en el RUV (733 entre 1985 y 2012, más 821 sin año de ocurrencia identificado) contrastan con las 96 confesadas por los paramilitares en sus versiones libres en el marco de la Ley 975 del 2005 y las 142 documentadas por varias organizaciones de Derechos Humanos para el Anexo Reservado del Auto 092 del 2008 de la Corte Constitucional sobre violencia sexual (centro de memoria histórica, 2013, pág. 78)

<sup>45</sup> A diciembre de 2012, el acumulado de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia ascendía a 5'701.996 desde 1985, de acuerdo con las estimaciones históricas de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) En promedio anualmente 211.178 personas se han desplazado dentro del país. Para los últimos 15 años este promedio asciende a la suma de 296.988 personas que cada año han sido desarraigadas de su territorio. (CODHES, 2013, pág. 12)

<sup>46</sup> El número de víctimas del conflicto armado registradas llegó a 6.043.473. desde 1984. (Revista Semana, 2014)

<sup>47</sup> Y pueden ser definidos como “una representación mental sobre simplificada de alguna categoría de persona, institución o evento, la cual es compartida por un amplio número de personas” (Stallybrass como se cita en Tajfel & Forgas, p. 57). Para Stangor (2000) estos tienen un fundamento en la realidad y eso les otorga gran utilidad en términos de aproximación cognitiva a nuestro medio social. Véase en [http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0254-92472007000200007&script=sci\\_arttext](http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0254-92472007000200007&script=sci_arttext)

integrantes dentro de la población civil, por lo tanto hay que golpear ahí. Al igual que Don Berna, Mancuso y Macaco indican: los civiles son guerrilleros.” (Molano B., 2007) De acuerdo con ello, se pueden realizar dos afirmaciones; la primera tiene que ver con el hecho de que, tanto el gobierno como los paramilitares, legitiman la violencia ejercida contra la población civil por considerarla un brazo de la insurgencia, por lo cual, automáticamente, pasan a ser objetivo militar auténticamente abatible. Y la segunda, que al realizar este tipo de afirmaciones, en el imaginario social, se difunde y justifica la criminalización, persecución, hostigamiento y muerte de jóvenes, líderes, campesinos, afrodescendiente e indígenas, mecanismo usado como arma de terror para impedir que el orden social cambie, de ahí que la población puede ser alienada respecto de la manera de concebir a las víctimas.

Frente al segundo tipo, se trae a colación la columna de opinión escrita por José Manuel Acevedo, la cual genera bastante indignación por la manera en que su autor se refiere a las víctimas del desplazamiento a causa de la violencia. En dicho escrito, expresa:

Nada más peligroso que un asistencialismo que vuelve flojos y comodones a los ciudadanos, que quiebra Estado y hace insostenible el futuro de cualquier sociedad que se acostumbra a que la mantengan y no hace nada por sí misma para progresar. (Acevedo, 2007, pp. 19A)

Dicha opinión en razón a que la Corte Constitucional consideró que se debía establecer de forma permanente el subsidio de ayuda de emergencia para desplazados por la violencia; sobre esto, Acevedo anotó, que si se diera una pensión vitalicia a quien se declarara desplazado por la violencia, “¿Quién, cuando papá Estado le da todo sin mover un dedo, va a querer devolverse a sus tierras y quitarse el rótulo de desplazado permanente?” (Acevedo, 2007, pp. 19A).

Visión bastante reducida sobre la complejidad del conflicto armado, político y social y más aún de la situación de las víctimas, del DIH y de las violaciones a los DD HH a manos de actores armados. Alejado, además, de la responsabilidad que recae en el Estado, tanto por acción como por omisión, por su incapacidad, tras más de cinco

décadas de violencia, de asegurar caminos de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición; resguardándose en proyectos paliativos asistencialistas no se resuelve el problema estructural, en el cual se originaron las causas del conflicto. En consecuencia, se interpreta entonces que la postura de Acevedo es lesiva para la construcción de la representación acerca de las víctimas en el entramado social y, sobre todo, en las instituciones dedicadas a la atención a las víctimas.

Aunque no muchas publicaciones refieren estereotipos, las anteriormente presentadas reflejan elementos para el análisis y discusión ante la categoría establecida, se identifica que El Espectador permitió notar a través de artículos, las nociones que resultan de las diversas lecturas que existen alrededor del tema de las víctimas del conflicto armado, lo que puede influir socialmente en la forma como se comprende la realidad de las mismas, es importante decir que la intención no es censurar la opinión de este periodista, sino analizar como las palabras descritas por él pueden desfigurar o configurar nuevas apreciaciones sobre el tema de las víctimas en particular, en este orden de ideas Maturana (1997) advierte que la objetividad en ocasiones se edifica sobre las preferencias del observador, indicando a la vez que es un hecho cercano a la emotividad aspecto que puede referirse a explicaciones subjetivas, que dentro del proceso comunicativo aplica tanto para quien trasmite como para quien la recepciona la información, posibilitando que los argumentos que se tildan de racionales en ocasiones tengan sustento subjetivo.

Cabe resaltar, entonces, la importancia que recae sobre los medios de comunicación al incluir este tipo de opiniones y la necesidad de que la sociedad colombiana comprenda la complejidad del conflicto y las crueles circunstancias a las que se ha tenido que enfrentar más de seis millones de personas en el país. A continuación, se tratará de visibilizar un caso específico, para ilustrar de mejor manera la problemática compleja alrededor de las víctimas.

### **2.3 Las luchas organizativas como fuente de reconocimiento y construcción de identidad colectiva: “Yolanda solo quería que se hiciera justicia”<sup>48</sup>**

Realizar un acercamiento a la comprensión sobre la manera en que son presentadas las víctimas del paramilitarismo en El Espectador, es esfuerzo importante para dimensionar el reconocimiento que se ha construido sobre estos sujetos sociales a través de un medio de comunicación de alcance nacional; por esta razón, en este apartado se acoge la categoría de Víctimas enfatizando en las subcategorías de identidad y reconocimiento social.

La primera subcategoría (identidad) se refiere al análisis de las características comunes que las víctimas han construido sobre sí mismas, a través del proceso de victimización, plasmadas en el periodo revisado de EE. Ahora bien, la segunda subcategoría (reconocimiento) concreta la importancia de conocer cuáles son las características y rasgos que se atribuyen a las víctimas del conflicto armado; adicionalmente, si el reconocimiento público facilita o dificulta las acciones de restitución y reparación a las que tienen derecho.

Antes de entrar en el análisis de estas subcategorías frente a lo publicado en El Espectador, es necesario aclarar o profundizar en la importancia que tienen los movimientos de víctimas para obtener un reconocimiento social, la promulgación de una conciencia colectiva apoyada por un análisis apropiado de la realidad social y la construcción de Memoria histórica. Gran parte de las víctimas de delitos de Lesa humanidad, por parte de paramilitares, se han organizado y creado un movimiento a escala nacional, que se constituyó ante el desconocimiento social de su sufrimiento y la vulneración de sus derechos; estas obtienen cierto protagonismo en la sociedad a través del planteamiento de estrategias de lucha contra la impunidad y el avance en materia de Verdad, Justicia y Reparación integral, por lo que alcanzan un posicionamiento y estatus importante; por ejemplo organizaciones como el Movimiento

---

<sup>48</sup> Título tomado del periódico EL ESPECTADOR en la semana del 4 de febrero al 10 de febrero de 2007

Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el cual según *Peace Brigades International* (2012), agrupó más de 1.500 víctimas, repartidas en 283 organizaciones.

Al contextualizar un poco los esfuerzos de las víctimas por ser tenidas en cuenta, en un entorno de injusticia e impunidad, se puede entrar en detalle de interesantes columnas publicadas en EE, que hacen referencia a la importancia de su actuación y defensa social, afirmando, que “si las versiones de los paramilitares se limitan a intentar convencer la justicia de décadas de masacres y saqueos, la sociedad estará en condición de ejercer una vigilancia crítica.” (Cepeda, 2006, pág. 19A); la cual parte, no solo de comprender la realidad social de las víctimas sino de la exigencia de garantías para las mismas durante los procesos judiciales.

En búsqueda del reconocimiento social de sus garantías, y como parte de la construcción de identidad como sujetos políticos y de derechos, estas poblaciones encontraron posibilidades, a través de la organización social; una muestra de esto: en febrero de 2007, un domingo de ciclo vía bogotana, en la carrera 15 entre calles 72 y 93, como parte de la reconstrucción de Memoria histórica, provocado en parte por el crimen de la líder Yolanda Izquierdo: Un acto simbólico conmemorativo protagonizado por aproximadamente 4.000 mujeres vestidas de negro, sentadas una al lado de la otra, en sillas blancas, portando sombrillas y con un ladrillo marcado con un nombre y una fecha, correspondientes a una persona y el día de su asesinato por los paramilitares. (Suceso referido por M. Ponsford (2007) en su columna de opinión de El Espectador)

Es determinante reconocer, que este valeroso acto de Memoria histórica y restablecimiento de dignidad debiera ser esencial en cualquier sociedad racional, que afronta situaciones de violencia con justicia, pero, tal como lo afirma Ponsford (2007) en su artículo, las personas que pasaban en su día de deporte poco las miraban e ignoraban su intención, observándose como una normalización de la violencia; sobre ello vale decir, que en el campo social, aunque increíble, el reconocimiento de las víctimas es casi nulo.

Otro gran aporte al reconocimiento social de las víctimas lo dio a conocer Molano (2007) en su artículo titulado “Elsa y Mario”, en el cual plasma la historia de un campesino que luchaba por la defensa del medio ambiente y una familia, también campesina, quienes fueron masacrados por parte de cinco paramilitares; dos de ellos lograron escapar, los otros tres fueron absueltos, y luego de ser declarados muertos los Castaño y asesinados los fiscales a cargo, el caso fue cerrado. Por ello, se convoca por parte del CINEP, la Alcaldía mayor de Bogotá y una docena de organizaciones defensoras del Derecho a la paz, a diversos actos en la Plaza de Bolívar, en aras de recuperar la memoria de Elsa y Mario, y de otras miles de víctimas de este fenómeno y en protesta contra la impunidad.

Vale decir, que este tipo de noticias le aportan o dan un gran valor a los procesos que se realizan por parte de las víctimas en pro de la recuperación de la Memoria histórica, que se construye con la unión de todas y cada una de las memorias individuales, configurando así memorias colectivas, diversas, heterogéneas y plurales, producto de hechos acontecidos en el pasado, ya sea reciente o lejano, que hacen parte de un individuo o un colectivo, pero también de un Estado, y por ende, de su historia.

La memoria histórica implica una responsabilidad social y política, que consiste en preguntarle al pasado para responder a las urgencias del presente: “un pueblo con memoria histórica es dueño de su destino” (Díaz, 2010, pág. 2). Esta es una herramienta consciente de reconstrucción de lo acaecido, para estar en contra de hechos que, como es bien sabido, solo traen degradación al pueblo. De no olvidar a los actores involucrados y buscar desenmascarar a los culpables, hallar la verdad y, así mismo, no olvidar el reclamo de justicia, por ejemplo, en casos de guerra o conflicto.

Con todo, muchas de las víctimas han encontrado la capacidad y la fortaleza para identificarse y reconocerse a sí mismos como sujetos políticos, que pueden organizarse y realizar acciones encaminadas a la exigencia de sus derechos y del fortalecimiento de la Memoria histórica. Muestra de esto es el reconocimiento que hace Cepeda (2006) en su columna de opinión titulada “La prohibición legal del

paramilitarismo”, a las organizaciones de víctimas que, entre sus múltiples acciones, se encuentra el desarrollo de un proyecto de ley orientado a la total prohibición de tres modalidades de paramilitarismo identificadas por las víctimas. Esto, con el objetivo de que sea una realidad la Garantía de no-repetición de los hechos violentos.

El proyecto de Ley decretaría, en primer lugar, la interdicción de cualquier política pública tendiente a armar a los civiles, o a otorgarles funciones propias de las Fuerzas Militares o de los Cuerpos de Seguridad estatales (cooperativas de tipo Convivir, redes ciudadanas de informantes y cooperantes, etc.). Así mismo, precisaría la tipificación del delito de alianzas entre los agentes estatales y los grupos paramilitares; aumentaría las sanciones para quienes incurran en estas prácticas o fomenten la infiltración paramilitar en el Estado, y el uso de la contratación pública para beneficio de particulares pertenecientes a organizaciones paraestatales. Por último, prohibiría la planificación de operaciones encubiertas, de tipo paramilitar, por parte de miembros de la Fuerza Pública, y la conformación de escuadrones de la muerte y grupos mercenarios sobre el territorio nacional. (Cepeda, 2006, pág. 19A)

Otra muestra del gran alcance que han tenido las víctimas al organizarse, fue reportada por Jimeno (2007) al hacer el seguimiento periodístico del proceso de retorno de algunas familias víctimas del desplazamiento a la zona del Alto Ariari, en el departamento del Meta. Aunque estas familias sufrieron diversos problemas en su intento de regresar -como la persecución y asesinato de sus líderes-, la fuerza de voluntad y el acompañamiento de organismos no gubernamentales se sumaron para lograr el objetivo, ahora sus terrenos son Territorios de paz.

Las acciones organizativas de las víctimas, se contrastan con las de sus victimarios, aunque resulta indignante, que estos últimos, bajo una lógica despiadada, que solo se enfoca en el propio interés, no tengan la más mínima intención de

reconocer las afectaciones a las víctimas como sujetos históricos que merecen conocer la verdad; buen ejemplo de ello lo describe Molano en su artículo Desapareciendo desaparecidos NN: “Hace unos días, las madres de unos jóvenes que nunca regresaron, fueron a rogarle a Ramón Isaza que les dijera dónde estaban sus hijos. Con la frescura que la impunidad cobija, respondió: no sé, nosotros los botamos al río para no dejar rastros”; con este fragmento, se hace necesario preguntar, si al día de hoy los funcionarios públicos han podido promover el esclarecimiento de la verdad, develando los “contextos, las causas y los motivos de los crímenes” tal como se traza en la ley 1592 de 2012, aportando, de esta manera, al reconocimiento oportuno y veraz de las víctimas.

Aquí vale la pena hacer una pequeña disgregación sobre posiciones como la de Eduardo Pizarro, Presidente, en 2007, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR): Establecía, que las confesiones de los paramilitares no deben ser transmitidas por televisión en directo, ni las víctimas deben contar públicamente y acusarlos por su tragedia, ya que para Pizarro esto se asemejaría a un *Reality* paramilitar; por ende, para él, la acción adecuada es una ceremonia simbólica de reconciliación y perdón; opinión que compartió una lectora de El Espectador expresando en la sección Carta de los lectores:

Qué irrespeto con los que estamos en medio de este conflicto; qué burla todo un despliegue de camarógrafos para que brillen unos salvajes asesinos, para lucirse y mostrar al mundo cómo se juzga los delincuentes en Colombia. Cómo se atreven a usar mi dolor y el de muchos colombianos para beneficios políticos, para mostrar logros. (Correa de Andreis, 2007, pp 20A).

Mediante el análisis de este tipo de información se puede decir que la construcción del discurso de la realidad atiende a aspectos subjetivos, que deben ser orientados desde una percepción individual hacia una memoria colectiva, mediante la socialización pública de los hechos violentos y el reconocimiento de las víctimas resultantes de estos. Siendo así, una revelación de la identidad nacional, que poco se

ve inmersa en las realidades cotidianas de los centros y más cercana a las periferias. Así mismo, pudo constatar que las víctimas, al organizarse, son sujetos activos en la restitución y lucha por sus derechos, esto también hace parte del reconocimiento que ellos mismos construyen sobre su situación y sobre cómo son comprendidos socialmente.

De este apartado se interpreta que de la poca información sobre luchas organizativas de las víctimas emitida por el EE se puede decir que, aunque este no da cuenta o no refiere específicamente su postura acerca de este tema, si es responsable de lo que emite, puesto que esto se registra en la memoria de los lectores, es decir, empieza a hacer parte de una memoria colectiva y por lo tanto se puede agregar que el tema específico de visibilización de las luchas organizativas de las víctimas no fue un tema tratado con suficiente profundidad, tanto así que durante el año analizado solo una noticia propiamente de la sección política refiere a este tema, el resto provienen de la sección de opinión, que en lo que al metalenguaje<sup>49</sup> referido por Barbero (1991) supone una organización jerárquica de la información que no privilegia el tema en este caso de las víctimas en su forma de organizar la información.

## **A modo de conclusiones**

La investigación desde las ciencias sociales, pretende comprender la realidad social para aportar en pro al mejoramiento o transformación de problemáticas colectivas, abordados desde ámbitos de carácter ético, político y metodológico, que intentan comprender a profundidad el contexto histórico, en que se desenvuelven los sujetos actores del problema y para quienes desean, como Trabajadores sociales, aportar a la construcción de Justicia social. Adicional a lo anterior, se suma el activo acompañamiento en los procesos de generación de memoria colectiva y lucha organizativa junto con la eminente defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Apoyado en este propósito se desarrolló el ensayo, que a continuación, luego de lo expuesto, descrito y analizado a lo largo de la escritura es preciso resaltar algunas

---

<sup>49</sup> Para ampliar el tema sobre metalenguaje remitirse a (Barbero, 1991)

conclusiones importantes que responden primordialmente a las hipótesis planteadas. La primera referida a los giros, rupturas y continuidades del fenómeno paramilitar y la transición a lo que hoy se conoce como Bacrim; la segunda relacionada a el poder que tienen los medios de comunicación para transmitir comprensiones sociales alrededor del fenómeno paramilitar y sus víctimas. Finalmente, la tercera lo concerniente a las víctimas del paramilitarismo y el periódico El Espectador.

Con relación a la primera hipótesis, al ahondar sobre el fenómeno paramilitar se puede puntualizar como dinámico y complejo por lo que ha sufrido giros, rupturas y continuidades a lo largo de su historia. Se destaca que desde sus orígenes en los años 40 han logrado posicionarse a través de la cooptación del poder Estatal, el monopolio económico y territorial, que a lo largo de su trayectoria y expansión, encontraron atractivo el narcotráfico y la explotación minera como su principal fuente de financiación, que se suma a las fuertes alianzas con sectores políticos y económicos, que buscaban y recibían beneficios de forma recíproca en la lógica de imponer y hegemonizar un tipo de sociedad deseada.

Ahora bien, dentro de los giros del fenómeno se encuentran aspectos relacionados con los fines “contrainsurgentes”, sus alianzas, su estructura y forma de denominación que a continuación se desarrollan.

En primera instancia, algunos autores cuestionan el carácter “contrainsurgente” de los paramilitares, mientras otros le atribuyen desde sus orígenes dicho carácter y sustentan que por sus transformaciones, en la actualidad, cambiaron esta característica, en cuanto a que, en algunas regiones se enfrentan abiertamente a grupos insurgentes, en otras crean alianzas con estos, caracterizándose como una relación amigo/ enemigo que responde a intereses propios principalmente en sustento del negocio del narcotráfico; además continúan ejerciendo control político y social sobre la población.

En segunda instancia, aunque se mantiene el hecho de que estos grupos defienden intereses privados de las clases dirigentes en búsqueda constante por promover un modelo de Estado conservador, que afecta de manera significativa la Democracia y la participación ciudadana ampliando, cada vez más, la brecha social existente. El giro se manifiesta, según este ensayo en que las esferas políticas aliadas con estos grupos ahora están a la orden de los mismos, en este sentido los grupos paramilitares reorganizados en la actualidad como Bacrim, pareciera, que ostentan mayor poder sobre el orden político – social.

En concordancia con los giros de este fenómeno se puede caracterizar su constante y habitual cambio de denominaciones que se les ha asignado públicamente, construidas en relación con las transformaciones superficiales estructurales que estos grupos han atravesado y que con ello en algunos casos ha alterado aspectos como: su reconocimiento social y jurídico, la táctica militar que es usada por las fuerzas armadas para su control, además de su responsabilidad en la práctica de hechos victimizantes. Todo lo anterior constituye una ventaja estratégica en el transito del paramilitarismo a bandas criminales emergentes.

En cuanto a las continuidades, se identificaron cuatro aspectos a resaltar, en primer lugar lo referente a la ocupación territorial, en segundo lugar el ataque persistente a la población civil como forma de terror y obtención de poder, en tercer lugar la forma de financiación de su organización, en cuarto lugar la continuidad de la cooptación estatal fortalecida desde el proceso de desmovilización. En cuanto a las zonas en las que hacen presencia se muestra que las mal llamadas Bacrim se mantienen en los territorios ubicados estratégicamente para realizar acciones delictivas (narcotráfico, cultivos ilícitos, minería, extorsiones, etc).

Sobre el segundo aspecto se identifica que ni siquiera durante el proceso de paz el paramilitarismo cesó las hostilidades contra a población civil, a pesar de que se mostraron “exitosas” las cifras en las ceremonias de desmovilización y desarme que se gestaron entre 2003 y 2007, en ultimas se establece que los logros cuantitativos no

representan la voz, ni la situación nefasta por la que atraviesan las víctimas, pues los millares de afectados no reparados muestran un incipiente proceso.

Estos grupos continúan implantando la lógica de terror siendo en la actualidad los primeros en las listas de actores que comenten hechos victimizantes, a través del uso de las armas y estrategias de represión hacia la población civil, siendo los campesinos, niños y mujeres los principales afectados por los hechos aberrantes, atroces y vergonzosos con altos grados de sevicia constituyentes como crímenes de lesa humanidad, condenados internacionalmente gracias a las luchas organizativas adelantas por distintos sectores que por su defensa a los DD HH se han convertido en objetivo militar tal como: sindicalistas, líderes y defensores de Derechos humanos y, en general, integrantes de movimientos y organizaciones sociales. Con esto no se puede desconocer que las afectaciones han tenido tal magnitud que han repercutido política, cultural, económica y socialmente en todo el conjunto de la sociedad Colombiana.

Acerca del tercer aspecto relacionado con las zonas de influencia, se menciona que las llamadas Bandas Criminales se mantienen allí y fortalecen los canales del narcotráfico y las alianzas políticas, incluso con importantes trasnacionales, entre otros, para salvaguardarse de la justicia y financiar su proyecto guerrerista.

Sobre el cuarto aspecto, se denota que la intervención por parte del gobierno de turno no se hizo esperar, lo que se materializó en las maniobras encaminadas a brindar garantías a jefes paramilitares, mientras las víctimas socialmente son rezagadas respecto a verdad, justicia y reparación. El reclamo social ante el accionar del paramilitarismo lo hizo evidente; como respuesta, la alianza política de este grupo con los estamentos de poder creó una estrategia para hacerlo invisible y terminar modificándolo al nombre de Bandas Criminales Emergentes (Bacrim), con el fin de borrar la cadena de hechos de horror y, por lo tanto, la gravedad de sus delitos. Dicha estrategia se materializó mediante el proceso de desmovilización fruto del Pacto de Ralito, que dio paso a la impunidad judicial; los criminales pudieron escaparse, de manera fácil, de las penas y castigos correspondientes.

Es así que, hoy las llamadas Bacrim, según las distintas perspectivas, son continuidades paramilitares que han sido nombradas de diversas formas, (término que responde a la denominación oficial), ha buscado imponerse como un discurso legítimo que ha propiciado una pérdida de memoria histórica dejando vacíos en la construcción de verdad y justicia como respuesta de reconciliación y paz.

Curiosamente, luego de aproximadamente seis años de la existencia y creación de las Bandas criminales, no se hace explícito el reconocimiento de estas relaciones entre las Bacrim con las anteriores estructuras económicas y políticas; además, se ha procurado mantener la invisibilidad de los hechos criminales cometidos contra la población civil mostrándolos como hechos aislados cometidos por la delincuencia común. Un ejemplo de ello es la creación de la Ley 1448 de 2011, mediante la cual se negó la existencia de víctimas de Bacrim por no ser consideradas un actor armado dentro del conflicto en la legislación interna.

Junto a este panorama, la falta de divulgación pública sobre la situación de las víctimas desde sus voces, ha dado paso a la naturalización colectiva de la violencia paramilitar, promovida por el poder Estatal que se disfraza bajo la bandera de la democracia. Se ha fragmentado y hegemonizado así, imaginarios sociales sobre la naturaleza justificable de la violencia, también a través de los medios de comunicación debido al gran poder que ostentan por la información que captan y suministran en un hecho noticioso, aspecto en el que de algún modo han contribuido algunas publicaciones de El Espectador.

Hablando de medios de comunicación, cabe resaltar lo expuesto en El Espectador, con relación a lo que se emitió de las víctimas del paramilitarismo, sus luchas y experiencias. Se destaca que durante el año comprendido entre junio de 2006 y junio de 2007, se denota que hubo invisibilización de las víctimas en el periódico, lo cual se puede interpretar como un fenómeno cosificado ya que, según Thomson (1993) las situaciones históricas transitorias se presentan como permanentes, naturales y de sentido común; esto se refleja en las escasas noticias y artículos dedicados al reconocimiento de ellas como parte de un supuesto proceso de reconciliación social,

dignificación y significación de sus memorias, luego de atravesar la barbarie cometida contra las mismas.

En este mismo sentido, el lugar que se les da a las víctimas es ambiguo puesto que, por un lado, renombrados columnistas como Alfredo Molano e Iván Cepeda, a través de sus artículos, dieron a conocer a través de sus investigaciones y experiencia, de manera crítica y posiblemente desde el lugar de las víctimas a las realidades a las que estas se enfrentaban durante y posterior al Proceso de Paz de Ralito, además de resaltar las luchas que estas mismas estaban promoviendo, lo cual es un agregado a los procesos organizativos. Y por otro lado se resaltan noticias y opiniones que no le dieron la misma importancia a las víctimas, aportando sus opiniones y análisis personales en defensa inamovible acerca del proceso de justicia y paz, ciertamente proyectan estereotipos acerca de las víctimas, lo cual se comprende como “legitimación del fenómeno”; en este caso en el periódico se plasma un sistema de dominación que se presenta como legítimo, justo y digno (Thompson, 2002)

Apropósito de la Ley de justicia y paz, se puede asumir que en artículos emitidos en el periódico, ideológicamente se opta por disimular el fenómeno, lo que significa que alrededor del tema se oculta, se niega o se oscurecen las relaciones (Thompson, 2002), esto se justifica en que la fuente de análisis (El Espectador) no expresó su posición frente a la expedición de dicha ley, ni sus implicaciones tanto a nivel de las víctimas y de los victimarios. Siendo, este un tema de análisis coyuntural que tuvo y tiene gran trascendencia en ámbito nacional por su impacto histórico en el país; ahora bien, resulta cuestionable que en El Espectador se publiquen artículos que pueden llegar a degradar la dignidad de las víctimas, revictimizándolas tal como los mencionados durante el intertítulo 2.2. *Estereotipos sociales sobre las víctimas: Flojos y acomodones por culpa de “papá Estado”*.

Subcapítulo, que es también muestra de la fragmentación del fenómeno, ya que produce, reproduce y circula significados de manera fragmentada, de tal modo que los sujetos quedan ubicados en oposición a otros, promoviendo la discriminación social entre sectores sociales, tal como el caso de la construcción de estereotipos a través de

señalamientos hacia las víctimas, en primera medida refiriéndose a su acomodación y conformismo en un estado que puede brindarles todo a través de la asistencia humanitaria, en fin llamándolos flojos. Y en segunda medida son culpados de su condición de víctimas, justificado en que merecen esa situación por alguna razón que pudiese ser caracterizada como “sujeto en contra o fuera del sistema”. Recae, así gran importancia en este tipo de publicaciones ya que en “las tendencias que toma la cultura al ser moldeada por los medios” (Barbero, 1991, pág.191) es la prensa uno de los instrumentos de la massmediación que ha contribuido a la universalización de las formas de pensamiento, construcción de ciudadanías - nacionalidades, y estilos de vida que provienen de la cultura norteamericana, legitimando o deslegitimando ideas y comportamientos sobre los sujetos según su posición social.

Con todo esto, resta decir, que a través de la profundización y análisis sobre este tema, El Espectador durante el año analizado público en las páginas jerárquicamente más importantes como titulares y sección política o judicial noticias relacionadas o específicas con el fenómeno paramilitar, la parapolítica, la desmovilización de los grupos paramilitares, entrevistas a influyentes personajes del ala conservadora sobre el tema, dejando un poco de lado las voces de las víctimas y organizaciones sociales que las representan y a las que pertenecen, así, las víctimas aparecen de un lado señaladas y por otro defendidas, sin que el diario muestre claramente su postura sobre el tema, lo cual resulta inesperado y confrontante frente a la idea que se tiene de un diario que se autodenomina crítico, es por ello que al finalizar este proceso de investigación y construcción del ensayo, surgen preguntas útiles y necesarias hacia nuevas investigaciones:

**¿Ahora que ya se cumplen las condenas de los paramilitares que garantías hay para las víctimas y que planes hay para la reinserción de los grupos paramilitares a la sociedad civil?**

**¿Cuál es la opinión de las víctimas y la afectación para las mismas en términos de verdad histórica, ante las publicaciones que realizan los medios masivos de comunicación y, en especial, la prensa escrita?**

## 4. Anexos

### 4.1 Glosario

#### A

**Alienación:**, retomado desde (Cattarinussi, 1986) que hace referencia a ese proceso de enajenamiento que sufre el sujeto sobre sí mismo y sobre la realidad a la que pertenece, este proceso tiene las siguientes características desarrolladas por Seeman (1959): impotencia, falta de sentido, falta de normas, auto-enajenamiento que afecta las dimensiones del sujeto. Así mismo Blauner propone cuatro elementos constitutivos de la Alienación denominadas a continuación; “Ausencia de poder y Ausencia de significado” como las dimensiones objetivas, “auto extrañamiento y aislamiento social” como las subjetivas, estas fueron el resultado del intento de operacionalizar el proceso de alienación iniciado por Seeman.

**Anglogold Ashanti:** *“Anglo Gold Ashanti es la tercera más grande multinacional explotadora de oro en el mundo, que ha sido denunciada por violación de derechos humanos y afectación al medio ambiente en varios países.”* (Red de hermandad y solidaridad en Colombia, S.F., párr. 1)

#### B

**Bacrim:** Bandas Criminales Emergentes

#### C

**Contexto:** *“Situación o conjunto de circunstancias en que se encuentran el emisor y el receptor durante el proceso de comunicación y que permiten, en ocasiones, entender correctamente el mensaje.”* (Ander-Egg, 1986)

**Contexto social:** *“Conjunto de elementos de una sociedad que condicionan una buena parte del trabajo social. Está conformado básicamente por la naturaleza de la comunidad, el tipo de país donde se ejerce el trabajo social, de su desarrollo y de su régimen político; específicamente por el conjunto de normas con respecto a la población, tanto social, legal, como económico y cultural, lo cual determina e induce la demanda de los usuarios y la acción de los (as) trabajadores (as) sociales.”* (Ander-Egg, 1986)

## E

**Etimológico:** referido a Origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. (Real Academia Española, 2001)

**Estructura social:** *“Trama de relaciones de interdependencia relativamente estables que existen en un conjunto determinado de posiciones sociales, instituciones, grupos, clases u otros componentes de la realidad social del mismo o distinto nivel, sin importar la identidad de los elementos que se suceden como sujetos de dichas relaciones. Diccionario de trabajo social.”* (Ander-Egg, 1986)

**Escuadrones de la muerte:** Campbell (2000) define los escuadrones de la muerte: “Organizaciones clandestinas y usualmente irregulares, con frecuencia de naturaleza paramilitar, las cuales llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales y otros actos violentos (torturas, violaciones, incendios intencionados, bombardeos, etc.), en contra de individuos o grupos de personas específicos. Los asesinatos son su actividad principal, y en algunos casos la única. Excepto en los pocos casos en que grupos insurgentes los crean, los escuadrones de la muerte operan con total apoyo, complicidad o consentimiento del Estado o, por lo menos, de algunas partes de él.” (Kalyvas & Arjona, pág. 26)

## F

**Fenómeno Chulavita:** *“conjunto de expresiones, comportamientos, actitudes, etc., que conducen a la sacralización de la política con posturas profundamente sectarias lindantes con el paroxismo, comparable, guardando las diferencias y proporciones, a grupos fundamentalistas como “los cristeros” de México, o a frecuentes movimientos reaccionarios que acompañan a los procesos revolucionarios, sin que con ello queramos decir que las transformaciones que vive el país en estos tiempos sean un proceso revolucionario”* (Guerrero, 1991, pág. 53)

## H

**Hegemonía:** conceptos de alienación y víctimas. En primer lugar se comprende la hegemonía desde los postulados de Raymond Williams como “un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida: nuestros sentidos y dosis de energía, las percepciones definidas que tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo” (Williams, 2009, pág. 151) que incluyen las formas de control y adoctrinamiento que puede lograrse mediante condicionamientos y coerción directos o por medio de la influencia y persuasión. Así mismo haciendo alusión a la Teoría de la Hegemonía propuesta por Antonio Gramsci se puede entender este concepto como “la capacidad de dirección intelectual y moral en virtud de la cual una clase dominante, o aspirante al dominio, logra acreditarse como guía legítimo, se constituye en clase dirigente y

obtiene el consenso o la pasividad de la mayoría de la población ante las metas impuestas a la vida social y política de un país.”(Belligni, 2008, pág. 747)

**Heterogéneo:** Compuesto de partes de diversa naturaleza. (Real Academia Española, 2001)

## I

**Ideología:** *puede interpretarse como un sistema de representación de la realidad que usan los diversos estamentos de acuerdo a los postulados de (Thompson, 2002) (en este caso las clases dominantes) para legitimar su posición y orientar sus conductas.*

**Imaginario social:** *Son aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y de integración social, que hacen viable la invisibilidad social. Consiste en la elaboración y distribución generalizada de instrumentos de percepción de la realidad social construida como realmente existen. (Ander-Egg, 1986)*

**Insurgente:** referente a sublevado, Excitar indignación, promover sentimiento de protesta. (Real Academia Española, 2001)

## J

**Jerarquía:** Es el orden entre elementos de un conjunto, que los clasifica formando un conjunto parcialmente ordenado. Puede aplicarse a personas, animales o cosas, en orden ascendente o descendente, según criterios de clase, poder, oficio, categoría, autoridad, o cualquier otro asunto que conduzca a un sistema de clasificación. En una determinada sociedad, es el orden de los elementos existentes, ya sean políticos, sociales, económicos, etc. (Ander-Egg, 1986)

**Justicia transicional:** se origina en la ciudad de Atenas, según Elster (2006) enmarcada como un enfoque filosófico usado por los estados para superar las épocas de guerra o conflictos y compensar las situaciones que las víctimas debieron sufrir, fortaleciendo incluso la democracia. Esta categoría tiene especial relación con la comunidad internacional, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La decisión de un Estado de implementar la justicia transicional se da cuando una de las partes se considera como “perdedora” y acogiéndose a acuerdos en los que se castiga de manera individual o colectiva. (Elster, 2006)

## L

**La violencia:** El periodo comprendido entre 1946 a 1958 fue llamado históricamente *la violencia* por las altas tasas de violencia que se registraron en el país entre los partidos tradicionales Conservador y liberal.

## M

**MAS:** *“El MAS era una asociación secreta militar apoyada por los más importantes miembros de los carteles de Medellín y del Valle. Según se ha establecido posteriormente, 233 capos armaron un ejército de 2230 hombre para fusilar, sin formula de juicio, a los secuestradores; según la procuraduría “de las 163 personas acusadas de pertenecer al MAS, 60 eran miembros del servicio activo de las Fuerzas Militares”* (Molano , 2006, págs. 93, 94)

**Memoria histórica:** hace parte del proceso de Justicia Transicional, como un esfuerzo consciente de recuerdos colectivos de los sufrimientos pasados de un pueblo, resistiéndose a caer en los mismos errores, reconociendo y aprendiendo de todo lo vivido con especial respeto, puesto que sin memoria histórica se está condenado a vivir cada día el mismo sufrimiento. (Elster, 2006)

## O

**Objetividad:** Capacidad de estudiar los hechos tal y como se presentan, sin aferrarse a opiniones o juicios preconcebidos, con disposición para abandonar cualesquier posición que la realidad muestre como falsa, inadecuada e insatisfactoria. En este sentido la objetividad se presenta como un aspecto sustancial de la actitud científica y profesional. (Ander-Egg, 1986)

## P

**Parapolicial:** 1. Adj. Dicho de una organización: Que realiza actos ilegales y funciones propias de la policía al margen de esta. (Real Academia Española, 2014)

## S

**Subalternidad:** referido a supeditar: Sujetar, oprimir con rigor o violencia. (Real Academia Española, 2014)

## V

**Violencia Bipartidista:** Los partidos tradicionales colombianos, el Conservador y el Liberal, cuentan con casi siglo y medio de historia; su aparición formal se remonta a 1848 y 1849, respectivamente. Desde entonces y hasta mediados del siglo XX, las diferencias entre las dos colectividades se han definido a través de las armas; han protagonizado siete guerras civiles nacionales, y decenas de conflictos y levantamientos regionales. Con el cambio de hegemonía, en 1930, se desatan nuevos brotes violentos en varios departamentos, especialmente en los de Santander y Boyacá, al nororiente del país. Este antecedente repercute, a su vez, en la siguiente etapa de persecución política, conocida como La Violencia (1946-1958). El asesinato

del líder Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, marca un hito en la agudización de este enfrentamiento.

## 5. Referencias Bibliograficas

Abela, J. A. (2002). Las técnicas de análisis de contenido: una revision actualizada. *Centro de estudios Andaluces* , 1 - 34.

Acevedo, J. (del 6 al 12 de Mayo de 2007). La Corte y los Desplazados. *El Espectador* , pág. 19A.

*Agencia Prensa Rural*. (16 de Febrero de 2011). Recuperado el 13 de Enero de 2014, de Colombia: Estrategia mediática de la violencia paramilitar: [prensarural.org/spip/spip.php?article5341](http://prensarural.org/spip/spip.php?article5341)

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (14 de Febrero de 2001). *pronunciamientos*. Recuperado el 29 de Enero de 2014, de <http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/imprimir.php3?texto=po0102.txt>

Ander-Egg, E. (1986). *Diccionario del Trabajo Social*. Bogotá: Plaza y Janes.

Andréu Abela, J. (2002). *Las técnicas de Análisis de Contenido: una revision actualizada*. Sevilla: Fundación Centro de Estudios Andaluces .

Asamblea Nacional Constituyente . (1991). *Consulta la norma* . Recuperado el 20 de 01 de 2014, de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125>

Ballesta Pagán, J. (2002). Educar para el Consumo Crítico de los Medios de Comunicación. *Etic@net* (0).

Barbero, J. M. (1991). *De los medios a las mediaciones. Comunicación cultura y hegemonia*. Mexico: Editorial Gustavo Gilli, S.A.

Barbero, J. M., Restrepo, J. D., Herrán, M. T., & Rey, G. (2013). Medios de comunicación y guerra, debate 26. *Revista de Estudios Sociales* , 117-119.

Barón Villa, M. (2011). *Apogeo y Caída de las Autodefensas de Puerto Boyaca: Del paramilitarismo a los Señores de la Guerra del Magdalena Medio*. Bogotá: Universidad Nacional De Colombia.

Belligni, S. (2008). Hegemonía. En A. Agosti, N. Bobbio, & N. y. Matteucci, *Diccionario de Política* (págs. 746 - 748). Mexico: Siglo XXI editores.

Betancourt, D., & Garcia, M. L. (1994). *Contrabandistas, marimberos y mafiosos*. Colombia : Tercer mundo.

Blazquez, N. (1994). *Ética y medios de comunicación* . Madrid: Biblioteca de autores cristianos.

Bonilla, J. I. (2006). Cuando el discurso público no lo explica todo. Una mirada a la comunicación política en contextos de miedo, hostilidad y terror. En J. M. Pereira G, & M. Villadiego Prins, *Entre miedos y goces. Comunicación, vida pública y ciudadanías* (págs. 164-188). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Calvo Ospina , H. (04 de 2003). *Le Monde Diplomatique*. Recuperado el 23 de 08 de 2013, de <http://monde-diplomatique.es/2003/04/ospina.html>

Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP . (S.F). SANTA FE DE RALITO Y LA LEGITIMACIÓN DEFINITIVA DEL PARAMILITARISMO. *Noche y Niebla* , 1 - 7 .

centro de memoria historica. (2013). *¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Imprenta nacional.

Cepeda , I. (Semana del 9 al 15 de Julio de 2006). La prohibición legal del paramilitarismo. *El Espectador* , pág. 19A.

Cepeda Castro , I. (24 al 30 de 12 de 2006). "La audiencia". *EL ESPECTADOR* , pág. 19A.

Cepeda, I. (17 al 23 de Septiembre de 2006). 1945 - 1964. *El Espectador* , pág. 19A.

CODHES. (2013). *La crisis humanitaria en colombia persiste. El pacífico en disputa. Informe de desplazamiento forzado 2012*. Bogotá: CODHES.

Colectivo de abogados Jose Alvear Restrepo. (14 de marzo de 2006). *Colectivo de abogados José Alverar Restrepo*. Recuperado el 14 de enero de 2014, de <http://www.colectivodeabogados.org/CONSOLIDACION-PARAMILITAR-E>

Colprensa. (17 de 05 de 2013). *Víctimas de bandas criminales serán beneficiadas por Ley de Víctimas*. Recuperado el 09 de 10 de 2013, de C. El Colombiano : [http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/V/victimas\\_de\\_bandas\\_criminales\\_s eran\\_beneficiadas\\_por\\_ley\\_de\\_victimas/victimas\\_de\\_bandas\\_criminales\\_seran\\_beneficiadas\\_por\\_ley\\_de\\_victimas.asp](http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/V/victimas_de_bandas_criminales_s eran_beneficiadas_por_ley_de_victimas/victimas_de_bandas_criminales_seran_beneficiadas_por_ley_de_victimas.asp)

Comision Colombiana de Juristas . (2007). *Anotaciones sobre la ley de "justicia y paz", Una mirada desde los derechos de las victimas* . Bogota, Colombia : Opciones graficas editores Ltda.

Comision Colombiana de Juristas. (2010). *Colombia: La metafora del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Segundo informe de balance sobre la aplicacion de la ley 975 de 2005*. Bogota: Opciones graficas editores Ltda.

Comision Colombiana de Juristas. (2010). El incumplimiento de la obligacion del estado de desmantelar los grupos paramilitares . En *Colombia: La metafora del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Segundo informe de balance sobre la aplicacion de la ley 975 de 2005* (págs. 52 - 117). Bogota: Opciones graficas editores Ltda.

Comision Nacional de reparacion y reconciliación. (2007). *Disidentes, rearmados y emergentes: ¿Bandas criminales o tercera generación paramilitar?* Bogota.

Comite Internacional de la Cruz Roja. (Julio de 2004). *Cetro de documentación Europea*. Recuperado el 09 de Noviembre de 2013, de [http://cde.usal.es/arc/doc\\_curso\\_derechos\\_hum/derecho\\_internacional\\_humanitario.pdf](http://cde.usal.es/arc/doc_curso_derechos_hum/derecho_internacional_humanitario.pdf)

Congreso de La República de Colombia. (03 de 12 de 2012). Ley 1592 de 2012.

Congreso De La Republica De Colombia. (23 de diciembre de 2002). *Ley 782 del 2002*. Recuperado el 09 de mayo de 2013, de Secretaria General del Senado: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley\\_0782\\_2002.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0782_2002.html)

Congreso de la republica. (03 de 11 de 2012). *ley 1592 de 2012*. Obtenido de Secretaria General del Senado : [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley\\_1592\\_2012.html#10](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley_1592_2012.html#10)

Correa de Andreis, M. (4 al 10 de febrero de 2007). "Pararealities". *EL ESPECTADOR*, pág. 20 A.

Cruz Rubio Liniers, M. (s.f.). *EL ANÁLISIS DOCUMENTAL: INDIZACIÓN Y RESUMEN* . Recuperado el 06 de 08 de 2013, de [http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis\\_documental\\_indizaci%C3%B3n\\_y\\_resumen.pdf](http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf)

Cuervo, J. I. (11 al 17 de Marzo de 2007). Nuestros propios holocaustos. *El Espectador* .

Defensoría del Pueblo. (13 de Julio de 2013). *Defensoría del Pueblo*. Recuperado el 09 de Noviembre de 2013, de [http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/20\\_informe\\_congreso\\_l.pdf](http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/20_informe_congreso_l.pdf)

Del rio, A., & Ortega, F. (2012). VIII Seminario sobre Seguridad y Defensa. Bandas Criminales: Seguridad, Paramilitarismo y Crimen Organizado en Colombia. *Relatoria VIII Seminario sobre Seguridad y Defensa. Bandas Criminales: Seguridad,*

*Paramilitarismo y Crimen Organizado en Colombia*. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia.

Duncan, G. (2006). *Los señores de la guerra De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*. Bogotá: Planeta.

Echandía C., C. (2013). *Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales*. Bogotá: Fundación Ideas Para La Paz.

Echandía Castilla, C. (2013). *Narcotráfico: genesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.

Echeverría, R. (2003). El lenguaje del poder. En R. Echeverría, *Ontología del Lenguaje* (pág. 223). Santiago de Chile: Lom Ediciones S.A.

El espectador. (17 al 23 de Diciembre de 2006). Veinte años sin Guillermo cano. *El espectador* , pág. 16 A.

El Pais. (S.F.). *El País*. Recuperado el 11 de Enero de 2014, de <http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Abril192010/sacerdoteparamilitar.html>

Elster, J. (2006). *Rendición de cuentas, La Justicia Transicional en Perspectiva Histórica*. Buenos Aires: Katz Editores.

*Enlazando Alternativas, Red Biregional Europa - America Latina y el Caribe* . (23 de 10 de 2008). Recuperado el 05 de 02 de 2014, de a los jefes paramilitares que cometieron delitos en Colombia y que serán juzgados en Estados Unidos.

Fajardo Arturo, L. A. (S.F.). La Ley de Justicia y Paz, análisis constitucional, competencia de la jurisdicción internacional y efectos en el desarrollo humano. *Civilizar. Revista electrónica de difusión científica - Universidad Sergio Arboleda Bogotá* , S.P.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo. (s.f.). *Resistencia*. Recuperado el 09 de Noviembre de 2013, de <http://farc.narod.ru/magazine/30/12s.html>

Fundación ideas para la paz. (2007). *Siguiendo el conflicto: hechos y análisis*. Bogotá: Fundación ideas para la paz.

Galeano, E. (16 de Julio de 2013). *Corporación Nuevo Arco Iris*. Recuperado el 09 de Noviembre de 2013, de <http://www.arcoiris.com.co/2013/07/galeano-llama-a-terminar-con-la-violencia-en-colombia-nacida-de-la-injusticia-social/>

García Segura, H. (15 al 21 de Octubre de 2006). Los vacíos y ambigüedades en la ley de desarrollo rural. *El Espectador* , pág. 2A.

García, D. (10 de Marzo de 2009). Mal llamadas "Bandas Emergentes". *El Espectador* .

González, C. (2011). *Quinto informe sobre narcoparamilitares en 2010*. Bogotá: Indepaz.

Granada, S., Restrepo, J., & Tobón, A. (2009). Neoparamilitarismo en Colombia: una herramienta conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del conflicto armado colombiano. En C. d. conflicto, *Guerra y Violencias en Colombia. Herramientas e Interpretaciones* (págs. 467 - 499). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Guerrero, J. (1991). *Los años del olvido*. Colombia: Tercer mundo editores.

Iguarán, M. (2005). Justicia es también conformidad. *Paramilitarismo, desmovilización y política ¿qué va a pasar con las AUC?*, (págs. 02-17). Bogotá.

Jimeno Santoyo, G. (del 25 al 1 de Junio - Julio de 2006). Retorno Campesino al Alto Ariari. *El Espectador*, pág. 7A.

Kalyvas, S., & Arjona, A. Paramilitarismo: Una perspectiva teórica. En W. R. otros, *El poder paramilitar* (págs. 25 - 44). Planeta.

*La Verdad Abierta*. (1 de Octubre de 1993). Recuperado el 12 de Enero de 2014, de Laverdadabierta.com: [www.verdadabierta.com/component/content/article/483-timeline/5146-aparicion-de-los-doce-apostoles](http://www.verdadabierta.com/component/content/article/483-timeline/5146-aparicion-de-los-doce-apostoles)

Lopez G, J. C. (31 - 6 de Diciembre- Enero de 2007). La exhumación de fosas. *El Espectador*, pág. 3 A.

Lopez, C., & Sevillano, O. (S.F.). *Balance Político de la Parapolítica*. Bogotá: Corporación Nuevo Arcoiris.

Marín Ortiz, I. (14 de 09 de 2007). *Grupos paramilitares y delito político en Colombia*. Corporación Viva la ciudadanía.

Martínez Álvarez, A. (Enero de 2010). Desmovilización 'para' TV: Análisis de la calidad periodística del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en noticieros CM& y RCN. Bogotá: Universidad Javeriana.

Maturana, H. (1992). *El sentido de lo humano*. Santiago: Hachette.

Maturana, H. (1997). *La objetividad un argumento para obligar*. Chile: Dolmen ediciones S.A.

Medina Gallego, C. (24 de mayo de 2010 ). *Carlos Medina Gallego*. Recuperado el 29 de abril de 2014, de [http://www.camega.org/inicio/index.php?option=com\\_content&view=article&id=88:carlos-medina-gallego&catid=40:articuloscarlos&Itemid=72](http://www.camega.org/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=88:carlos-medina-gallego&catid=40:articuloscarlos&Itemid=72)

Medina G, C. (29 de Mayo de 2007). *Rebelión*. Recuperado el 29 de Abril de 2014, de <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=51484>

Medina Gutierrez, F. A. (2009). El conflicto armado en Colombia, nuevas tendencias, viejos sufrimientos . *Misión jurídica. Revista de Derecho y Ciencias Sociales* , 162-177.

Mnisterio de Defensa. (24 de Diciembre de 1965). *DECRETO LEGISLATIVO 3398 DE 1965*. Recuperado el 20 de Abril de 2014, de [http://www.cgfm.mil.co/CGFMPortal/Cgfm\\_files/Media/File/pdf/Normatividad%20Leyes/DECRETO%20LEGISLATIVO%203398%20DE%201965.pdf](http://www.cgfm.mil.co/CGFMPortal/Cgfm_files/Media/File/pdf/Normatividad%20Leyes/DECRETO%20LEGISLATIVO%203398%20DE%201965.pdf)

Mision Observacion Electoral & Corporación Nuevo Arcoiris. (1997 - 2007). *Monografía político electoral Departamento de Boyaca* . Bogota, Colombia.

Molano , A. B. (2006). Aproximaciones Historicas al Paramilitarismo. *Jornadas internacionales QUIEN NO TIENEN MEMORIA NO TIENE FUTURO*, (págs. 9.1 - 9.14). Barcelona.

Molano Bravo, A. (4 al 10 de Febrero de 2007). De mal en peor. *El espectador* , pág. 16 A.

Molano Bravo, A. (17 de 02 de 2007). Desapareciendo Desaparecidos. *El espectador* , pág. 16 A.

Molano, A. (11 al 17 de Marzo de 2007). La tripas de la comoda mayoría. *El Espectador* , pág. 16A.

Montaño, C. (2007). Trabajo social e intervención: la politizacion de la accion profesional. *VII Coloquio Internacional de Estudiantes de Trabajo Social Desarrollo, Política Social e Intervención Profesional. Universidad del Altiplano, Puno, Perú*, (págs. 1 - 18). Perú.

Morales, J. (S.F.). *Colombia un país feliz para el mundo exterior*. Recuperado el 10 de Enero de 2014, de <http://jusseffmoralese.wix.com/guerrillasencolombia>

Nullvalue. (14 de Julio de 1997). *EL TIEMPO.COM*. Recuperado el 09 de Noviembre de 2013, de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-605402>

Observatorio de conflicto armado & corporación Nuevo Arcoiris . (2011). - *Política y violencia en 2011 - las cuentas no son tan alegres*.

Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración. (2009). *Dinámicas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)* . Bogotá D.C : Universidad Nacional de Colombia & Embajada de suecia .

Observatorio del Conflicto Armado. (2007). *Los caminos de la alianza entre los paramilitares y los políticos*. Bogotá.

Ocampo López , J. (05 de 05 de 2013). *Biblioteca virtual, Biblioteca luis angel arango*. (B. I. Biblioteca virtual, Editor, & B. g. lectores, Productor) Obtenido de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/ospimari.htm>

Pécaut, D. (1986). De las violencias a la violencia. En G. Sánchez, & R. Peñaranda, *Pasado y presente de la violencia en Colombia* (págs. 183- 194). Bogotá: Fondo editorial CEREC.

Pecaut, D. (1987). *Orden y violencia: Colombia 1930 - 1953*. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo.

Perez Gomez, C. C. (s.f.). Los Derechos HUmanos "una tarea pedagogica de la profesion de Trabajo Social". *Tendencias y retos* , 53 - 61.

Pérez Guerra , A., & Ruiz Espinoza, P. (23 de noviembre de 2006). *Colectivo de abogados*. Recuperado el 11 de 10 de 2013, de <http://www.colectivodeabogados.org/ESCUELA-DE-LAS-AMERICAS-UNA>

Presidencia de la republica & Oficina alto comisionado para la paz . (S.F ). *Proceso de paz con las autodefensas* .

Presidente de la República de Colombia, Belisario Betancur. (10 de Mayo de 1984). *DECRETO 1038 DE 1984*. Recuperado el 20 de Abril de 2014, de [ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1984/decreto\\_1038\\_1984.html](ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1984/decreto_1038_1984.html)

Presidente de la republica Virgilio Barco. (19 de abril de 1989). Decreto 815 de 1989. Bogota, Colombia.

Prieto, C. A. (2013). *Las Bacrim y el crimen organizado en colombia*. Fundación Ideas para la Paz.

Rangel, A. (2005). ¿A donde van los paramilitares? En F. s. democracia, *El poder paramilitar* (pág. S.P.). Planeta.

Real Academia Española. (2001). *Diccionario Real Academia Española*, 22ª Edición. Recuperado el 09 de Noviembre de 2013, de <http://lema.rae.es/drae/?val=PENSAMIENTO+CONSERVADOR>

Real Academia Española. (2014). *Real Acadmia Española*. Recuperado el 14 de Enero de 2014, de <http://lema.rae.es/drae/?val=parapolicial>

Red de hermandad y solidaridad en Colombia. (s.f.). *REDHER*. Recuperado el 28 de Abril de 2014, de <http://www.redcolombia.org/index.php/regiones/centro/eje-cafetero/663-la-colosa-y-a-la-multinacional-anglo-gold-ashanti.html>

Redacción judicial . (03 al 09 de septiembre de 2006). ¿que hay de los jefes paras en la fiscalia? *El Espectador* , pág. 9A.

Redacción Justicia. (12 de Octubre de 2013). *Así cayo la "Viuda negra" del clan castaño*. Obtenido de El Tiempo.Com: [http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW\\_NOTA\\_INTERIOR-13119521.html](http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13119521.html)

Restrepo, J. D. (20 al 30 de Diembre de 2006). El drama de un crimen anunciado. *El Espectador* , pág. 5.

Restrepo, J. D. (05 de 02 de 2007). *Revista semana*. Recuperado el 10 de 01 de 2014, de <http://www.semana.com/Imprimir.aspx?idItem=83366>

Revista Semana. (15 de Abril de 2013). *Revista Semana* . Recuperado el 17 de Septiembre de 2013, de Las violentas cifras de las bacrim: <http://www.semana.com/nacion/articulo/las-violentas-cifras-bacrim/340170-3>

Revista Semana. (08 de Febrero de 2014). *seis millones de víctimas deja el conflicto en Colombia*. Recuperado el 22 de Febrero de 2014, de Revista Semana: <http://www.semana.com/nacion/articulo/victimas-del-conflicto-armado-en-colombia/376494-3>

Rey Carvajal, N. (2003). *Los medios de comunicación y política en Colombia, matices de una relacion problematica, el caso del congreso de la republica*. Bogotá: universidad de los andes, facultad de ciencias sociales, departamento de Ciencias Políticas.

Reyes Quesada, L. F. (2012). *El Desmonte Parcial de las AUC y la Reconfiguración del Fenómeno Paramilitar*. Bogota , Colombia : Universidad Nacional de Colombia.

Reyes Quezada, L. F. (2012). *El desmonte parcial de las AUC y la reconfiguración del fenómeno paramilitar*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Reyzábal, M. V. (2002). *Didáctica de los discursos: la publicidad y la propaganda*. Madrid: Editorial La Muralla.

Rivas Nieto, P., & Rey García , P. (Enero - Mayo de 2008). Las autodefensas y el Paramilitarismo en Colombia (1964 - 2006). *CONfines* , 43 - 52.

Rodríguez Gómez, D., & Valdeoriola Roquet, J. (S.F). *Metodología de la investigación. Material docente de la UOC*. Recuperado el 28 de Abril de 2014, de

<http://es.scribd.com/doc/169016555/Metodologia-de-la-investigacion-David-Rodriguez-Jordi-Valaldeoriola>

Santana Rodriguez, P. (24 al 1 de febrero/ marzo de 2012). *Bandas criminales y ley de víctimas*. Recuperado el 09 de 10 de 2013, de Semanario virtual caja de herramientas: <http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0292/articulo01.html>

Sartori, G. (1998). *Homo videns La sociedad teledirigida*. España: Santillana S.A Taurus.

Thompson, J. (2002). *Ideología y cultura moderna Teoría crítica social en la era de comunicación de masas*. Mexico: Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.

Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza del Comité de Derechos Humanos. (2012). *Reporte Internacional Anual 2012 sobre la infancia afectada por la Guerra: Los dos Congos de la Guerra*. Madrid: Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza del Comité de Derechos Humanos.

Ulloque Rodriguez, M. (16 de 01 de 2009). Analisis de la reparacion integral desde el marco de la ley 975 de 2005 sobre justicia y paz, estudio de caso (Asociacion de Trabajadores de Campesinos de Carare - atcc-). Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana.

Unidad de paz . (04 - 10 de 02 de 2007). "Yolanda solo quería que se hiciera justicia". *El espectador* , pág. 7A.

Unidad de paz. (17 -23 de Septiembre de 2006). "autodefensas fueron un error". *El Espectador* , pág. 12 A.

Unidad de paz. (10 a 16 de Diciembre de 2006). A nadie le sirve el fin del proceso. *El espectador* , pág. 14 A.

Unidad de paz. (03 de 02 de 2007). El vuelo de las aguilas negras. *EL ESPECTADOR* , pág. 6A.

Uprimny, R., Fuentes, A., Botero, C., & Jaramillo, J. F. (2006). *Libertad de Prensa y derechos fundamentales. Analisis de la jurisprudencia constitucional en Colombia (1992 - 2005)*. Bogotá: Andiaros, Fundación Konrad Adenauer, DeJusticia.

Valencia, L. (2007). Los caminos de la alianza entre los paramilitares y los políticos León Valencia y Observatorio del Conflicto Armado. En M. A. Alonso Espinal,

*Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos* (págs. 11 - 58). Bogotá D.C: Torre Grafica.

Valencia, L. (01 de Febrero de 2014). *Semana*. Recuperado el 5 de Febrero de 2014, de La Drummond contaminadora, paramilitar y tramposa: <http://www.semana.com/opinion/articulo/leon-valencia-la-drummond-contaminadora-paramilitar-tramposa/375750-3>

Vargas Velasquez, A. (2010). la influencia de los poderes ilegales en la política colombiana. *nueva sociedad* , 156- 170.

Velásquez Rivera, E. D. (2007). historia del paramilitarismo en Colombia. 134-153.

VerdadAbierta.com. (23 de Octubre de 2012). *Verdad Abierta* . Recuperado el 12 de Enero de 2014, de <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/4276-las-sumas-y-restas-de-la-justicia-frente-a-la-parapolitica>